

Laboratorio. Estudios sobre cambio estructural y desigualdad social (Año X no. 22 invierno 2008)	Título
Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA - Autor;	Autor(es)
Buenos Aires	Lugar
Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA	Editorial/Editor
2008	Fecha
	Colección
Conflictos de tierras; Distribución del ingreso; Conflictos sociales rurales; Soja; Sociología; Sector rural; Capitalismo; Clases sociales; Argentina;	Temas
Revista	Tipo de documento
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Argentina/iigg-uba/20120626030815/lavbo22.pdf	URL
Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.0 Genérica http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es	Licencia

Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO
<http://biblioteca.clacso.edu.ar>

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)
Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)
www.clacso.edu.ar



Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
 Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
 Latin American Council of Social Sciences



Laboratorio

Estudios sobre Cambio Estructural y Desigualdad Social

Año 10 • Número 22 • Invierno 2008

Soja y agronegocios en la Argentina: la crisis del modelo

Miguel Teubal

Capitalismo agrario y sojización en la pampa Argentina. Las razones del desalojo laboral.

Irma Lorena Acosta Reveles

Distribuir y redistribuir: he ahí la cuestión

Javier Lindenboim

La Argentina y la democratización de la tierra

Norma Giarracca

La soja de la discordia. Los sentidos y estrategias en la movilización de la pequeño burguesía.

Marcelo Gomez

Movimiento campesino y coyuntura agraria regional.

Promediando el 2008

Pablo Díaz

La conflictividad en los espacios rurales de Argentina

Diego Domínguez y Pablo Sabatino

La conformación de un imaginario de «Modelo de País» en el discurso presidencial de CFK. El lugar del sector rural

Claudia C. Couso

El problema de las retenciones: una visión crítica

Martín Trombetta



Cambio Estructural y Desigualdad Social (CEyDS) / Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

Autoridades

Facultad de Ciencias Sociales

Decano

Federico Schuster

Vicedecano

Damián Loreti

Secretario Académico

Jorge Lulo

Secretario de Cultura y Extensión Universitaria

Javier Bráncoli

Secretario de Gestión Institucional

Diego de Charras

Secretario de Investigación

Ricardo Sidicaro

Secretario de Hacienda

Bruno Opromolla

Secretaria de Posgrado

Pablo Alabarces

Carrera de Sociología

Director: Lucas Rubinich

Instituto de Investigaciones Gino Germani

Directora: Carolina Mera

Staff

Director del Programa (CEyDS):

Agustín Salvia

Secretario Editorial:

Ernesto Philipp

Editores:

Astor Massetti

Eduardo Chávez Molina

Eduardo Donza

Gabriel Calvi

ISSN: 1515-6370

Colaboraciones y Comentarios:

Informe Lavboratorio, Instituto de Investigaciones Gino Germani,

Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

Uriburu 950 6° piso oficina 21, Cdad. de Buenos Aires

(1114). e-mail: lavbor@mail.fsoc.uba.ar

Presentación

El Informe de Coyuntura Laboral Lavboratorio es una publicación del Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social, Instituto de Investigaciones Gino Germani / Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Su producción es posible gracias al trabajo de profesores, becarios, docentes, graduados y estudiantes, en el marco de los proyectos vigentes FONCyT BID 1201/OC-AR PICT CONICET 09640 y el proyecto UBACyT 108

2



Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Sociales

Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social

Carrera de Sociología

Instituto de Investigaciones Gino Germani

Esta publicación está disponible en:

<http://lavboratorio.fsoc.uba.ar>

Editorial

Desde **Laboratorio** creemos que si bien vista desde diciembre de 2001 la Argentina actual aparece como una completa desconocida. Un camino, con no pocos tropiezos, ha sido recorrido para poder cubrir en gran parte la inmediatez de las más urgentes necesidades sociales de los grupos más vulnerables.

Ahora esto no terminado con la alta conflictividad de la Argentina, pero sí han cambiado los sujetos de ésta, incorporándose nuevos actores con sus intereses y sus formas de actuar propias. Así es posible entender la irrupción del conflicto desatado en torno a las retenciones móviles, ya no son los mismos actores que en el 2001 los que llevaron adelante una protesta por la redistribución del ingreso, no fueron los sectores excluidos los que bloquearon rutas para reclamar un cambio en la política económica. Ahora, también pensamos que este conflicto, que tuvo su momento culminante cuando el Vicepresidente de la Nación con su voto «no positivo» desempató la votación del senado sobre las retenciones móviles, está lejos de haber terminado.

Desde **Laboratorio** creemos que la conflictividad desatada en torno a las retenciones móviles, es un exponente más de la lucha por la distribución del ingreso en la Argentina, en fin, un capítulo más en la «lucha de clases». Es por ello, porque creemos que el conflicto «gobierno vs. campo» está lejos de haber terminado que hemos elaborado este número especial en torno a esta problemática. Un número dedicado, centralmente, a la cuestión rural, algo que va más allá de la discusión por la movilidad o no de las retenciones a los productos agropecuarios.

Esperamos que este número pueda contribuir al debate en torno a la cuestión de fondo que se trasluce en este conflicto, pero que queda velado, la distribución del ingreso en la Argentina, centrandolo en la renta agraria, la distribución de la tierra, el lugar del «campo» en el actual proyecto y discurso del gobierno, entre otros temas.

Es en este marco, en el que libres de posiciones cerradas, intentando librarnos de los prejuicios, pensamos que sigue siendo válido repetir la consigna de la editorial anterior: «avanzar en respuestas y, también, plantearse nuevos interrogantes, no es sólo una cuestión teórica o metodológica si no que contribuirá no sólo a comprender mejor estos fenómenos sino a avanzar en acciones y políticas mejor orientadas en la promoción de una mayor equidad y una mejor distribución del ingreso, y esa es una contribución que desde el mundo académico podemos y debemos dar.»

Los Editores

Indice

Soja y agronegocios en la Argentina: la crisis del modelo

Miguel Teubal

Página: 5

Capitalismo agrario y sojización en la pampa Argentina. Las razones del desalojo laboral.

Irma Lorena Acosta Reveles

Página: 8

Distribuir y redistribuir: he ahí la cuestión

Javier Lindenboim

Página: 13

La Argentina y la democratización de la tierra

Norma Giarracca

Página: 18

La soja de la discordia. Los sentidos y estrategias en la movilización de la pequeña burguesía.

Marcelo Gomez

Página: 22

4

Movimiento campesino y coyuntura agraria regional. Promediando el 2008

Pablo Díaz

Página: 36

La conflictividad en los espacios rurales de Argentina

Diego Domínguez y Pablo Sabatino

Página: 38

La conformación de un imaginario de «Modelo de País» en el discurso presidencial de CFK. El lugar del sector rural

Claudia C. Couso

Página: 45

El problema de las retenciones: una visión crítica

Martín Trombetta

Página: 51

Introducción

Tuvo que producirse el conflicto agrario del 2008 para que la «cuestión agraria» y el «modelo sojero» que la involucra fueran puestos sobre la mesa del debate. En efecto, así como la crisis del 2001/2002, en especial la rebelión del 19/20 de diciembre del 2001 y la consiguiente devaluación y el default sobre la deuda externa pusieron en jaque la aplicación del modelo neoliberal en el país, el paro agrario de estos últimos meses trajo a la luz aspectos esenciales del modelo agrario actualmente en vigencia, aspectos que durante muchos años fueron invisibilizados para gran parte de la opinión pública.

Sin embargo, el conflicto en sí entre el «campo» (en realidad una parte del campo) y el gobierno por las retenciones no es necesariamente un conflicto en torno del «modelo agrario»: ni la «mesa de enlace», ni el gobierno cuestionan seriamente el modelo sojero o del agronegocio actualmente en vigencia. El conflicto tuvo que ver con la lucha por las retenciones, con cómo se reparten las rentas generadas por el alza de los precios internacionales de los commodities entre cada una de las partes. Y si bien se planteó la necesidad de tomar en consideración a medianos y pequeños productores (fundamentalmente sojeros) y de considerar el problema de la leche, la carne y las economías regionales, ninguno de estos aspectos involucran una consideración crítica sobre aspectos esenciales del modelo. Ello es grave porque es difícil vislumbrar una política de redistribución de los ingresos en el nivel nacional como la que, por lo menos en la retórica, propicia el gobierno sin que se consideren cambios esenciales en la conformación del modelo agrario.

En este trabajo nos proponemos presentar algunos de los elementos que describen al modelo del agronegocio en cuestión. No cabe duda que tiene que ver con la extrema sojización que se produjo desde los años '70 a esta parte, y especialmente desde mediados de los años '90 cuando se aprueba la difusión de la soja transgénica en el país. El modelo, como señalamos en diversos trabajos, tiene que ver con políticas neoliberales aplicadas al sector agropecuario y al sistema agroalimentario en su conjunto. Tras presentar algunos datos que describen la importancia de la sojización que se manifiesta en el país nos proponemos mostrar cómo este proceso se relaciona con el sistema de agronegocios que se fue conformando en estos años, y cuáles son algunos de los principales actores económicos que lo integran. Por último planteamos algunos de los efectos de este modelo que consideramos no han sido lo suficientemente explicitados en el debate que se ha presentado en meses recientes.

Neoliberalismo y sector agrario

Desde los años '70 a esta parte se produce un intenso proceso de sojización en el país, basado en la preeminencia de la producción de soja en detrimento de otros productos agropecuarios. Se trata de un modelo que adquiere un cariz muy especial a mediados de los '90 cuando se libera al mercado la soja transgénica. A partir de entonces la Argentina se transforma en uno de los principales países del Tercer

Mundo en el que se cultivan transgénicos.

La soja en nuestro país crece en forma espectacular. La producción de esta oleaginosa pasa de 3,7 millones de toneladas en 1980, a 11 millones en 1996/97 y a 47,5 millones en 2006/2007. Fue así como pasó de representar el 10,6% de la producción granaria total en 1980/81 a más del 50% en 2006/2007. Entre 1996/97 y 2006/2007 91,7% del aumento de la producción de granos en el país correspondió a la soja. El auge de la soja se manifiesta también en la superficie destinada a este cultivo. Si bien cuando se libera al mercado la semilla transgénica en el año 1996 se destinaba 20% de la superficie granaria total a este cultivo, en la actualidad más del 53% del territorio destinado a los granos se destina al mismo. Asimismo, el cultivo de la soja es en su casi totalidad transgénica, y más del 90% de su producción se exporta. Tras la devaluación del 2002 y el alza de los precios internacionales de la soja y de otros commodities se produce un aumento continuo del valor total de las exportaciones de éstos items. En este último año se exportó aceite de soja por 4.275 millones de dólares, harina y pellets por 5.762 millones y poroto de soja por 3.428 millones; todos estos productos sumaron en total 13.602 millones de dólares representando el 24,4% del valor total de las exportaciones de la Argentina. El valor de las las exportaciones de soja en 2007 aumentó con relación a 2006 en un 52,3%; este aumento se debió no sólo a mayores volúmenes exportados sino fundamentalmente al alza significativo de sus precios. Otros commodities también se orientaron en forma creciente a la exportación. En el año 2007 el trigo representó 4,3% de las exportaciones totales (en el 2002 representaba el 3,6%), el maíz el 4,1%, la carne el 2,7% y los productos láceos el 1,2%.

Dichos procesos operan en el marco de arreglos institucionales que facilitaron la consolidación de un sistema de agronegocios en el país. Se trata de un sistema que propicia el control por parte de grandes empresas transnacionales de sectores clave del sistema agroalimentario argentino: la provisión de semillas e insumos, la compra de tierras en algunas regiones, el control del procesamiento industrial (la industria alimenticia) y la comercialización de la producción, tanto para el mercado interno (super e hipermercados) como para la exportación. Estas empresas asumen una lógica muy distinta a la lógica agroindustrial de antaño. Como señala Giarracca, «este era un país de chacareros, de cooperativas, de industrias nacionales, de cadenas agroindustriales, tanto en los frigoríficos como en las harinas: Terrabusi o Bagley, por ejemplo eran algunas de las viejas empresas nacionales que estaban en la cadena agroindustrial y les iba bien». Había una lógica orientada a exportar pero también de producir alimentos orientados al consumo popular masivo.

Todo ello comenzó a cambiar durante la dictadura militar, y se enmarca en la globalización y el predominio del capital financiero: surge un nuevo régimen de acumulación para el agro y el sistema agroalimentario en su conjunto en el que

opera la lógica de los agronegocios. Estas grandes empresas transnacionales o transnacionalizadas a que hacemos referencia van definiendo cada vez más aspectos esenciales de la política agropecuaria. Un hito importante es el decreto de desregulación del año 1991 que eliminó de cuajo todas las juntas reguladoras de la actividad agropecuaria – la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, entre otras – que operaban desde los años '30 a esta parte. De golpe el agro argentino se transformó en uno de los más desregulados del mundo sujeto como ningún otro a los vaivenes de la economía mundial. Se trata de producir commodities orientados a la exportación, basándose en «tecnología de punta» y en grandes unidades productivas. Debían desaparecer 200.000 explotaciones agropecuarias consideradas ineficientes. Durante la dictadura el banco de semillas del INTA se desmontó, y ese conocimiento pasó a las corporaciones que llegaban al país. Se abrió el banco genético de la biodiversidad y se empezó a compartir con las multinacionales. Se manifiestan nuevas revoluciones tecnológicas, primero los híbridos, luego los transgénicos, ambos dominadas por grandes empresas. El productor agropecuario que siempre reproducía su propia semilla ahora se ve inducido a comprarla año tras año a las transnacionales. Además, son semillas que van acompañadas por paquetes tecnológicos, por ejemplo, la siembra directa, que requieren grandes cantidades de agrotóxicos para matar la maleza, y maquinaria y equipo no siempre accesibles para medianos y pequeños productores. Se flexibilizan las leyes de arrendamiento mediante el nuevo contrato por una cosecha, y surge la figura del contratista, con o sin tierra propia. Se privatizan los silos y los puertos y se va configurando un nuevo complejo agroexportador dominado por las grandes exportadoras, que tallan cada vez más fuerte en el panorama agrario nacional. Luego están los grandes productores agropecuarios, y surgen los pool de siembra, fideicomisos que arriendan y contratan a contratistas para llevar a cabo el proceso productivo.

En el resto del sistema agroalimentario la industria alimentaria se extranjeriza en su casi totalidad y crecen significativamente los supermercados e hipermercados, en donde el capital extranjero talla fuerte.

Actores económicos y sociales del agronegocio

Tras la crisis y devaluación del 2002 y el boom de los precios de los commodities en los mercados internacionales se intensifica el modelo del agronegocio y la creciente sojización del país. Se intensifica el accionar de los pool de siembra, de los grandes sojeros, y cobra mayor fuerza aun el modelo agroexportador liderado por grandes exportadoras aceiteras y cerealeras.

Quizás uno de los actores económicos más importantes del modelo lo constituyen estas grandes exportadoras lideradas por Cargill, Bunge Argentina, LCD Argentina (Dreyfus); Aceitera General Deheza, y Nidera, entre otras. Paulatinamente aumentan su posición en la escala de empresas exportadoras. En la actualidad son empresas que se encuentran entre las 10 principales exportadoras del país (acompañadas por YPF-Repsol, Minera Alumbrera y Teneris Siderca). En el 2007 exportaron por un total de 14 mil millones de dólares 26,6 por ciento de las exportaciones totales. Las aceiteras y cerealeras son demandadas por el fisco por una presunta evasión de 1783 millones de dólares por retenciones no pagadas. Uno de los nuevos actores económicos que aparecen en el panorama agrario del país y que se vinculan con el sector

financiero son los pool de siembra. Estas arrancan a principios de los noventa. Al comienzo sólo integran a productores agropecuarios que necesitaban «ganar escala para sobrevivir». Según informantes del sector, con el boom del campo (y el alza en las cotizaciones internacionales de los granos) los pool de siembra «se transformaron en una alternativa cada vez más atrayente para una serie de inversores,» inclusive extra agropecuarios. En los últimos años, se refinó el marco legal y su seguridad jurídica a través de la figura del fideicomiso. Es difícil saber la cantidad de hectáreas que se trabajan bajo esta forma de organización agroempresaria. En un informe realizado por Aacrea hace algunos años, se estimaba que la superficie controlada por los pool de siembra se había quintuplicado (de 400.000 hectáreas en 1997, a 2 millones en el 2002). Sin embargo no existen datos fehacientes al respecto, aunque puede presumirse que a raíz del boom de la soja estos fideicomisos se habrían multiplicado substancialmente.

Por otra parte, hay pool de siembra y hay fondos de inversión que son más grandes que los pool de siembra. Los grandes productores, como Grobocopatel, también tienen sus pool de siembra. Hay muchos operadores financieros que reúnen fondos de diversas fuentes para invertir en el campo y que actúan anónimamente. «El que antes apostaba a la renta financiera, ahora lo hace en el campo» (Giarracca, 2008).

Los pool de siembra se combinan con el nuevo contratismo (los contratos por una cosecha) que cobra intensidad en años recientes. En este contexto un nuevo actor social y económico es el rentista. Muchas veces tiene pocas hectáreas, y poco capital para tecnología o para comprar el equipo necesario para plantar soja. Como consecuencia arrienda su tierra y se va a la ciudad. O sea, no sólo son los grandes los que arriendan parte de su tierra para plantar soja, también están los pequeños que se transforman en rentistas, contribuyendo de este modo a que nuestro agro se transforme en una «agricultura sin agricultores». Tanto los pool de siembra como las grandes empresas agropecuarias que se dedican de lleno a este negocio, son también algunos de los principales beneficiarios del boom de la soja de los últimos tiempos.

Tomemos el caso de Los Grobo. Según información periodística esta empresa posee 17.700 ha propias, pero cultiva en total más de 150 mil. Acopia un millón y medio de toneladas y comercializa 112 mil de harina. En su conjunto las empresas del holding facturan cerca de 200 millones de dólares anuales. Asimismo, los Grobo está presente en Uruguay, Paraguay y Brasil. El objetivo es sembrar cerca de 400 mil ha en el Mercosur (Página12, 29/3/08). Gustavo Grobocopatel afirmó que en Argentina hay muchos productores agropecuarios más grandes que él: «los cinco o seis productores más grandes de la Argentina producen en 500.000 hectáreas» (Clarín, 08/07/08). Otras grandes empresas son: Adecoagro (es la empresa del magnate George Soros que tiene 225.000 hectáreas en Argentina, Uruguay y Brasil), o El Tejar (trabaja más de 150.000 hectáreas en estos países). A continuación se presenta un listado algunas grandes empresas o pool de siembra (no todos grandes) recopilados por Neil P. Richardson de la Universidad de California en base a un listado de La Nación. Richardson también entrevistó a muchos de los directivos de estas empresas.²

Los Grobo; Cresud (IRSA, Elstain); Adecoagro; Adeco Agropecuaria SRL (Soros); Calyx Agro (Dreyfus); El Tejar (Oscar Alvarado); MSU: Manuel Santos de Uribebarrea; Olmedo Agropecuaria (Alfredo Olmedo); Estudio Cazenave;

Santiago Casares y Eduardo Serantes, responsables del Fondo Agrícola de Inversión Directa (FAID); Nidera; AGD; Rodríguez-Fogante, La Redención-Sofro; (Marcos Rodríguez, Rogelio Fogante, Germán Fogante); Liag Argentina, de la familia australiana Kahlbetzer; Compañía Argentina de Granos, de Adelaida María; Luis Riopedre, de 9 de Julio; Alfonso Cañón, de Venado Tuerto; Roberto Peiretti, de Monte Buey; Mario Nardone, de Santa Fe; Víctor Trucco, de Santa Fe; Gastón Fernández Palma, del sudeste de la provincia de Buenos Aires; Administración Duhau; Fernando Rojas Pano; José Borleto, del centro de Córdoba; Omar Grazioli, productor y contratista de Inrville; Ignacio Lartirigoyen; La Viznaga. Juan Avellaneda, sur de Santa Fe; Oscar Faccioli, Espiga SRL; SA (fideicomiso) Openagro Darío Genua, director; El Grupo Ceres Tolvas. Fondo: Siembras Asociadas; Familia Lacau; Agrarius.

Por último, otro de los actores económicos del modelo lo constituye la Monsanto y la semilleras asociadas a esta empresa. En el conflicto actual del campo no participó. Pero tiene pendiente fuertes intereses en torno al cobro de los royalties de la semilla transgénica.

Efectos del modelo, los excluidos.

A lo largo del conflicto agrario, y en los debates que hubo tanto en el Congreso como en los medios, muchos aspectos vinculados al modelo sojero salieron a la luz. Pero no siempre se consideró en el debate los efectos nocivos del mismo. Se siguió haciendo proyecciones a futuro respecto de la oportunidad que podría significar para nuestro país, el responder en el futuro a una creciente demanda internacional de commodities de exportación, incluyendo la soja. Pero salvo algunas presentaciones, persiste la sensación de que fueron pocas las intervenciones que presentaron un análisis crítico del modelo. Y que los efectos negativos, tanto económicos, sociales, culturales, medioambientales y sanitarios, del mismo no fueron considerados como los suficientemente importantes como para impulsar una modificación radical del mismo. A continuación presentamos algunas acotaciones referidas al modelo.

En primer lugar, el boom de la soja transgénica ha causado la especialización del país en la producción y exportación de unos pocos productos primarios sujetándolo, como en ningún período anterior, a los vaivenes de la economía mundial. De haber sido un importante proveedor de carnes y cereales a la economía mundial durante gran parte del siglo XX, y siendo autosuficiente de los alimentos que consumía su población, en la actualidad la Argentina, al propender hacia el monocultivo de la soja, tiende a perder esa calidad. La doble cosecha trigo-soja, ha desplazado a la ganadería como actividad de rotación incluyendo a los tambos y a gran parte de los cultivos industriales del interior. Todo ello contribuye a deteriorar la seguridad alimentaria. En efecto, la superficie destinada a la producción sojera aumenta sistemáticamente año tras año, la de otros cultivos no tanto, o cae o se estanca. Esto ocurre con la producción de frutales y el algodón mientras que la cantidad de tambos existentes en el país en pocos años cayó de 30.000 a la mitad.

Notas:

¹ Economista, profesor consulto de la UBA, Investigador del CONICET

² Neal Richardson, Department of Political Science; University of California, Berkeley; npr@berkeley.edu; http://npr.berkeley.edu.

Bibliografía

Giarracca, Norma (2008), «Del agronegocio a las retenciones. Otra gramática sobre el conflicto». Entrevista publicada en la revista Mu, La vaca. 17/06/2008.

Giarracca, Norma y Teubal, Miguel (Coordinadores) (2005), El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad. Buenos Aires, Alianza Editorial.

Teubal, Miguel (2006), «Expansión del modelo sojero en la Argentina. De la producción de alimentos a los commodities. Realidad Económica, N° 220, mayo-junio.

En segundo lugar, el crecimiento de la soja transgénica ha originado un fenómeno de dependencia del país respecto de las grandes empresas multinacionales. Esto se evidencia en el dominio que ejercen Monsanto y Novartis, que no sólo proveen la semilla, sino también el paquete tecnológico y los agroquímicos para el cultivo de la soja transgénica. En 2003 el glifosato (herbicida fundamental de la tecnología utilizada) facturó en Argentina ventas por 350 millones de dólares, 33% más que en el 2000. Asimismo, Monsanto viene adoptando una serie de acciones para hacer cumplir supuestos derechos de propiedad sobre la patente de la semilla de soja transgénica, que van más allá de lo que cobra por la venta de la semilla. Exige en la actualidad el cobro a los agricultores de las «regalías extendidas» (2 dólares por cada bolsa de 50 Kg sobre las semillas que guardan para uso propio). En otras áreas del sistema agroalimentario, las corporaciones transnacionales controlan gran parte del procesamiento industrial y la comercialización de alimentos.

En tercer lugar, el «modelo» argentino ha contribuido a la desaparición de gran parte de la agricultura familiar y de los trabajadores rurales. Entre los censos de 1988 y 2002 desaparecieron 25% de las explotaciones agropecuarias existentes en el país, o sea, 87 mil explotaciones (86% de las cuáles tenían menos de 200 has y 9% entre 200 a 500 has). En cambio, aumentaron las de más de 500 has (particularmente las de entre 1000 a 2500 has). Este fenómeno, ha convertido al agro argentino en una especie de agricultura sin agricultores. El avance de la soja en el interior del país tiende a desplazar con violencia a campesinos que ocupan tierras amparados en las leyes veinteañales, y a comunidades indígenas que tienen derechos ancestrales sobre sus tierras.

En cuarto lugar, el boom de la soja en Argentina ha estado íntimamente asociado al deterioro ambiental. Además de la irresuelta cuestión acerca de los riesgos del cultivo en gran escala de la soja transgénica en el largo plazo, su auge se ha dado en detrimento de la yunga y de la flora y fauna en extensos territorios del país. Esta expansión también está ocasionando la deforestación de extensas áreas en particular en las provincias del norte, que, al mismo tiempo, está desplazando a campesinos y comunidades indígenas y comprometiendo la biodiversidad del país.

También deben considerarse los efectos perniciosos que ejerce la utilización masiva del glifosato, su rocío masivo por aire sobre comunidades campesinas e indígenas, para la salud humana, así como para las producciones locales de campesinados y poblaciones indígenas.

Por último, dos elementos que pueden contribuir a incrementar la expansión continua del «modelo»: a) los bio-combustibles debido al interés de los Estados Unidos y otras potencias por sustituir el petróleo por otras fuentes energéticas; y b) el papel que comienza a ejercer China en el panorama mundial, una de cuyas expresiones es su gran y creciente demanda de soja. Estas perspectivas pueden impulsar la noción de que Argentina debe continuar siendo un gran productor de soja, lo cual también acrecentaría la peligrosa dependencia del país del monocultivo de soja transgénica, y demás consecuencias económicas, sociales, ambientales y sobre la salud del cultivo masivo de este cultivo.

Capitalismo agrario y sojización en la pampa Argentina. Las razones del desalojo laboral.

Irma Lorena Acosta Reveles¹

8

La transición que protagoniza la agricultura latinoamericana desde la década de los setentas –aproximadamente- ha resultado en un aumento significativo de la producción y de la productividad agrícola en contraste con una marcada tendencia a la reducción de los precios de todas las mercancías agropecuarias; cambios en el patrón de cultivos y en el destino de los productos, para posicionar en los indicadores macroeconómicos los bienes agrícolas de exportación reciente, en detrimento de cultivos alimentarios; una balanza comercial global positiva del conjunto, pero sostenida sobre todo, en el superávit de Brasil, Argentina y Colombia, y el desplome de la población ocupada en el agro –siguiendo la tendencia histórica- pero todavía con gran presencia aún de trabajo campesino.² Acompaña a estos procesos una polarización en la estructura agrícola y agraria latinoamericana que se consolida, pero ahora en función de la vinculación más o menos exitosa de los productores en el mercado mundial: Un polo empresarial rentable y competitivo, articulado positivamente a las cadenas agroalimentarias transnacionales y que goza del patrocinio de los gobiernos. Frente a la pequeña producción –de tipo familiar en especial- de magros rendimientos, con una participación marginal en el mercado y carente de apoyo público.

Reparando exclusivamente en la empresa agrícola capitalista (esto es, las explotaciones que operan básicamente a partir del empleo de personal asalariado), en este escrito observaremos la evolución del trabajo agrario en una zona que consideramos representativa, dado el avance acelerado de los agronegocios volcados al mercado mundial.³ Se trata de la región pampeana argentina. Recordemos primero que entre los años setentas y ochentas del siglo XX, las políticas públicas en los diferentes países de la zona convergen en su interés por alentar los negocios de potencial exportador en la rama agrícola, y, en general en el sector agroalimentario. En ese sentido los recursos y programas gubernamentales daban la pauta para que las empresas realizaran los cambios que les permitirían lograr una participación activa en mercados abiertos o en proceso de apertura.⁴ Esto significaba por lo regular migrar hacia otros cultivos y especializarse; modernizar la planta productiva; alterar la escala de producción y la combinación de factores productivos; reformular los vínculos intersectoriales; modificar la vocación natural del suelo y en casos extremos cambiar la localización de la unidad productiva en provecho de la rentabilidad y competitividad de la empresa.⁵

El caso Argentino es paradigmático para conocer la forma concreta en que se conducen los agronegocios. Aquí se revelan a través de prácticas empresariales concretas, tendencias representativas del capital agrícola en los países latinoamericanos, y se percibe con claridad la huella que imprimen a los patrones salariales. Sin desconocer que la experiencia abarca temas tan atroces como el saqueo de la naturaleza o el despojo territorial de bienes sociales para uso privado –por ejemplo-, aquí nos concentraremos básicamente en el plano de la

relación capital-trabajo.

Recordemos que la República Argentina tiene un sitio destacado en el acontecer agrario regional. El mejor testimonio es su larga tradición exportadora en una gran variedad de cultivos y bienes pecuarios. Perfil sobresaliente que subsiste en tiempos de neoliberalismo y que debe mucho a las cualidades naturales de su territorio. Es de llamar la atención que en Argentina el PIB agrícola como proporción del PIB es de los más reducidos en la región (5.4 para el año 2003),⁶ y sin embargo es uno de los países latinoamericanos donde las exportaciones agroalimentarias tienen mayor importancia respecto a la exportación total de bienes.⁷ Sin duda, estos rasgos influyeron para que Argentina se manifestara en favor de la libertad de comercio tanto en las iniciativas de integración comercial en la región –a través del MERCOSUR, principalmente-, como en las negociaciones multilaterales en la OMC, formando parte del grupo Carins desde su constitución original.

El dato más distinguido para nuestros propósitos, es que en este país la mano de obra asalariada agrícola es, desde hace varias décadas, mayor que la que labora sin remuneraciones en las unidades productivas medias y pequeñas –mejor conocidas como chacras-. Esta peculiaridad proviene del carácter precoz del capitalismo agrario en la zona, que, desde las postrimerías del siglo XIX se comenzó a organizar en torno a la producción extensiva de cereales y ganado en las *estancias*, con inversiones foráneas y gran demanda de mano de obra (incluso de inmigrantes de origen europeo).⁸

Argentina es reconocida mundialmente por las extensas y húmedas llanuras de la región pampeana, una de las áreas naturales más fértiles del orbe. La exuberancia de su ecosistema ha sido clave para preservar el perfil agrario del país, no obstante el impulso a la industrialización que en la posguerra compartieron las naciones latinoamericanas. Lo cierto es que a lo largo del último cuarto de siglo la fisonomía rural del país ha cambiado radicalmente. Este país es probablemente el mejor ejemplo de reconversión productiva agropecuaria en un breve lapso, con efectos atroces en materia social y ambiental. Ahí podemos observar con nitidez la tendencia hacia la especialización por regiones; una escalada ininterrumpida en innovaciones tecnológicas y organizacionales asociados a una mayor presencia empresarial en la zona; ascenso en la productividad del trabajo; alta rentabilidad de los negocios agrarios con sólida presencia internacional y la consolidación de complejos agroindustriales articulados horizontal y verticalmente.

Su contraparte es una mayor apropiación privada de los recursos naturales, o en su defecto, el control indirecto de éstos por el capital; la pobreza del suelo derivada de la tendencia al monocultivo y del abuso de los agrotóxicos; el aprovechamiento irrestricto de las aguas, tierras y bosques; cambios radicales en el uso del suelo y el abandono de la base productiva agroalimentaria. Esto último se funda en las

políticas gubernamentales de apoyo a los negocios agrarios donde prevalece el principio de la mayor ganancia en el menor tiempo, pues parte de la reconversión ha consistido en ampliar la producción de soja transgénica⁹ a costa de la superficie destinada a trigo y maíz, principalmente.¹⁰ Áreas con destino forestal, ganadero y reservas naturales, también han sido sacrificadas por el cultivo de esta leguminosa, hasta aproximarse a una cifra cercana a 17 millones de hectáreas. Esto equivale a dos terceras partes de la superficie cultivable de todo el territorio mexicano.

De paso, este proceso ha motivado el desplazamiento territorial de los chacareros por empresarios más agresivos que captan (como dueños o arrendatarios) las tierras mejor dotadas naturalmente. Consta por ejemplo que en la región de la pampa, entre los años 1988 a 2000 el número de unidades productivas se redujo en aproximadamente en 60,000, mientras en el mismo lapso aumenta el tamaño medio de la explotación agropecuaria de 391.3 a 530.7 hectáreas.¹¹

En las últimas dos décadas la soja ha pasado a ser el cultivo más importante de la República Argentina, pues además de ocupar la mayor cantidad de superficie laborable, es el bien agrícola que más aporta al PIB agrícola de ese país.¹² Aunado a lo anterior, la leguminosa ha ganado para Argentina el tercer lugar mundial como productor y el segundo lugar como exportador.

Al *boom* de la soja transgénica —de fines de la década de los noventa— corresponde además el auge del complejo oleaginoso agroindustrial, que transforma la semilla en aceite, harina, tabletas, salsa, sustitutos alimenticios como carne, leche, jugos y muchos otros derivados. Y es de esperar que a raíz las políticas de alientan las energías *verdes* o *alternativas*, siga en aumento la producción de soja como insumo del biodiesel. La zona argentina que de lleno se ha volcado a producir soja es la región pampeana. Esta región comprende el centro y sur de la Provincia de Santa Fe, gran parte de la Provincia de Córdoba, centro y sur de la Provincia de San Luis, La Pampa y la Provincia de Buenos Aires. En la última se localizan alrededor de 15,400 explotaciones que registran este cultivo anual, de las 38,000 que existen en todo el país, de acuerdo a datos censales del año 2002.¹³

Producir soja en el valle central de Argentina es un excelente negocio por la relación costo-beneficio. El elevado componente tecnológico es garantía alta productividad con un margen de riesgo controlado; el productor está exento del pago de derechos por el uso de la semilla,¹⁴ el costo de producción es bajo¹⁵ en virtud de los factores suelo y salarios, y significa un ahorro considerable en tiempo.¹⁶ Sin embargo sus efectos han sido adversos para los peones del campo (como se le conoce en Argentina al trabajador asalariado agrícola).

La introducción generalizada de la variedad transgénica de soja en los campos argentinos constituye un salto tecnológico en el plano productivo, de enorme significado para el ámbito rural y para la sociedad en su conjunto. Con esta innovación se recomponen los lazos de la agricultura con otras ramas económicas (vínculos intersectoriales o encadenamientos), y con los diferentes sectores sociales. Pero además, por sus cualidades intrínsecas, el paquete tecnológico de la soja modificada genéticamente implica: a) Reorganizar el proceso productivo en tiempos y ritmos; b) ajustar las labores agrícolas —el proceso laboral en sí— en función de nuevas exigencias, y c) plantear en términos diferentes los vínculos salariales.

Uno de los cambios más notables de esta transición productiva (probablemente el tema más visitado por los científicos sociales), es se profundiza la tendencia histórica al descenso del empleo agrario. En efecto, a lo largo del siglo XX las innovaciones en la agricultura pampeana —desde las mecánicas y bioquímicas, hasta los agroquímicos de primera generación—, resultaron en menor demanda de trabajadores para las labores del campo. Empero desde la introducción del *sistema de siembra directa* para la producción de granos el desequilibrio entre oferta y la demanda laboral se hace más evidente.¹⁷

La siembra directa o *labranza cero* es, en general, inaccesible para la pequeña producción. Pero ha tenido muy buena acogida en las medianas y grandes explotaciones productoras de cereales y oleaginosas.¹⁸ El beneficio mayor es que prescinde de las labores tradicionales en presiembra (araduras y rastrajes) gracias al uso de maquinaria pesada que abre los surcos e implanta la semilla con un movimiento mínimo de la tierra, y sin eliminar el rastrojo del cultivo anterior. Ese rastrojo que no se elimina tiene ventajas y desventajas, pero es un problema que puede manejarse para mantenerlo a un nivel positivo para la producción. El procedimiento de siembra directa exige a su vez el suministro previo y posterior del herbicida RR¹⁹ para el control de la maleza, así como de otros plaguicidas. También se requieren fertilizantes como nitrógeno, urea y azufre.

Los defensores de este sistema celebran su perfil conservacionista porque preserva la materia orgánica del suelo: Reduce la erosión que resulta del laboreo excesivo de la tierra y previene procesos de oxidación al no exponer la atmósfera interior del suelo a factores ambientales externos. Virtudes que son discutibles si se ponen en la balanza los beneficios y perjuicios que conlleva la difusión del paquete tecnológico en su conjunto.²⁰ De lo que no cabe duda es que el procedimiento es eficiente en lo productivo, y que disminuye drásticamente el gasto energético tanto en mano de obra como en consumo de combustibles fósiles.

Se ha calculado que en una explotación que recurre a la siembra directa el ahorro es cercano al 35% en el costo de labores/año, de aproximadamente 25% en maquinaria y 35% más en el uso de tractor.²¹ Y sobre el impacto de la incorporación del sistema de siembra directa en el empleo rural, un estudio diagnóstico de Botta y Selis sostiene que:

*La disminución de la demanda de mano de obra se expresa en el requerimiento de los tiempos operativos de las labores, de 3 horas/ hombre/ hectárea para la labranza convencional a 40 minutos/ hombre/ hectárea para la siembra directa, lo que representa la exclusión de 4 de cada 5 trabajadores, sin que ello representa una mejor retribución para el personal ocupado. Esto trae como consecuencia un menor tiempo de empleo temporal y menor demanda de empleo permanente.*²²

Evidentemente, una pérdida absoluta de puestos de trabajo que vigoriza la competencia por las plazas disponibles. Cierto es que la introducción masiva de esta tecnología también crea empleos. Pero son escasos respecto a los que se suprimen, corresponden a labores que exigen alguna calificación especial o conciernen a otras categorías de trabajadores (como son los administrativos, supervisores, capacitadores, operarios de maquinaria, agrónomos, etc.). Por añadidura, de este personal profesional, una parte cada vez mayor tiende a ser contratada bajo la figura de «contrato de servicios». Situando a estos vínculos, formalmente, fuera de las relaciones salariales. Por su parte, el proceso productivo de la soja RR queda supeditado de principio a fin al componente tecnológico. Pues el ciclo de la planta —sus diferentes etapas de crecimiento— y los

factores que han de intervenir en su desarrollo, los marca el diseño genético de la semilla. A partir de la cosecha, en su manejo posterior, almacenamiento y traslado es el parque de maquinaria el que impone su ritmo. Es así que el quehacer del trabajador se ciñe a las tecnologías de proceso y de producto sugeridas por los proveedores de insumos, y para ello requiere capacitación en el uso de plaguicidas, fungicidas y fertilizantes, pues sus conocimientos tradicionales dejan de ser útiles.

Ahora los insumos los recibe el productor como un «paquete integrado» que se acompaña de servicios de asesoría e indicaciones precisas para su óptimo aprovechamiento. Mejor todavía si la empresa cuenta con un sistema de control y monitoreo del suelo –su temperatura, humedad y nutrientes– para que éstos se suministren en el momento oportuno, en las proporciones adecuadas. Pero no es todo. Con la mecanización de las tareas de siembra, fumigación, cosecha y poscosecha se reduce a su mínima expresión la actividad laboral como energía humana directamente aplicada a la generación de un bien, gracias a las máquinas e implementos de variada potencia, capacidad y versatilidad. Desde los convencionales que buscan adaptarse a las nuevas necesidades del producto, hasta los que incorporan dispositivos tecnológicos de última generación:

*Las sembradoras para siembra directa con sistema de dosificación neumática y calidad de equipamiento para asegurar mayor precisión en la entrega de semilla y fertilizante; las cosechadoras con mayor capacidad trabajo, eficiencia de cosecha y tamaño vinculadas al aumento de escala de las explotaciones agrícolas y cosechas de mayor volumen; a las que se suman los tractores, como parte imprescindible de la siembra y la cosecha, cuyos nuevos modelos han incorporado el sistema hidráulico y la doble tracción con neumáticos de grandes dimensiones, debido a las condiciones de la siembra directa y al control sobre la compactación del suelo. En algunos casos, el tractor puede tener piloto automático. En el mercado existe, además, equipamiento de alta complejidad como: monitores de siembra, de rendimiento, banderilleros satelitales o GPS.*²³

La administración de biocidas y la fertilización se puede hacer con una misma pulverizadora –de arrastre o autopropulsadas–, o por vía aérea, en el caso de la fumigación. El sistema de riego que mayores beneficios ofrece es el *pivot* central²⁴ fijo o de remolque. Este último en particular, reduce en gran medida el costo de irrigación porque el equipo está diseñado para su traslado hacia diferentes áreas de cultivo. Por supuesto, producir soja en estas condiciones supone una elevada inversión en insumos, maquinaria y equipo, implementos, servicios profesionales, etc. De ahí que la mayor parte de los productores se ven obligados a apoyarse en los *contratistas*. Los agentes contratistas son una figura tradicional en los campos argentinos,²⁵ y desde la década de los noventa su modalidad más reconocida y próspera son los *pools de siembra*.²⁶ Su impulso en el sector empresarial ha ido a la par del proceso de *sojización* de los últimos años, apoyándose mutuamente, hasta convertirse en uno de los agentes más activos e influyentes del empresariado. Ahora mismo, el contratista realiza labores agropecuarias muy diversas a pedido del propietario del suelo. Puede, si así le conviene, adquirir superficie agrícola o pecuaria para trabajarla por su cuenta, y venderla más tarde. Otra de las formas en que trabaja es arrendando la tierra con posibilidades de pago diversas: monetario o en especie, fijo o proporcional a los resultados. Las empresas contratistas, que prefieren operar sin activos fijos en forma de superficie agrícola. Pero en cambio poseen capital líquido y en conocimiento objetivado en tecnología –maquinaria, equipo, implementos, insumos agroquímicos,

biotecnológicos, etc.–, por lo que están en condiciones tomar a su cargo personal especializado para trabajar los predios y emplear peones de forma permanente o temporal.²⁷ Su singularidad consiste en que se trasladan de una explotación a otra, entre provincias, e incluso a países vecinos según se demanden sus servicios. Hasta pueden operar en varias zonas a la vez (operación *multilocal*). Trabajar así reduce riesgos y facilita la desamortización del parque de maquinaria en un plazo relativamente breve, lo que hace posible que permanezcan a la vanguardia en innovaciones de todo tipo. Lo paradójico es que con este tipo de arreglos productivos no desaparecen los convenios agrarios tradicionales –como la medianería, aparcería, arrendamientos rurales o los *contratos accidentales*–,²⁸ sino que se van moldeando en función de las nuevas exigencias de movilidad, uso intensivo y rotación del capital.

Junto a los contratistas, encontramos otros agentes del sector empresarial ligados de diferente modo al agro, que también ganan con las nuevas modalidades productivas: Proveedores de insumos, de maquinaria e implementos agrícolas; empresas acopiadoras, de transporte y de servicios profesionales; firmas el complejo agroindustrial; intermediarios financieros y especuladores. Los dos últimos, atraídos por la rentabilidad del sector han puesto a disposición de los inversionistas del ramo sus recursos y conocimientos, mediante instrumentos financieros variados como los fondos comunes de inversión o los fideicomisos. Y si los nexos entre capital agrario y financiero son más estrechos, podrán conocer oportunamente los movimientos en los mercados de físicos, administrar riesgos, realizar transacciones a futuro y proyectar estrategias especulativas con existencias y precios.

Algunas conclusiones provisionales

El avance del capital en la República Argentina ha legado en cuestión de unos pocos lustros, éxitos macroeconómicos que preservan su sitio de potencia agroexportadora, pero también ha sido eficiente al engendrar mayor desigualdad y pobreza entre la población rural que tiempo atrás sí participó de la bonanza agropecuaria. Esta inequidad, en un escenario natural tan generoso como la pampa argentina, puede juzgarse –y con razón–, como un retroceso de orden social y político. Pero en esencia, ese proceder corresponde a un paso hacia adelante del capitalismo agrario trasnacional.

En otras palabras, son procesos consubstanciales al desarrollo del capital imperialista que precisa, en contrapartida, la consolidación del subdesarrollo regional. Que las inversiones que propician el despojo territorial y marginación productiva del sector chacarero sean de procedencia nacional o extranjera no es irrelevante. Pero el hecho de que el primero sea subsidiario del segundo en la expansión de la frontera agrícola para el cultivo de soja transgénica, no estrecha ni siquiera un poco la distancia entre trabajo y capital, pues esta contradicción se sigue alimentando y toma nuevos matices.

Entre las manifestaciones más contundentes de esta polaridad, acentuada en tiempos de neoliberalismo, figura la presión del capital sobre el suelo en forma de contratos de índole jurídica diversa; el desplazamiento de la población chacarera incluso en áreas de menor fertilidad; la reducción alarmante en la oferta de puestos de trabajo en los campos y que además discrimina a los sectores escasamente calificados, y los empleos disponibles marcados por su carácter temporal y flexible. El progreso tecnológico y biotecnológico ha tenido un rol protagónico al nutrir los procesos de exclusión social desde los mercados de trabajo, de tierras y de insumos productivos.

No porque así deba ser inexorablemente, sino por la racionalidad que rige la concepción de estos desarrollos tecnológicos y los criterios que rigen su aprovechamiento, atienden a la mayor ganancia en el menor tiempo. Y en ese sentido lo de menos es que sean depredadores del tejido social o del medio ambiente

natural. De ahí que la *sojización* de los campos argentinos se una dolorosa evidencia del modo en que el capital avanza en su proceso de concentración y centralización, con altibajos pero sin pausas; mientras el Estado contempla estos procesos y los apuntala en lo que le corresponde.

Bibliografía:

- Acosta Reveles, Irma Lorena. 2006. «Balance del modelo agroexportador en América Latina el comenzar el siglo XXI» en *Revista Mundo Agrario, Revista de estudios rurales. Número 13. CEH de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina*. Disponible en: www.scielo.org.ar/pdf/magr/v7n13/v7n13a01.pdf
- Beloso, Milva. «Fierreros de profesión.» En *Supercampo*, Año XI- N° 138, Buenos Aires, Marzo 2006. Disponible en: www.conarroz.com/pdf/FierreroSuperCampo.pdf
- Bertolasi, Roxana. Argentina, Estrategia rural. Formas de organización de la producción. Buenos Aires, noviembre 2004. p. 5 y 6. Disponible en: www.rimisp.cl/getdoc.php?docid=2799
- Bisang, Roberto y Sztulwark, Sebastián. «Tramas productivas de alta tecnología y ocupación. El caso de la soja transgénica en la Argentina.» En *Trabajo, ocupación y empleo. Especialización productiva, tramas y negociación colectiva. Serie Estudios /4. Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Gobierno de Argentina. Buenos Aires, Abril 2006. p. 137*. Disponible en: www.trabajo.gov.ar/left/biblioteca/files/estadisticas/toe4_04tramas.pdf
- Botta, G. y Selis, D. Diagnóstico sobre el impacto producido por la adopción de la técnica de la técnica de siembra directa sobre el empleo rural. Una recopilación. CADIR, Buenos Aires, 2003 p. 7. Disponible en: www.unlu.edu.ar/~maqagro/Sd%20Botsels.pdf
- CEPAL. Panorama 2005. El nuevo patrón de desarrollo de la agricultura en América Latina y el Caribe. CEPAL-Naciones Unidas. Santiago de Chile. 2005.
- Craviotti, Clara. Tendencias en el trabajo agrario y dinámicas familiares. En 5°. Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, 5°. Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. Buenos Aires, 2001. p. 7 Disponible en: www.aset.org.ar/congresos/5/aset/PDF/CRAVIOTTICLARA.PDF
- Díaz Rönnner, Lucila. «La incorporación de nuevas tecnologías y algunos de sus componentes problemáticos en el modelo agrícola argentino del siglo XXI» en *Revista Theomai. Número especial. Buenos Aires 2005*. Disponible en: http://revista-theomai.unq.edu.ar/numespecial2005/artdiazronner_numesp2005.htm
- Duncan, Kennet y Rutledge, Ian (comp.) *La tierra y la mano de obra en América Latina*. Ed. FCE/Serie de Economía. México, 1987.
- Guido Galafassi. «La ‘sojización Argentina y la (in)sustentabilidad’ según una interpretación económico-ecológica. Un análisis más que superficial.» En *Revista Theomai, Número especial invierno, Buenos Aires, 2004*. Disponible en: <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/124/12499311.pdf>
- Naranjo González. «Innovación y desarrollo tecnológico: Una alternativa para los agronegocios.» En *Revista Mexicana de Agronegocios número 014. Universidad Autónoma de la Laguna, Torreón, México. Enero-junio 2004*. Disponible en: <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/141/14101408.pdf>
- Neiman, Guillermo y Quaranta, Germán. «¿Trabajo flexible o producción flexible? Sobre los cambios en la organización del trabajo en la agricultura.» Ponencia presentada en III Congreso ALAST. México DF, mayo del 2000.
- Paruelo, J. M. y otros. «Cambios en el uso de la tierra en Argentina y Uruguay. Marcos conceptuales para su análisis.» En *Revista Agrociencia Vol. 10, núm. 2. Buenos Aires, 2006*.
- SAGARPA. *La evolución económica del sector agrícola de la Argentina*. Coordinación General de Apoyos a la Comercialización. DGO. Ficha técnica número 20. México, 2004.
- Terracini, Gonzalo. *Perspectiva Agrícola Sudamericana*. Estudio realizado para ASERCA, SAGARPA, por FCStone. México, 2004.

Notas:

¹ Investigadora del Posgrado en Ciencia Política, Universidad Autónoma de Zacatecas. México.

² Si consideramos exclusivamente a los trabajadores asalariados destaca la superioridad numérica de aquellos que se emplean sólo por temporadas.

³ Acosta Reveles, Irma Lorena. «Balance del modelo agroexportador en América Latina el comenzar el siglo XXI» en Mundo Agrario, Revista de estudios rurales. Número 13. Centro de Estudios Histórico Rurales de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina, 2006. Disponible en: www.scielo.org.ar/pdf/magr/v7n13/v7n13a01.pdf

⁴ Aunque en muchos rubros de la agricultura la competencia es cuasi monopólica, como el caso de los granos básicos, tanto de consumo humano como de destino forrajero.

⁵ Una empresa puede considerarse rentable o exitosa cuando opera en el largo plazo con un rango de ganancias igual o superior a la tasa media en la rama específica en que se desempeña.

⁶ CEPAL. Panorama 2005. El nuevo patrón de desarrollo de la agricultura en América Latina y el Caribe. CEPAL-Naciones Unidas. Santiago de Chile. 2005. P. 8

⁷ Para el año 2003 este indicador es superior al 30% en Argentina, cuando el promedio regional es de 15.4%. Ibid. p. 22

⁸ Duncan, Kennet y Rutledge, Ian (comp.) La tierra y la mano de obra en América Latina. Ed. FCE/Serie de Economía. México, 1987. p. 27.

⁹ A diferencia de Brasil, que recurre mayormente a la soja convencional, en Argentina predomina una variedad de semilla confeccionada por la transnacional Monsanto. Esta variedad es un organismo que se ha modificado genéticamente (OGM) para tolerar el herbicida glifosato, conocido comercialmente Roundup Ready (RR), del que recibe el nombre soja RR. El paquete tecnológico incluye el sistema de siembra directa (SD) y fertilizantes.

¹⁰ De la superficie cosechada, la soja pasó de 17.2 a 56.2%, entre 1980 y 2004, mientras la de trigo y maíz –como conjunto- se reduce de 64.2 a 36.6% en el mismo lapso. CEPAL, Panorama 2005. Op. Cit. p. 87.

¹¹ Terracini, Gonzalo. Perspectiva Agrícola Sudamericana. Estudio realizado para ASERCA, SAGARPA, por FCStone. México, Mayo de 2004. p. 22 y 23.

¹² Paruelo, J. M. y otros. «Cambios en el uso de la tierra en Argentina y Uruguay. Marcos conceptuales para su análisis.» En Revista Agrociencia Vol. 10, núm. 2. Buenos Aires, 2006. p. 3

¹³ Bisang, Roberto y Sztulwark, Sebastián. «Tramas productivas de alta tecnología y ocupación. El caso de la soja transgénica en la Argentina.»

En Trabajo, ocupación y empleo. Especialización productiva, tramas y negociación colectiva. Serie Estudios /4. Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Gobierno de Argentina. Buenos Aires, Abril 2006. p. 137. Disponible en: www.trabajo.gov.ar/left/biblioteca/files/estadisticas/toe4_04tramas.pdf

¹⁴ La empresa Monsanto no exigió con oportunidad el pago correspondiente al uso del gen o la semilla en ese país, y por consiguiente los productores no están obligados legalmente a pagar de regalías. Este es un conflicto entre la empresa que patentó la semilla y el Gobierno Argentino que aún no se resuelve en definitiva. Esto no sería posible con otros OGM pero sí con la soja porque la semilla es autógama, esto es, que su reproducción posterior no altera sus características básicas iniciales.

¹⁵ El costo promedio es mayor en Argentina que en el sur y norte de Brasil, pero aun así, representa sólo el 84% del costo de producir en Estados Unidos. Terracini, Op. Cit. Diapositiva número 13.

¹⁶ El lapso de producción de soja convencional es, a grosso modo, de 280 mientras la variedad transgénica esta lista en 180 días, aproximadamente. Esto permite alternar con el cultivo de trigo (sistema de doble cultivo).

¹⁷ Neiman, Guillermo y Quaranta, Germán. «¿Trabajo flexible o producción flexible? Sobre los cambios en la organización del trabajo en la agricultura.» Ponencia presentada en III Congreso ALAST. México DF, mayo del 2000. p. 13 y 14.

¹⁸ El procedimiento es de amplio uso en Estados Unidos y los países sudamericanos, pero en ningún lugar se emplea tanto como en Argentina.

¹⁹ El herbicida Roundup Ready es uno de los mas potentes y tóxicos del mercado, por lo que su aplicación esta regulada internacionalmente.

²⁰ Guido Galafassi sintetiza el estado del debate sobre la sustentabilidad de este cultivo en «La 'sojización Argentina y la (in)sustentabilidad' según una interpretación económico-ecológica. Un análisis más que superficial.» En Revista Theomai, Número especial invierno, Buenos Aires, 2004. Disponible en: <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/124/12499311.pdf>

²¹ Neiman y Quaranta. Op. Cit. p. 14.

²² Botta, G. y Selis, D. Diagnóstico sobre el impacto producido por la adopción de la técnica de la técnica de siembra directa sobre el empleo rural. Una recopilación. CADIR, Buenos Aires, 2003 p. 7. Disponible en: <http://www.unlu.edu.ar/~maqagro/Sd%20Botsels.pdf>

²³ Díaz Rönner, Lucila. «La incorporación de nuevas tecnologías y algunos de sus componentes problemáticos en el modelo agrícola argentino del siglo XXI» en Revista Theomai. Número especial. Buenos Aires 2005. Disponible en: http://revista-theomai.unq.edu.ar/numespecial2005/artdiazronner_numesp2005.htm

²⁴ Una torre central accionada por un generador o red eléctrica que se adapta a diferentes tamaños de áreas de cultivo, en movimientos circulares.

²⁵ Los contratistas de cosecha estuvieron presentes incluso en la etapa previa a la mecanización, cuando el desgranado de los cereales se efectuaba mediante el pisoteo de las espigas por yeguas (a principios del siglo XX). Craviotti, Clara. Tendencias en el trabajo agrario y dinámicas familiares. En 5º. Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, 5º. Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. Buenos Aires, 2001. p. 7 Disponible en: www.aset.org.ar/congresos/5/aset/PDF/CRAVIOTTICLARA.PDF

²⁶ Se calcula que son responsables de cosechar 75% de los granos que produce el país y de realizar el 60% de las tareas de laboreo, siembra y pulverización. Beloso, Milva. «Fierros de profesión.» En Supercampo, Año XI- N° 138, Buenos Aires, Marzo 2006. Disponible en: <http://www.conarroz.com/pdf/FierroSuperCampo.pdf>

²⁷ Bisang y Sztulwark elaboran una tipología de los contratistas en base su acervo productivo y sus funciones. Bisang, R. y Sztulwark, S. Op. Cit. p. 139.

²⁸ Se distinguen de la modalidad legal de arrendamientos rurales porque mientras éstos son obligatorios al menos por tres años, los accidentales rigen para un máximo de dos cosechas. Bertolasi, Roxana. Argentina, Estrategia rural. Formas de organización de la producción. Buenos Aires, noviembre 2004. p. 5 y 6. Disponible en: <http://www.rimisp.cl/getdoc.php?docid=2799>

El cambio que no cambia

El año 2008 empezó con la expectativa del inicio de un nuevo período gubernamental que, siendo una continuidad de los más de cuatro años precedentes, prometía algunas innovaciones.

Si bien tales novedades no fueron explicitadas con precisión, se suponía que si iniciaría una etapa que, al menos, diera cuenta de algunas de las cuestiones que sin duda estaban en la nómina de los asuntos pendientes. Entre ellas, sin duda alguna, se encontraba el tema distributivo. O, como suele ser presentado por las autoridades políticas y por los medios de difusión, la cuestión redistributiva que, como veremos enseguida dista de referir a lo mismo.

En ese marco, fue difícil iniciar dicho tránsito (en cierto momento se lo denominó «la continuidad del cambio») constatando la falta de resolución de tensiones previas.

Dentro de las cuales resulta importante destacar la expresada en la manipulación de las estadísticas públicas, operada desde comienzos de 2007, inicialmente circunscripta al Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero que luego se extendió a una parte no menor de la información oficial. Como consecuencia, las estadísticas oficiales, han perdido credibilidad de manera tal que no se encuentran en la memoria circunstancias tan desafortunadas. No sólo se trata de que desde hace un año y medio se desconocen los valores efectivos en que varían los precios de los bienes y servicios de consumo cotidiano, sino que la intromisión lisa y llana (materializada con los peores mecanismos respecto del personal técnico del INDEC) también llevó a afectar la realización de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y, sin saberse la razón, a la omisión de la puesta a libre disposición de funcionarios y usuarios de las Bases resultantes de tan importante operativo a cargo del organismo rector de las estadísticas públicas. Así, no se sabe qué datos fueron registrados por la EPH a partir del primer trimestre de 2007 (último dato conocido fehacientemente) y, por tanto, no se dispone de información sobre la evolución y la cuantía del empleo desprotegido en sí mismo y en su relación con el empleo protegido, así como se desconocen sus niveles salariales, las categorías ocupacionales, las ramas de actividad, etc.

Se agrega a ello, el efecto que tal distorsión genera en las estimaciones sobre incidencia de la pobreza y de la indigencia al punto de que muchos analistas sostienen que en 2007 no sólo no continuó la baja de sus guarismos sino que –con los valores correctos- estos mostrarían un empeoramiento de la situación. El espacio limitado que aquí tenemos impide abundar en detalles. Sólo tengamos en cuenta que la medición sobre pobreza requiere de dos correctas estimaciones: la de los ingresos de los hogares (obtenidos a partir de la Encuesta Permanente de Hogares) y la de los precios de los bienes y servicios consumidos por estos (el IPC). Incluso más, sin esta información, toda afirmación acerca de la variación del salario

real corre sólo por cuenta de quien lo argumenta pues no se sostiene en evidencia estadística incluyendo, ante todo a las afirmaciones oficiales en la materia.

La esperanza que despertaba la transición presidencial no se materializó: la distorsión no habría de ser suprimida, ni siquiera atenuada. Mucho menos, superada seriamente. De todos modos, el discurso inicial continuaba siendo el de la apuesta redistributiva. Costaba, sin embargo, entenderlo a cabalidad pues luego de haberse hecho campaña electoral con argumentos tales como el desendeudamiento, el año se iniciaba con novedades como las de adquirir un empréstito a muy largo plazo y extremadamente oneroso no para mejorar la capacidad productiva del conjunto de la economía sino para que viaje más confortablemente en un tren de alta velocidad sólo un puñado de pasajeros con muy altos ingresos. Decisiones como esa no sólo contradecían –y contradicen- el anunciado desendeudamiento externo sino también la intervención estatal de carácter redistributivo.

En dicho contexto, se abrió una instancia cuyo desenlace no se avizora al momento de escribir este texto. La bienvenida aunque tardía decisión de trasladar al Parlamento el tema del incremento en las alícuotas a percibir para algunos de los principales productos de exportación agropecuaria: soja, trigo, maíz y girasol, no dispuso el clima confrontativo en grado extremo².

Derechos de exportación y redistribución: ¿qué cambió el 11 de marzo?

A partir de la Resolución Ministerial N° 125 del mes de marzo pasado, se incrementaban significativamente los derechos de exportación (comúnmente conocidos como «retenciones») los cuales, como en los años recientes, se justificaban en virtud de la necesidad de evitar que la continua y veloz alza de sus precios en el mercado internacional pudieran «repercutir negativamente sobre el conjunto de la economía a través de mayores precios internos, [generaran] menor equidad distributiva y una creciente incertidumbre en lo que respecta a las decisiones de inversión del sector agropecuario».

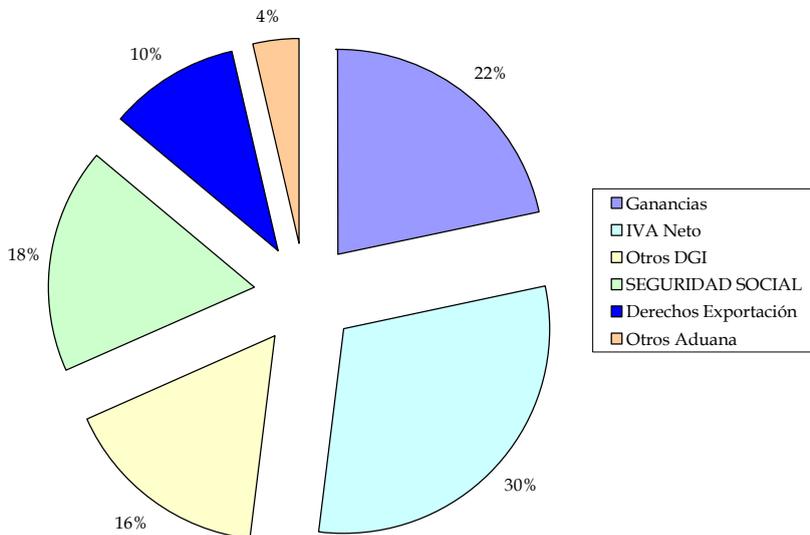
Para ello se incrementaban los porcentajes y se introducía una modalidad de aplicación con escalas móviles. De allí en más, es sabido, se produjo una reacción de organizaciones representativas de un amplio espectro del quehacer con una intensidad que resultó inusitada no sólo para el gobierno nacional. También inusitada fue la respuesta oficial, excesiva en la acusación de intenciones golpistas al reclamo agrario y sin lucidez para discriminar social y políticamente entre «la oligarquía» y otros muchos sectores movilizados.

En las últimas semanas probablemente se han batido muchos récords verbales, algunos de los cuales resultan impresionantes. Se habló de oligarquía y de oligarcas. Se habló de golpes de Estado y de golpistas. Se habló de distribución del ingreso y de los fondos necesarios para ello. Se habló de modelo y de la necesidad de cambios de modelo. Se habló de recordar a quienes no tienen trabajo. De la necesidad de

atender a quienes tienen hambre. Muchos de estos argumentos o de tales informaciones, desafortunadamente, surgieron después de desatado el conflicto. Antes de continuar con el tema anunciado permítasenos un breve intermedio. Si bien el tema no es menor, no podemos externos aquí

nítidos. Veamos. Hasta febrero pasado, la tasa de imposición a ciertas exportaciones primarias no era despreciable (35% en el caso de la soja, nivel al que se había llegado por decreto del pasado mes de noviembre, cuando se lo elevó en siete puntos porcentuales)³.

Gráfico 1: Estructura de la recaudación tributaria argentina, por fuentes. DGI, Seguridad Social y Aduana. 2007.



Fuente: Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal, Secretaría de Hacienda, Ministerio de Economía y Producción.

Según los datos del Ministerio de Economía, en 2007 se recaudaron más de 200 mil millones de pesos entre el Estado Nacional y las jurisdicciones inferiores a él. De ese monto apenas el 10% estuvo formado por todas las retenciones, incluidas las agropecuarias, como se observa en el Gráfico 1. De donde se deriva que el debate por la modificación de las alícuotas (fuera del paso de la modalidad fija a móvil) significa un incremento de algo así como uno o dos por ciento de los ingresos fiscales. Parece una magnitud exigua para basar en ella la alternativa de poder (o no) redistribuir ingresos en la Argentina de 2008. A lo largo de estos más de cuatro meses en los que la cuestión distributiva ha estado más que en el tapete, parece no poco relevante reparar en la cuantía efectiva resultante

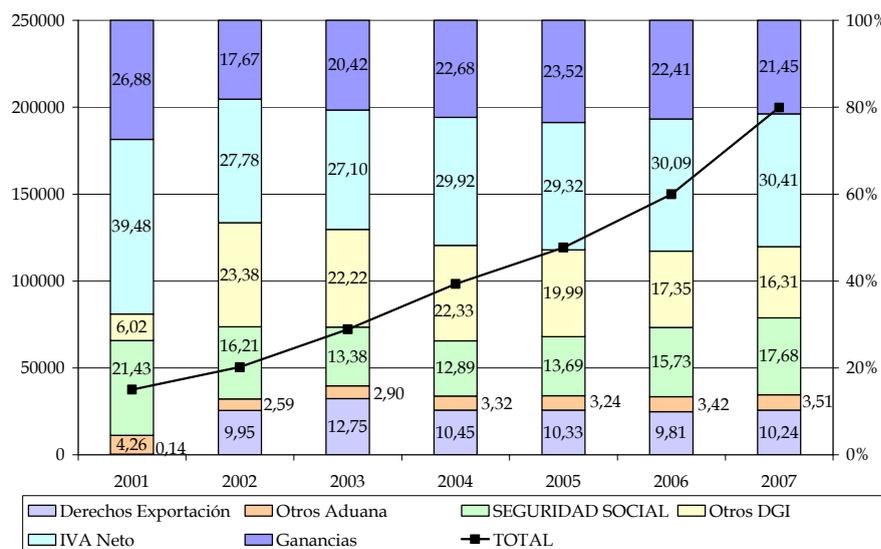
demasiado. Digamos sí que el esquema argumental es, al menos, sorprendente. Tal sensación deriva del hecho de que se apele oficialmente al combate tanto del desempleo como del hambre en nombre de un Gobierno que afirma (y en gran medida con fundamento) haber librado una batalla exitosa en materia de desocupación y de pobreza e indigencia. En otras palabras, el argumento parece forzado -luego de un lustro de gestión y, además, esgrimido tiempo después de la firma de la Resolución 125 por parte del Ministro de Economía). Si se consiguieron tales logros con anterioridad, no parece ser para ello que se lanzó la Resolución. Y si es necesario ese ingreso, no está claro por que aparece su carácter perentorio sólo después de tantos años y sin indicarse ello en su implantación.

Detengámonos, en ese marco, en un par de cuestiones que parecen relevantes. Primeramente, en un aspecto meneado hasta el cansancio: el de la distribución del ingreso. A los efectos argumentales, los defensores a ultranza de las medidas oficiales en materia de retenciones sostuvieron que el decreto cuestionado de marzo último era poco menos que la panacea en materia distributiva. Así lo indicaron los funcionarios que hicieron el panegírico de la medida hasta llegar al discurso de la Sra.

Presidenta de la Nación en el que se anunció el probable destino del excedente de ingresos fiscales provenientes de la aplicación de la norma de marzo pasado. Sin embargo, hay algunos puntos que vale la pena hacer más

de la modificación. Esto en un sentido abarcativo y válido tanto desde la perspectiva fiscal o de la sociedad toda cuanto desde la óptica de los agentes económicos sobre los que cae el tributo ahora incrementado. A nivel agregado resulta demasiado poco para la aplicación de exitosas políticas sociales y también parece no determinante a ese nivel la transferencia por parte de los contribuyentes. Claro que, en este último caso, es imprescindible mensurar la carga según la fortaleza y rentabilidad individual del productor. Pero esa es otra discusión.

Gráfico 2: Evolución de la Recaudación Tributaria Argentina consolidada (en millones de pesos corrientes), y su Estructura por Tributo (en %). Período: 2001-2007.



Fuente: Idem Gráfico 1

Los ingresos fiscales y su utilización

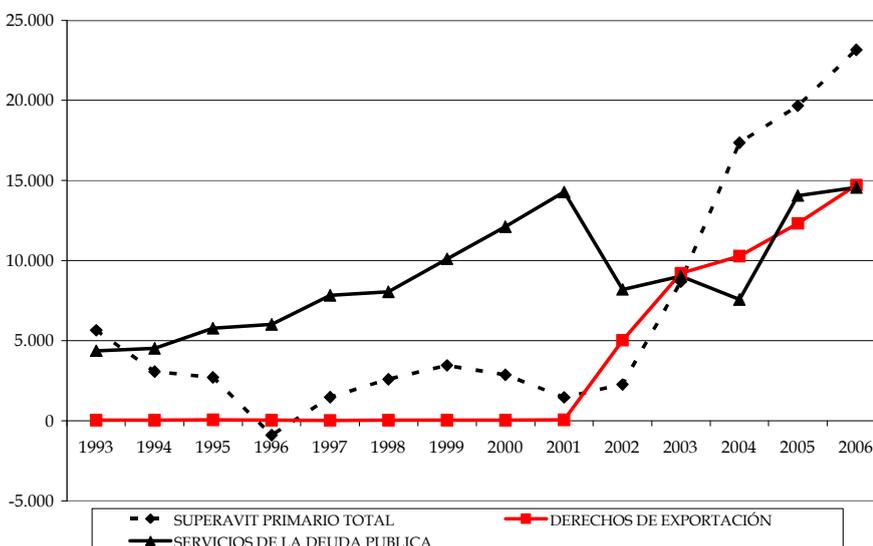
Por otra parte, la estructura de ingresos en 2007 ha permanecido casi sin cambios respecto de la observada en 2002 como se

ve en el Gráfico 2, lo que implica que el 10% obtenido por derechos de exportación en ambos ejercicios se multiplicaron tan rápido como las restantes fuentes (a valores corrientes más que se cuadruplicó la recaudación tributaria total). En todo caso, por ejemplo, el impuesto a las ganancias fue en 2007 algo mayor que en 2002 (21 contra 18%), pero inferior a los años intermedios. Por su parte el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ha trepado del 28 al 30% de manera continua en el mismo período. Esto es que la estructura impositiva no cambió en el quinquenio, pese a que es esta una invaluable herramienta en materia de redistribución de ingresos⁴. Por otro lado, es evidente que ninguno de los ingresos fiscales cubre a priori cualquier erogación del Estado. Si así fuese, podría decirse que todas las retenciones a la exportación alcanzarían en 2008 para pagar los intereses de la deuda pública. En rigor, el ex presidente Néstor Kirchner lo aclaró hace pocas semanas: sin el aumento de las retenciones se hará difícil hacer frente a los compromisos externos. Según la página del Ministerio de Economía, el monto de capital a pagar este año sólo entre abril y diciembre supera los 12 mil millones de dólares, de los cuales dos terceras partes son bonos emitidos en pesos. Los intereses solamente agregan un compromiso de tres mil millones de dólares. Obviamente expuesto de este modo, el argumento distributivo o redistributivo pierde fuerza. Distinto es que se aluda al esperado impacto benéfico en materia de precios internos. Pero está claro que son dos cosas diferentes.

Debe notarse que en los últimos quince años, hasta la crisis de 2001-2002, los servicios de la deuda fueron muy superiores al superávit fiscal primario. Desde 2003 la relación se revierte. Lo peculiar es que desde entonces los derechos de exportación no sólo sostienen por lo menos el 50% el superávit sino que tienen una cuantía muy similar a la de los servicios de la deuda externa.

En el Gráfico 3, justamente, se han seleccionado algunas variables a este respecto a través de las cuales se observa, por una parte, la caída pronunciada del superávit primario hasta mediados de los años noventa, y su leve recuperación hasta 1999 y nueva declinación hasta 2002. Sólo a partir de 2003 el volumen nominal crece muy velozmente. Es precisamente en 2003 cuando se da una particular coincidencia entre el monto de las retenciones, el del superávit y el de los servicios de la deuda.

Gráfico 3. Variables fiscales seleccionadas. Millones de pesos corrientes. Período 1993 – 2006.



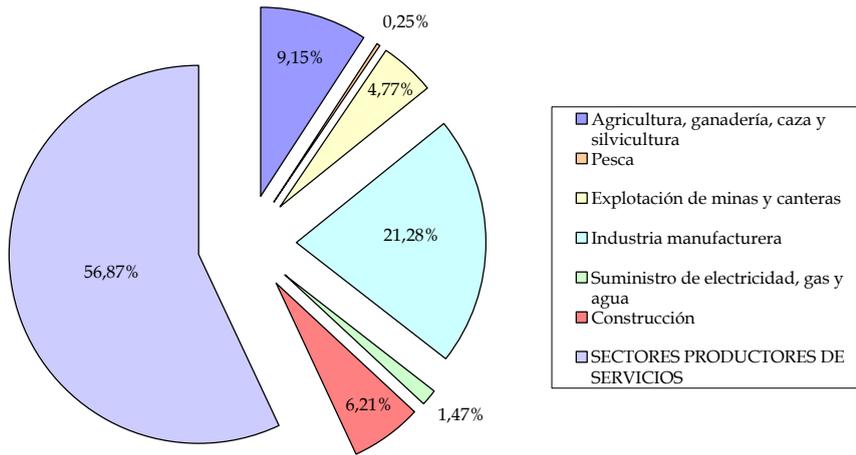
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos varios de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía y Producción.

¿Dónde poner el foco?

El Producto Bruto Interno a precios de mercado de 2007 alcanzó poco más de 800 mil millones de pesos. Todo el aporte del sector primario fue de 100 mil millones de los cuales un tercio se originaron en la minería⁵. Por tanto, es verdad, como dijo el jefe de Gabinete, que el aporte cuantitativo del sector agropecuario es bajo, menos de 70 mil millones. Ese monto, tal como enseñan las Cuentas Nacionales, se reparte entre asalariados y patrones. ¿Estará allí la ganancia que debería repartirse mejor? Es probable que en parte sí habida cuenta de la baja participación salarial en el valor agregado sectorial del sector agropecuario, pero ese excedente no representa mucho más que el 10% de toda la renta empresaria. Desde el punto de vista de las estadísticas, el ingreso empresario puede corresponder a la ganancia de las unidades económicas o a diversas formas de renta. Entre ellas la proveniente de la apropiación de cierto recurso escaso de rasgos peculiares, como la tierra. Pero aún siendo así, su cuantificación arroja estos resultados que muestran que no está allí el mayor volumen de ingresos imponibles. El aporte sectorial a la generación del producto de 2007 se ilustra en el Gráfico 4. En otros términos (y aquí también debiéramos entrar en el farrago de las estadísticas utilizables que no necesariamente son las óptimas ni carecen de cuestionamientos), no debe caerse en la falsedad o en la creencia de que la capacidad contributiva en una sociedad está determinada por el ámbito sectorial en que se desarrolla la actividad productiva. Lo que esencialmente importa es –cualquiera sea el sector económico– determinar qué componente productivo se apropia de la mayor parte de lo producido (típicamente si es el capital o el trabajo) y si alguno de los sectores del capital captura rentas originadas en circunstancias extraproductivas como en este caso la suba de precios internacionales de las materias primas. Pero además, y no es poca cosa, habitualmente no hay homogeneidad entre los agentes económicos intervinientes en cualquier rama de actividad. Por tanto carece de rigurosidad asignar indiscriminadamente bondades o perversidades atendiendo sólo a la pertenencia sectorial. En esto se ha caído excesivamente: «el campo se llenó de plata»; «el campo nos da de comer»; etc. Parece un mal que nos acompaña, también, el de «descubrir» ciertos defectos (o virtudes) sólo en virtud de otras motivaciones. Así como en el país se descubrió la acción contaminante de la actividad productiva con las pasteras

uruguayas (sin reparar en lo dañino de la fabricación de papel u otros productos en nuestro país) también se descubrió que el porcentaje de empleo rural de carácter precario en el sector agropecuario es importante. No parece importar que ese porcentaje no surgió el último verano ni cambió en los últimos cinco o seis años de manera rotunda así como tampoco parece tener importancia que otros sectores como el de la construcción tienen registros elevados y que en esa rama el empleo aumentó tanto en puestos protegidos como precarios. De manera que la «sectorialización» del debate no parece haber contribuido a la clarificación de la naturaleza del conflicto instalado en la sociedad argentina.

Gráfico 4: Participación de cada sector en el VAB a precios (corrientes) de productor. Año 2007.



Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, INDEC, Ministerio de Economía y Producción.

No debe omitirse, asimismo, algo esencial. Los productores agropecuarios no dominan la cadena agroalimentaria. El caso de los productores de leche puede ser ilustrativo. La Secretaría de Comercio Interior les ha fijado un precio tope, que pese a ser bajo para ellos ha implicado subsidios a favor de las usinas lácteas. Los productos derivados de ella no han dejado de incrementarse continuamente a despecho del congelamiento del litro de leche al tambero.

En un sentido general, los ingresos mayoritarios dentro de lo que configura la ganancia del capital son explicados de manera predominante por los sectores concentrados (con aptitud para formar precios) que son, casualmente, los que se han cansado de firmar acuerdos –inefectivos– para la contención de esos precios.

De allí que desde muchos ámbitos se ha sostenido que sería más apropiado la captura de rentas extraordinarias a través de la efectiva aplicación de un impuesto progresivo a las ganancias, tarea que después de tantos años aún está pendiente de materialización. Pareciera que no pocos de los argumentos de los noventa siguen siendo predominantes. Al menos perdura su vigencia práctica en el sentido de que la fuente fiscal

principal no dejó de ser el IVA (impuesto inequitativo por definición) y pese a lo que muchos esperaban la base de los ingresos fiscales está lejos de estar sustentada en los impuestos a las ganancias, incluyendo de una buena vez actividades que continúan exentas como las transferencias de activos y las rentas financieras. Por si faltaba algo, las retenciones no se coparticipan, el impuesto a las ganancias sí.

Digamos de paso que el aumento internacional de precios que es parte del origen del conflicto (otra parte deriva de la decisión de mantener un tipo de cambio «competitivo», es decir relativamente alto) contradice el comportamiento de los mercados mundiales durante varias décadas. La

literatura en el siglo XX indicaba la existencia de un constante deterioro de los términos de intercambio de los países productores de tales materias primas en beneficio de los países centrales. Esto es lo que hoy está en cuestión o, al menos, los hechos marcan otro derrotero a partir de la dinamización de la demanda de grandes países como China o India (y la incidencia de los biocombustibles). En la actualidad se habla de que es sensato «aprovechar la oportunidad que genera la actual coyuntura internacional». Lo cual puede indicar que no es una reversión de tendencias y menos aún un cambio de paradigma conceptual. Si esto es así, resulta sumamente frágil fundar una estrategia redistributiva sobre estas bases pues

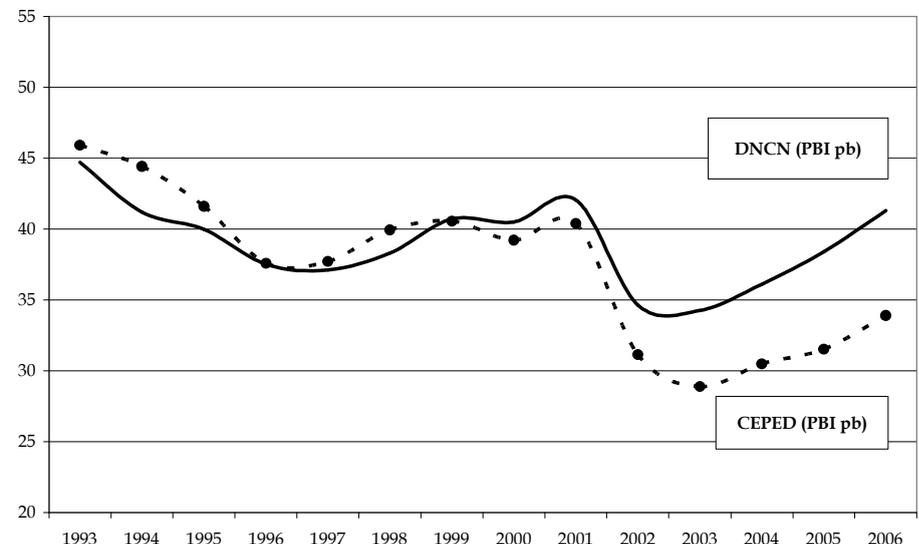
de desaparecer estas favorables condiciones internacionales se eliminaría el soporte de tal tipo de política.

Antes de redistribuir, ¿por qué no miramos cómo se distribuye?

Vale recordar un par de conceptos elementales pero que suelen escapar de la observación cotidiana. La distribución del ingreso, «el reparto de la torta», es una forma de ver cuánto y qué produce un país en un año determinado. El proceso productivo se expresa, simultáneamente, en los bienes y servicios provenientes de los diferentes sectores o ramas (agro, industria, comercio, transporte, etc) o en el tipo de uso que se da socialmente a esos bienes (consumo, inversión, exportación). Pero ambas perspectivas, que expresan –de manera agregada– una cuantía de valor equivalente no agotan las posibilidades. Hay una tercera forma de mirar el mismo proceso y esta es la distribución: la apropiación de ingresos por parte de los así llamados factores productivos que, para simplificar, se distinguen entre capital y trabajo. Es notable que en estos cuatro meses de «debates» este elemento no haya aparecido.

En tal sentido, la participación salarial en la renta (pese a haber

Gráfico 5: Participación salarial en el producto bruto interno, 1993-2006



Fuente: Lindenboim et al (2006) (datos actualizados) y Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, INDEC, Ministerio de Economía y Producción.

mejorado entre 2002 y 2006) todavía no alcanzó los niveles del fin de la convertibilidad que ya eran bajos, como se observa en el Gráfico 5. Nuevamente, prescindiendo de la calidad de la estadística disponible, no existen dudas de que desde principios de los años noventa hasta el momento de la crisis 2001/2002 se perdieron en torno de diez puntos porcentuales o más de participación del salario. De esa pérdida, hasta 2006 inclusive, se recuperó menos de la mitad. Lo cual, como el vaso con líquido, puede verse medio lleno o medio vacío: la recuperación en esos tres o cuatro años es perceptible y estuvo originada de manera prioritaria en el incremento de la fuerza laboral antes que en la mejoría del salario real, pero esa dinámica favorable ni siquiera ha permitido recuperar los niveles de los primeros años de la década del noventa (momentos no espectaculares, por cierto) en lugar de mejorar el bienestar de la población, como es ética y socialmente deseable.

De donde se deriva que con ser indudablemente relevante la disposición de fondos para redistribuir a través de la acción del Estado, se trata de captarlos efectivamente no sólo «donde sea más fácil» se trate del IVA o lo que fuera. Si hay rentas extraordinarias es correcto que el Estado se apropie de ellas. También debería intervenir con las rentas financieras o bursátiles, con la transferencia de empresas, etc. En otros términos, el rol redistribuidor de los fondos fiscales es esencial. No es éste el lugar para fijar prioridades al respecto pero la sola enumeración de las áreas ilumina el camino: salud, educación, seguridad, justicia. Seguro que emprendimientos tan descabellados como el del «tren bala» que por absurdos tientan a pensar en cosas más perversas.

Otros economistas con mirada progresiva no dejan de señalar que la captura de eventuales rentas extraordinarias debería financiar otro tipo de inversiones de naturaleza productiva como las obras energéticas y de infraestructura.

Pero, además de ello, y quizás principalmente, se trata de reordenar la discusión en la sociedad de manera que se pueda

debatir acerca de la manera de repartir los ingresos entre capital y trabajo, lo cual no es una gracia divina precisamente. Si lo que hay para repartir año tras año es la riqueza que se genera es porque en el proceso productivo se crea ese valor. Por lo tanto es allí y en ese momento en donde se define la porción de cada quién y tal asignación como ocurre por lo común en el capitalismo, depende de las reglas de juego que resulta de la intervención estatal. De manera que el Estado debe actuar redistribuyendo pero –antes de ello– debe velar por las pautas que regulan la relación capital-trabajo. Tales pautas deben procurar una razonable protección del componente más débil: el integrado por los asalariados. Pero también hay diferenciales de poder (y debilidad) dentro del sector empresario. Esto vale para el sector agropecuario pero no sólo para ese ámbito. No debe olvidarse que la redistribución es más necesaria cuanto peor es la distribución primaria o funcional del ingreso. Hoy, cuando el desempleo disminuyó notablemente, se ve claramente que el «derrame» resultante de la política oficial consistió básicamente en facilitar la creación de puestos de trabajo. Pero si la pobreza se resiste a caer significativamente es porque en la Argentina, como sucede de manera cada vez más evidente y pronunciada en otras latitudes capitalistas, tener trabajo no alcanza para salir de la pobreza. Peor aún, hay fuertes indicios de que el año 2007 y lo que llevamos de 2008 constituye un período en que la pobreza lejos de disminuir se ha acrecentado.

No hubiera sido mala idea que la discusión parlamentaria propiciada para la fijación de las retenciones móviles incluyera estos elementos de juicio. De lo contrario, quizás, sigamos embarcados en tironeos que mostrarán –apenas– falsas dicotomías.

Más allá de buenas noticias registradas en materia laboral y en materia de redistribución durante parte de los años recientes parece claro que lo que falta es actuar en lo relativo a la distribución. Pese a las apariencias y ademanos, no es por allí que transita la pugna por las retenciones.

Notas:

¹ Investigador Principal del Conicet. Director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED) y Profesor Titular Consulto de la UBA. Se agradece la colaboración de Gervasio A. Arakaki, Becario de la UBA, para la preparación de esta nota.

² Sobre la fecha de entrega de este texto se produjo el rechazo por parte del Senado de la media sanción de la Cámara de Diputados y la consecuente derogación de la Resolución 125.

³ Al respecto merece destacarse que existe una denuncia en sede judicial en la que se imputa a las principales empresas exportadoras de haber hecho declaraciones anticipadas de ventas externas de mercadería que no había sido adquirida. Dicha «anticipación» habría tenido como propósito el de pagar al fisco una retención menor (la vigente en octubre) pero descontarle al productor la nueva (introducida en noviembre) del 35 % en el caso más difundido de la soja.

⁴ Es clara la diferencia en la composición de los ingresos entre 2001 y 2002. En este último año se imponen retenciones al petróleo y a los granos y otros bienes primarios.

⁵ Insistimos que aquí se habla del PBI o, lo que es lo mismo, de la cuantía total de la torta por repartir constituida por la riqueza que la sociedad es capaz de generar en un año, mientras que en los párrafos previos se aludía sólo a la recaudación fiscal. Así, los ingresos fiscales consolidados fueron una cuarta parte de la riqueza total generada.

Bibliografía.

Lindenboim, J., D. Kennedy y J. M. Graña (2006), «Distribución, consumo e inversión en la Argentina de comienzos del siglo XXI», Realidad Económica N° 218, IADE, Buenos Aires, 16 de febrero a 31 de marzo.

Fuentes de Información.

Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, INDEC, Ministerio de Economía y Producción.

http://www.mecon.gov.ar/secpro/dir_cn/default1.htm

Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal, Secretaría de Hacienda, Ministerio de Economía y Producción.

<http://www.mecon.gov.ar/sip/basehome/dir1.htm>

Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía y Producción. Información Económica al Día.

<http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/infoeco.html>

Introducción

Los clásicos desde Karl Kautsky, hablaron de «la cuestión agraria» haciendo referencia a que la producción en base a la tierra constituía un problema, una seria dificultad. El problema se centra en que el factor de producción más importante del sector es la tierra y ella, aunque se comporta como una mercancía (se compra, se vende) no lo es. No es producto del trabajo humano sino constituye un «recurso natural». Todos los recursos de la naturaleza mercantilizados, producen por esta característica, una «sobreganancia», que se denomina «renta». En los últimos tiempos en la Argentina (los meses del paro agrario de 2008) se oyó hablar acerca de la «renta extraordinaria» de los productores sojeros. Renta basada en los altos precios internacionales pero también en la apropiación privada de la tierra y en las diferencias de fertilidades que hacen, de la Región de la Pampa Húmeda una de las regiones del mundo de mayor productividad

Por estas razones no sólo las teorías de izquierda como el marxismo, sino las liberales consideraron seriamente que para que los propietarios de las tierras no tuviesen estas ventajas frente a los propietarios capitalistas del sector industrial, la tierra tenía que permanecer en manos del Estado y los capitalistas agrarios debían rentarlas convirtiéndose en arrendatarios y, de este modo, la renta agraria quedaría en manos de toda la nación. Pero el antecedente peligroso que esta decisión constituía para todo el sistema de propiedad privada, influyó para que en las teorías liberales, más allá de algunos autores como Stuart Mill, no fuera una propuesta que prosperara. Sin embargo, como muy bien lo explica Carlos Marx, para que exista renta por propiedad («renta agraria absoluta») tiene que existir una clase de terratenientes cuya base territorial es el fundamento de un fuerte poder político. Por eso muchos «agraristas» durante el siglo XX propusieron estructuras agrarias basadas en la pequeña agricultura familiar y relacionaron fuertemente las posibilidades de democratizar las sociedades con este tipo de sujeto agrario. Fue el siglo de las reformas agrarias promovidas por los organismos internacionales y los estados nacionales.²

Algunos autores han sostenido que en los países de la periferia próspera (EEUU, Canadá, Australia) fueron impulsados tempranos procesos de democratización, debido, precisamente, a la difusión que tuvo la pequeña propiedad en el medio rural (Vallianatos, 2003). Se marcaba una fuerte relación entre la forma en que es controlada la tierra y el carácter político de la sociedad. «Por esta razón, los griegos insistían en que pequeños pedazos de tierra debían ser distribuidos entre la mayor cantidad posible de ciudadanos libres dentro de sus estados, para que la democracia fuera la regla y no la excepción» (Vallianatos, 2003: 57). Los promotores de la constitución de los EE.UU. incorporaron, según Vallianatos (2003: 46/47,57), el modelo griego de democracia agraria en los fundamentos constitucionales de su república. Eran éstos los principios que sustentaban la democracia «jeffersoniana» de los 1800, el

Homestead Act de los años de 1860 y el desarrollo de la irrigación bajo el *Reclamation Act* en los 1900. «Un sistema de poder basado en la Norteamérica rural como para favorecer a los pequeños *farmers* sería acorde con los principios fundamentales de la Constitución (Vallianatos 2003: 57)». Pero este modelo pierde vigencia, en los mismos EE.UU., a partir del auge de la agroindustria, de las grandes empresas agroalimentarias, denominadas genéricamente como *Agribusiness* (agronegocio).

Nuestra América latina se constituyó como tal desde una apropiación colonial, devastadora y expoliadora sobre todos los recursos naturales. Tal vez los símbolos de esta colonización ibérica basada en la expoliación fueron la tierra y las montañas con sus ricos minerales (que hoy nuevamente están en la agenda neocolonial). Los grandes latifundios, las inmensas estancias cimarronas del sur, haciendas y plantaciones marcaron estas tierras en un destino del que parece difícil salir. Las reformas agrarias del siglo XX no alcanzaron para democratizar la tierra. Mientras los países ibéricos colonizados se fueron retirando durante el siglo XIX, los modos de apropiación de los recursos, la tierra y territorios en general; las formas de concebir la apropiación de sus riquezas; los modos de generar conocimientos sobre ellos y la manera de pensar la redistribución de sus frutos, permanecieron en lo que muchos autores llaman «colonialidad» del poder y del saber (Quijano 2000). Es decir, el colonizador nos dejó internalizados sus propios modos de concebir la naturaleza, la vida y el conocimiento. Los viejos y ancestrales modos de concebir los territorios, la naturaleza en general, los alimentos y las relaciones entre los hombres, de las culturas preexistentes – Anahuac, Tawantisuyo, Abya Ayala- con la llegada de los ibéricos fueron interiorizados, invisibilizados produciéndose no sólo un verdadero etnocidio sino un fatal «epistemicidio» (Santos, 2006)

Enmarcar las reflexiones acerca de la tierra en estas miradas que hoy recorren nuestras naciones de la mano de nuevos actores en lucha, habilita la posibilidad, justamente, de que otras construcciones sean posibles en los escenarios de países en proceso de transformación. En nuestros días, pensar en la democratización de la tierra, la agroecología, la soberanía alimentaria, el respeto a la diversidad biológica y cultural como modo de construir los mundos agrarios y rurales es posibilitar la re-emergencia de formas de organización no coloniales y generar otras desde una tenaz resistencia a los mandatos neoliberales de «agronegocio».

El caso argentino

La Argentina es uno de los países donde mejor funciona la teoría de la colonialidad del poder y del saber para dar cuenta de su historia dramática. El exterminio de sus poblaciones indígenas producido por quienes, justamente, «formaron la nación agroexportadora» en los finales del siglo XIX, condujo a que la «colonialidad», cara oculta de la «modernidad»,

habitará los pliegues más ocultos del poder y la sociedad. De este modo, los valores neocoloniales – ingleses primero, de EEUU y del mundo globalizado después- fueran tomados como propios y naturalizados en niveles desconocidos en la mayor parte de los países de América latina. De allí la actitud de nuestras elites y los sectores sociales altos y medios en relación con Europa y su distanciamientos de los países hermanos. El país se consideró «moderno», con posibilidades de «progreso» ilimitado y en esa etapa se configuró una estructura social agraria basada en la gran propiedad ganadera y en un proceso de asentamientos de colonos europeos para la producción agraria complementaria a la primera. Toda la esperanza «blanqueadora» de pieles –desde la generación que pensaba el país desde el puerto- estuvo asentada en estos colonos europeos. A las pocas comunidades indígenas que habían sobrevivido –mapuches, ranqueles, aymaras, guaraníes, wichis - se las arrinconó y se la utilizó como mano de obra barata para las florecientes agroindustrias del norte del país. Los colonos europeos y las comunidades resistieron a las elites terratenientes nativas durante la primera parte del siglo XX y con el gobierno del Gral. Juan Perón varias mejoras de las legislaciones de arrendamiento y de contratos de trabajo (El Estatuto del Peón) fueron conseguidas. Durante algunas décadas se fue generando un entramado institucional que permitió la coexistencia razonable de la gran propiedad terrateniente con la pequeña producción familiar («chacareros» de origen europeo) y el sector campesino criollo. Esto cambia rotundamente en los finales del siglo.

La gran transformación conservadora

Desde los mediados de los setenta, siguiendo los lineamientos del Consenso de Washington, el denominado modelo neoliberal fue permeando la economía en general y la agrícola en particular. Esta transformación tuvo varias etapas pero en los noventa, durante el gobierno de Carlos Menem, logró concretarse. Se llevó a cabo, por un lado la desregulación económica con el desgarramiento de aquella trama institucional que permitía la coexistencia de la gran y pequeña producción y por otro, en 1996, la autorización de la semilla transgénica de soja, que produjo la gran expansión de la oleaginosa. Comienza entonces un gran proceso de concentración de tierra y capital en la agricultura argentina.

Durante los años noventa, muchos integrantes de los llamados «estudios rurales» argentinos –como en el resto de América latina- se entusiasmaron con la liberalización de la economía agraria pues consideraron que esto permitiría un desarrollo productivo importante (cosa que realmente sucedió) y la finalización de políticas de «corte populista» (la protección a la pequeña propiedad). En estas concepciones, el mercado es considerado el mejor asignador de recursos y es quien permitirá bajar los costos de producción y obtener alimentos más baratos. Por supuesto esto último no sucedió: los alimentos aumentaron de precio, la gente fue expulsada del campo y perdió la posibilidad de la subsistencia y también de recibir a los parientes que habían migrado a la ciudad y fueron expulsados del mercado laboral. Se terminó de perfilar la configuración socioeconómica de la Argentina actual y en particular del país agropecuario. El Censo Nacional Agropecuario del 2002 mostró claramente esta tendencia (véase Teubal, et al 2005 y cuadro I).

Los primeros que recibieron el cimbronazo del gran cambio productivo fueron los pequeños productores del estrato de los familiares capitalizados, los más grandes del estrato de

«hasta 200 hs» y perdieron la tierra a través del mecanismo por el que la pierden en casi todo el mundo: vía endeudamiento. La estabilidad relativa en el nivel general de precios lograda a partir la aplicación del Plan de Convertibilidad –un peso igual a un dólar- del gobierno de Menem, creó una nueva situación aparentemente favorable al otorgamiento del crédito bancario al sector agropecuario. De este modo se liberó una serie de recursos crediticios a disposición de los pequeños productores en general.

Como consecuencia, aumentó el crédito agropecuario y el sector acrecentó significativamente su endeudamiento global. Hubo asimismo de parte de círculos oficiales el aliento a la «modernización» que indujo a muchos productores a endeudarse para comprar un tractor, renovar su maquinaria agrícola, etc. Los montos del endeudamiento financiero del sector fueron aumentando significativamente de \$1.883 millones de pesos (equivalentes a la misma cantidad de dólares) en 1990, a \$7.145 millones para el año 1994. Si agregamos el componente impositivo, previsional y comercial, la deuda global del sector alcanzaría en 1996 a un monto del orden de los 10 mil millones de pesos. Unas 13 millones de hectáreas estaban hipotecadas por los bancos y obviamente los pequeños productores comenzaron a no poder pagar.

Si bien en este mismo período los plazos promedio del endeudamiento aumentaron de 1.5 a 3 años, las tasas de interés reales y los costos financieros afines para el período post-hiperinflacionario (post 1989-1991) superó en promedio el 20% anual en términos reales (24% para el año 1991, y 20% para los siguientes), las cuales constituyen tasas de interés muy superiores a las disponibles en el nivel internacional. Estas tasas de interés no toman en cuenta una serie de costos que incluye el crédito bancario, tales como comisiones, gastos de mantenimiento etc. Asimismo, las garantías que exigen los bancos argentinos para el otorgamiento del crédito tienden a ser muy rigurosos. Estos gastos del endeudamiento tampoco consideran los intereses punitivos que tienden a multiplicarse hasta resultar confiscatorios.

Debido a que la estabilidad de precios lograda en los años de 1990 no fue acompañada por las correspondientes caídas de las tasas nominales de interés, las tasas reales aumentaron, haciendo más rentable el negocio financiero pero con perjuicios para los tomadores de crédito. Asimismo, las tasas de interés nominales fueron muy diferentes para los medianos y pequeños empresas con relación a los grandes.

La rentabilidad del sector, particularmente en lo que atañe a los medianos y pequeños productores, no creció a la par del endeudamiento. En forma creciente los productores medianos y pequeños se encontraron con deudas difíciles de cubrir debido a la situación macroeconómica. Si a esta situación se agrega el endeudamiento impositivo y previsional, puede entenderse el cuadro de crisis que paulatinamente fue gestándose.

En 1996 comenzaron los remates de tierra y simultáneamente aparece un movimiento de deudores (en realidad deudoras) que comenzaron a parar los remates a puro cánticos y rezos: es el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha que lleva parado más de 500 remates pero que aún con estos logros no ha podido lograr que miles de otras familias perdieran sus tierras y muchos agricultores en forma dramática terminaran con sus vidas (véase Giarracca y Teubal, 2001).

De este modo, la expansión sojera encontraba una de las tantas formas de trabajar a «gran escala» en la zona más rica del país: la región pampeana. Pero mientras el precio internacional

de la soja aumentaba seguía no bastándole concentrar tierra allí y los inversores sojeros con la ayuda de algunos estudios agronómicos y financieros de la zona norte del país, comenzaron una sistemática búsqueda de tierras en esta región. Los precios ayudaron, productores de alimentos como el arroz, la caña de azúcar, otros cereales se dedicaron a la soja. Así se calculaba que desaparecerían 400 tambos (producción de leche) por año y los datos en general son elocuentes: la producción de soja pasa de 1988 al 2002 de 7.176.250 a 12.606.845 hectáreas mientras que, con excepción del trigo que acompaña la rotación de la soja, todos los granos disminuyen la superficie y la de los cultivos industriales (ubicados básicamente en la zona norte) lo hacen en una magnitud preocupante.

El segundo paso fue avanzar hacia las yungas o montes nativos y hacia territorios ocupados por campesinos y comunidades indígenas. Mientras que en el año 1914 los bosques nativos ocupaban el 39% de la superficie del país, hoy sólo representan el 14% del territorio nacional. Como lo han venido denunciado las organizaciones ecologistas, a partir de 1999, el desmonte, la tala indiscriminada sumó más de ochocientos mil hectáreas, básicamente a la producción sojera. En los últimos años de la «locura sojera» por el salto de los precios internacionales, se desmontaron 250 mil hectáreas de bosques nativos por año. Simultáneamente, el ecosistema de la región se deterioró debido al alto valor que poseen los bosques en materia de captación y regulación climática.

Arrinconamiento de la producción familiar y las resistencias

La crisis desatada por la desregulación económica complicó la integración de la pequeña producción a las actividades agroindustriales; las políticas públicas para el sector se convirtieron en «políticas sociales de contención» contando algunas de ellas con componentes productivos de escasos resultados reales a pesar de los grandes montajes burocráticos y técnicos. Muchos productores optaron por estrategias sociales que les permitieran mantener la valorada tierra: migraciones o multiocupación para conseguir ingresos extraprediales, por ejemplo. Pero en las regiones donde la tierra se convertía en la posibilidad clave de la expansión sojera la situación se presentaba con algunas diferencias. En efecto, Santiago del Estero una de las provincias más ruralizadas del país se

convierte en el blanco de los inversores, se arrasan yungas y poblaciones que ocupan tierra con una forma de propiedad reconocida por el Código Civil de comienzos de siglo XX: la propiedad veinteañal. La ocupación por 20 años con mejoras sobre el suelo y sin registro de reclamos de eventuales propietarios, los convierte en portadores de derechos sobre la tierra. Los santiagueños para defender este derecho se vienen organizando desde comienzos de la democracia. En 1990 crearon la organización provincial que lleva el nombre de Movimiento Campesino Santiagueño (MOCASE). Otra provincia que está en la mira de los inversores es Salta, limítrofe con Bolivia por la extensión de sus yungas y por la ocupación de las poblaciones indígenas de sus tierras ancestrales, siempre en litigios.

Las organizaciones que resisten las ocupaciones de tierra crecen en todo el país, se congregan durante 2008 en La Coordinadora Nacional Campesina que integra al Movimiento Nacional Campesino e Indígena, la Federación de Campesinos y un gran conjunto de organizaciones independientes. Existen otras organizaciones articuladas con el Consejo Asesor indígena (CAI) del sur del país o independientes y autónomos pero de significativa visibilidad como la Organización Tinkunaku (en 2007 recuperó 60 mil hectáreas de sus ancestrales tierras).

La tierra argentina, concentrada en pocas manos desde el avasallamiento de los territorios indígenas y la apropiación en la formación nacional de 1880, en el siglo XX fue concentrándose aún más y sobre todo a partir de la mitad posterior del período. Mientras en el Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 1947 en las 173.448.104 has implantadas se asentaban 471.389 explotaciones, haciendo un promedio medio de superficie de 367,9 hs, en el último CNA de 2002, en las 174.808.564 has censadas se asentaban sólo 333.533 explotaciones, subiendo el promedio en 524,1 has. Téngase en cuenta que en Europa el promedio de superficie por explotación ronda las 40 hs y en EEUU no pasa las 200 has.

Este continuo proceso de concentración de la tierra en pocas manos puede verse en el cuadro I donde se comparan los dos últimos censos (1998 y 2002); puede notarse la disminución de las explotaciones en casi todos los estratos de superficie hasta las 500 has y el aumento de 12 empresas en el mayor estrato registrado (más de 20.000 has) sumando casi un

Cuadro 1: Comparación CNA 1988-2002 para los distintos estratos de explotaciones agropecuarias.

	CNA 1988		CNA 2002		Variación CNA 1988-CNA 2002	
	EAPs	Sup. (ha)	EAPs	Sup. (ha)	EAPs	Sup. (ha)
0-5	57.057	148.000,30	40.957	105.895,10	-16.100	-42.105,20
5,1-10	31.680	247.140,20	22.664	177.973,50	-9.016	-69.166,70
10,1-25	52.938	942.054,40	39.833	714.584,20	-13.105	-227.470,20
25,1-50	45.265	1.724.033,10	33.787	1.290.129,10	-11.478	-433.904,00
51-100	48.006	3.646.959,60	34.881	2.660.005,50	-13.125	-986.954,10
100,1-200	47.083	6.929.412,30	34.614	5.150.390,10	-12.469	-1.779.022,20
200,1-500	47.772	15.290.154,60	40.211	13.113.229,40	-7.561	-2.176.925,20
500,1-1000	21.101	14.870.541,20	21.441	15.261.566,50	340	391.025,30
1000,1-2500	15.296	24.230.238,90	16.621	26.489.560,00	1.325	2.259.321,10
2500,1-5000	5.958	21.461.108,00	6.256	22.525.345,10	298	1.064.237,10
5000,1-10000	3.339	24.513.555,40	3.373	24.509.127,40	34	-4.428,00
10000,1-20000	1.938	28.756.624,70	1.851	27.296.370,20	-87	-1.460.254,50
más de 20000	924	34.677.575,00	936	35.514.388,00	12	836.813,00
	378.357	177.437.397,70	297.425	174.808.564,10	-80.932	-2.628.833,60

Fuente: tomado de Teubal, et al, 2005:65

millón de hectáreas al estrato. En esos niveles de superficie, además, es donde aparecen los fuertes *pools* de siembra con grandes financiadores nacionales e internacionales.

Algunas reflexiones finales

El caso argentino es uno de los más dramáticos en relación con el tema de la democratización de la tierra. El país posee una de las praderas más fértiles del planeta que desde que se configuró el territorio permanece en pocas manos tanto en lo referente a la propiedad como al control sobre la producción. Nunca se discutió la posibilidad de una reforma agraria, ni siquiera cuando esta política pública estaba en la agenda de los organismos internacionales. El destino que se deparó al país es el de la gran extensión agrícola para beneficio terrateniente primero y para los nuevos sujetos del agronegocio luego. La «reforma agraria» nunca figuró en la agenda política de los partidos con base popular, nunca además se pensó posible que los desocupados - desafiados del sistema industrial a mediados de los setenta (situación agravada en los noventa)- pudieran encontrar un destino de trabajo agrícola en las extensas tierras agrícolas ganaderas al estilo del Movimiento Sin Tierra en Brasil. En el imaginario social de la «moderna» Argentina, el campo es un gran territorio que produce las divisas necesarias para financiar un estilo de vida urbano (lo más parecido a Europa posible) y si en él hay o no agricultores, es una cuestión que lo tiene sin cuidado³. Muchas veces he repetido que Raymond Williams en su libro «El campo y la ciudad» sostenía que en Gran Bretaña, el primer país que se industrializó y urbanizó en el mundo, se podía hallar a poco de retroceder en las biografías personales de sus habitantes un pasado agrícola del que se sentían nostálgicos y orgullosos. Por el contrario, la Argentina, país capitalista que emerge en el siglo XIX por su desarrollo agroexportador, siempre ha tratado de negar estos comienzos agrarios; se ha empecinado

en negar esas mayoritarias historias familiares con antepasados indígenas, europeos, árabes, rusos, criollos, etc. de orígenes campesino, para resaltar la gran ciudad, su cultura y su progreso europeizante. Como buenos consumidores de la modernidad periférica, se colocó en el campo y en sus pobladores el atraso y la barbarie, mientras en la ciudad y la industrialización temprana se visualizó el añorado e ilimitado progreso. Por eso, lo que pasara con la tierra poco importaba al ciudadano medio.

Por todo esto, es muy interesante conocer lo que está pasando en los últimos tiempos en relación con la tierra en Argentina. Por un lado, pobladores de las zonas arrasadas por los inversores sojeros se organizan, crecen en número y en organizaciones y luchan por permanecer en las tierras y extender sus territorios. Por otro, las comunidades indígenas estimuladas por el gran movimiento latinoamericano y mundial de los pueblos y naciones indígenas, reclaman por la devolución de sus territorios. Los documentales y bibliografía críticos a la tendencia de la gran expansión sojera pululan por los ámbitos de los universitarios ciudadanos. Agregaría, finalmente, que en el último conflicto del gobierno con el campo (marzo a julio de 2008), la batalla simbólica, mediática el gobierno la pierde antes que la legislativa⁴. Justamente, por no saber diferenciar a los pequeños productores de maíz, trigo, producción de carne, lechería e incluso soja del gran terrateniente agropecuario y de los nuevos y grandes sujetos agrarios sojeros (o diferenciándolos tardíamente). Estas miradas sobre las poblaciones que habitan los vastos territorios por parte del habitante de las grandes ciudades, son relativamente novedosas y suponen que un debate sobre la democratización de la tierra en la Argentina y una profunda crítica a la famosa «agricultura a gran escala» con tecnologías de punta –la mentada «agricultura sin agricultores»-, hoy es posible.

21

Notas

¹ Socióloga. Profesora Titular de Sociología Rural y Coordinadora del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires.

² Es muy interesante constatar que en la actualidad la mayoría de los organismos internacionales no sólo evitan conceptos como «reforma agraria» sino el de «tierra» (hasta la propia FAO)

³ «Agricultura sin agricultores» fue una frase diseñada por los franceses, rechazándola y demostrando que en realidad, a los europeos, les interesa el paisaje agrario, sus poblaciones, sus productos con fuerte carga cultural como el vino, los frutales, etc.

⁴ No puede aprobar una ley de impuestos a las exportaciones en la Cámara de Senadores

Bibliografía

Giarracca, N. y Teubal, M. (2001), «Crisis and Protest en Argentina: The Movimiento Mujeres Agropecuarias en Lucha», en *Latin American Perspectives*, Issue 121, Vol. 28, N° 6, noviembre, EEUU.

Giarracca, Norma (2005), «La gran transformación agraria y de los mundos ‘rururbanos’», en *Encrucijadas. Revista de la Universidad de Buenos Aires*, N° 30, Buenos Aires.

Quijano, Aníbal (2000) «Colonialidad del poder eurocentrismo y América Latina» in *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales*, Buenos Aires, CLACSO.

Santos, de Sousa Boaventura (2003), *La caída del ángel novus: ensayos para una nueva teoría social y una nueva práctica política*, Bogotá, ILSA.

Santos, de Sousa Boaventura (2006), *Renovar la Teoría Crítica y Reinventar la Emancipación Social Encuentro en Buenos Aires*, Buenos Aires, CLACSO - Facultad de Ciencias Sociales. En prensa.

Teubal, Miguel *et al* (2005), «Transformaciones agrarias en la Argentina. Agricultura industrial y sistema alimentario», en Giarracca, N. y Teubal, M. (coord.), *El campo en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad*, Buenos Aires, Alianza Editorial.

Vallianatos, E. G. (2003): «American Cataclism», en *Race & Class*, Institute of Race Relations, Vol. 44, N° 3, enero-marzo, Londres.

La soja de la discordia. Los sentidos y estrategias en la movilización de la pequeño burguesía.

Marcelo Gomez*

«Lo que siempre fue, lo mismo será
Lo que siempre hicieron repetirán
No olvidar
Lo que ves ya se ha visto ya
Tal vez algún día lo sabrás
Todo tiene un tiempo bajo el sol
Tiempo de plantar y de cosechar
Tiempo de hablar y también de callar
Tiempo de guerra y tiempo de paz
Tiempo para el tiempo y un rato más»
Profecías Vox Dei La Biblia, 1973

Las situaciones de antagonismo colectivo e incertidumbre generan fuertes efectos «subjektivantes»: rompen la apatía y la inercia propia de la confianza ilusoria en un futuro estable, nos sacan de la despreocupación por los asuntos públicos. La tranquila neutralidad comienza a aparecer como riesgosa forzando paulatinamente a la toma de posiciones. Los temas de conversación ya no están monopolizados por la industria de la distracción relajada (Tinelli, la farándula, el fútbol, etc.) y nos vemos compelidos a clarificar nuestros propios intereses respecto de sus relaciones de complementariedad o contradicción con otros intereses. Los antagonismos colectivos obligan a pronunciarnos sobre proyectos societales, y suscitan efectos de visibilización u ocultamiento con sus correlativas maniobras de manipulación en torno a la lucha por la definición de lo que es «la realidad»¹.

De manera muy nítida, la reaparición del conflicto social de la mano de la lucha por el control del excedente derivado de la colocación de exportaciones primarias en general y de la soja en particular sirve como un decodificador de cambios en la estructura social, en el proceso económico y en las orientaciones y prácticas políticas de las clases sociales.

La movilización colectiva extendida muestra el carácter clasista del conflicto: son intervenciones multitudinarias acerca del orden social, su sentido, la distribución de costos y beneficios, ventajas y desventajas, intentos de modificar posiciones relativas en el acceso a recursos, disputas sobre el sentido de los procesos económicos, sobre el alcance que dan en concreto a ideas como justicia y equidad. Nos interesa el conflicto en tanto no se trata de conspiraciones de elites o especulaciones de políticos —que por cierto existen siempre— sino de la movilización de capas importantes de la población en torno a intereses definidos en el marco mismo de estos procesos, es decir planteamos el análisis como fenómeno que actualiza clivajes clasistas para entender lo político.

Es en este sentido de análisis clasista, que vamos a presentar algunas observaciones o comentarios acerca de la significación de la producción agropecuaria centrada en la soja para el proceso de acumulación de excedente y para el proceso de formación de nuevos actores sociales, de nuevos intereses, prácticas y estrategias políticas en las clases dominantes y las clases medias.

I- La centralidad económica y política del excedente sojero y las retenciones

A partir del activismo de los «hombres de campo» se ha reflatado la instalación de la importancia de la producción agropecuaria para nuestro país. Sin embargo, cualquier lectura del PBI según ramas y sectores muestra que el agropecuario ni siquiera alcanza al 6 % del total siendo muy superado por la industria manufacturera y hasta por los servicios (los servicios de educación, ciencia y tecnología, generan más del 7% del producto, por ej.). No se trata entonces de una importancia cuantitativa, ya que la riqueza que generan otros sectores es

mucho más importante que la agropecuaria.

Incluso debe ser desechada también la idea de que la producción agropecuaria fue la base del crecimiento económico del último quinquenio. Mirando las series de cuentas nacionales vemos que su evolución en los últimos años ha ido por debajo de otros sectores: la industria y los servicios crecieron bastante más que el sector agropecuario. No es cierto que el excedente sojero explique el crecimiento de la economía, los datos dicen que los incrementos de producción, empleo e ingresos de la población se explican mucho más por la actividad de otros sectores.

Así, cabe preguntar acerca del porqué de la magnitud que ha asumido el conflicto y del porqué de la centralidad social y política del sector agropecuario. ¿Es una pura construcción mediática o cultural o existen otros fundamentos de esa centralidad?

Una de las constantes históricas como clave de lectura de los procesos económicos en nuestra historia ha sido la de la superposición entre los bienes agroalimentarios que la argentina debe exportar para generar excedente de divisas y los «bienes salarios» que conforman la canasta básica de consumo de su fuerza de trabajo. Peor aún el excedente de divisas es necesario para sostener el proceso de industrialización y desarrollo de los servicios que son importadores netos de bienes de capital y demandantes deficitarios de divisas. Es decir, las divisas que produce el sector agroalimentario son las que abastecen y posibilitan las importaciones del resto de los sectores económicos. En este sentido, el reciente incremento de la producción, el empleo y el salario industrial obedece sin duda a un incremento de la rentabilidad media del sector obtenida por la protección de un tipo de cambio devaluado, pero al mismo tiempo depende de una abundante provisión de divisas que permite importar insumos, materias primas industriales, bienes de capital e intermedios que son necesarios para la actividad industrial.

Esta suerte de «dependencia fisiológica» estructural de la absorción de parte importante de la renta de la tierra se ve claramente cuando se recuerda que las retenciones fueron parte fundamental de la política económica de Onganía, y que la sobrevaluación del tipo de cambio impuesta por el agroganadero Martínez de Hoz, o la convertibilidad con tipo de cambio bajo e inflación en dólares de la era neoliberal en los '90, significaban también otros instrumentos nítidos de captación de esta renta². Por tanto, una primera conclusión es que lo que está en juego en este conflicto no es simplemente la apropiación fiscal «indebida» de un recurso excedentario (Estado vs. Campo) sino fundamentalmente la direccionalidad económica de esa apropiación, es decir el para qué, el destino final de esos recursos, su inscripción en un proceso de acumulación/distribución.

Tradicionalmente los ajustes devaluatorios para promover exportaciones y equilibrar balanza de pagos, suponían una fuerte baja del salario real a través de fenómenos inflacionarios

y caída del consumo interno para liberar saldos exportables. Sin embargo, la particularidad del proceso devaluatorio nacido en el 2002 es que se ha combinado con un crecimiento sin precedentes del nivel de actividad, consumo y empleo en casi todos los sectores. Ello es así porque la coyuntura de precios internacionales de muchos alimentos luego de la incorporación de China a la OMC ha significado aumentos sin precedentes de los precios, que se han vuelto insólitos luego de las turbulencias financieras del último trimestre del año pasado. En efecto, los mercados de commodities fueron inflados por los capitales que huyen de los riesgos de inversión en papeles y es así como se llega a un precio de la soja que supera la barrera de los 500 U\$ la Tn. La hiper abundancia de divisas permitió que los costos internos del tipo de cambio alto fueran amortiguados, compensados o directamente sufragados con ella. Así el déficit de balanza comercial del sector industrial manufacturero³ y de servicios no fue achicado sino todo lo contrario, dando rienda suelta al crecimiento espectacular de la economía y no tan espectacular pero sí llamativo de los salarios e ingresos de la población.

De esta forma, el boom de la soja es algo así como la tarjeta banelco que permite eternizar el ciclo expansivo de la economía. El agroalimentario es el único sector que tiene el password para acceder al excedente mundial—como antes había sido la lana, el trigo o la carne y en otros países es el petróleo- y por ello se convierte en la pieza clave de toda la arquitectura de la acumulación. No es el sector más grande, no es el que ha motorizado el crecimiento, pero sin los billetes verdes que se consiguen con la «maldita soja» el resto se empantanaría. Su importancia es exclusivamente estratégica: es la llave del tesoro, es el control del excedente de divisas, es una «Casa de la Moneda» más importante que la que emite nuestros billetes. Es por ello que la pugna con el sector que tiene acceso al excedente mundial no puede tener nada de sorprendente: todos los demás dependen en última instancia de él⁴.

Como ha explicado Bourdieu (2001) en su teoría de las estructuras sociales del campo económico: es dominante aquel que ocupa en la estructura «un lugar tal que la estructura actúa en su favor». La dependencia de la única fuente excedentaria de divisas tanto de la autoridad política estatal (sostener superávit fiscal, impedir el endeudamiento, mantener tipo de cambio protectorio competitivo, compensar costos para mantener salario real, etc.) como del resto de los sectores (acceder a maquinarias e insumos importados, sostener consumos sofisticados de clases medias en ascenso, déficits comerciales externos, etc.) es lo que funda el poder del «campo». Son los titulares de la «solvencia estratégica» del sistema a pesar de que generan escasa riqueza social.

La dependencia «política» de las divisas merece un párrafo aparte porque condiciona el comportamiento esperable o posible del comando político. En realidad el modelo kirchnerista tiene el enorme éxito de haber salido de la dependencia adictiva al financiamiento externo de la economía aprovechando la coyuntura comercial internacional extraordinariamente favorable con una valorización enorme de los términos de intercambio, pero al costo de una suerte de «endeudamiento político» con las clases detentadoras del excedente extraordinario. Las condiciones de gobernabilidad y las amenazas que la movilización popular generalizada (entre 2001 y 2003) cernía sobre las clases instaladas en los lugares estratégicos de la estructura, posibilitó la primavera de una acumulación más distributiva. Los sojeros fueron para

Kirchner hasta marzo/08 lo que el capital financiero y el remate de activos públicos fue para Menem en los '90. En cierta medida el secuestro de ahorros del 2001—no por el Estado, que dio simplemente la cara, sino por los bancos- era el cobro de una deuda económica (el ingreso de capitales líquidos) con la que se estimuló la economía en los '90. De forma semejante, la inflación, la huelga y sabatoje económico del sector agropecuario excedentario es el cobro de una deuda política contraída con los que pusieron los excedentes en divisas para posibilitar el crecimiento en el pos2002.

Si adoptáramos el punto de vista del actor en el lugar central de la acumulación, podríamos ver «la construcción K» como una inversión en el restablecimiento de las condiciones generales de gobernabilidad y gestión de la dominación y la acumulación. «Nosotros le pagamos a los vagos que los apoyan» decían unos chacareros en el piquete de Gualaguaychú criticando los multitudinarios actos oficialistas. En su percepción la «caja de K» es la que ellos le proporcionaron. En su relato ahora con tasas de desocupación reducidas y habiendo elevado el ingreso y el consumo gracias a ellos, «la construcción K» es ya una intermediación innecesaria a la que «si le sacamos la plata, se cae». La idea es que no existe en «la construcción K» ni lealtad ni ideología, que nadie los va a defender si se quedan sin caja, que el kirchnerismo es pura demagogia «solo aumento del PBI y del consumo» capitalizado de manera indebida por el kirchnerismo y sus aliados. «SS» decía Menem: «soja y suerte».

En última instancia la adhesión de las clases populares marginadas la podrían conquistar ellos u otro líder con camiseta peronista con el mismo dinero o menos, para hacer gala de eficiencia. En definitiva, el conflicto también es tributario de los éxitos del gobierno: el retorno de la hegemonía en la forma de una revalidación de los intereses de la acumulación atada a la integración al mercado mundial, solo es posible por el éxito en resolver lo suficiente los déficit de integración social y legitimidad política instalados desde el 2001. «Gracias K por los servicios prestados» parecería ser el grito de guerra no dicho.

En este punto conviene precisar acerca del sentido de las retenciones móviles.

En este momento, la renta de la tierra se basa en: 1) la fertilidad y el régimen de lluvias y ríos que en gran medida son bienes públicos; 2) la devaluación del peso que es una medida pública de gobierno forzada por las circunstancias (insolvencia generalizada y recesión catastrófica en el 2002); 3) la estampida de precios internacionales que es una contingencia que nada tiene que ver con inversión, riesgo o productividad; 4) en el desarrollo tecnológico (semillas genéticamente modificadas resistente a los herbicidas más brutales⁵ y maquinaria de siembra directa, agroquímicos fertilizantes).

Por el punto 2 las retenciones no deben considerarse propiamente como un impuesto: no se grava ni el trabajo, ni el patrimonio, ni los beneficios ni los ingresos netos generados por una actividad, sino que se retienen diferencias generadas por una medida monetaria y una política cambiaria de depreciación de la moneda. En este sentido la medida de las retenciones se inscribe dentro de una política cambiaria y monetaria y no en una política fiscal. Busca fijar un tipo de cambio efectivo para una actividad de manera de neutralizar los efectos de arrastre sobre los precios internos. La dificultad aparece con el aumento especulativo de los precios: la devaluación internacional del dólar y de muchos activos financieros hace que se inflen los precios de muchos bienes, especialmente

los primarios, haciendo insuficiente el uso de un tipo de cambio efectivo fijo y obligando a moverlo al son de los precios internacionales. Es en esto en lo que consiste la movilidad de las retenciones: ya no hay tipo de cambio efectivo fijo sino móvil para combatir la fluidez de precios internacionales. Mientras el resto de la economía disfruta de una convertibilidad protectora (el U\$\$ a 3 \$), el detentador de la renta sojera debe someterse a una flexibilidad cambiaria que tiene techos mucho más bajos (1,60 \$ por U\$\$ aprox.) Si en los '90 el tipo de cambio fijo garantizaba el ingreso de capitales que financiaba la expansión de demanda y consumo, a partir del 2002 es la fijación -primero semifija y luego móvil- del precio que garantiza el ingreso de divisas (el de la soja) el que constituye una condición de posibilidad de la expansión de la demanda y el consumo. En la etapa expansiva de los '90 se contrarrestó la reaparición de la pugna distributiva por la combinación tipo de cambio fijo y bajo e ingreso irrestricto de capitales financieros, luego de la crisis se evitó la misma pugna mediante la combinación tipo de cambio exportador bajo con «expropiación» vía retenciones (tipo de cambio diferencial) del excedente de divisas.

Sin embargo, no hay que confundirse, las retenciones no son en sí una política de redistribución activa sino pasiva: busca que el ingreso no se concentre en el sector exportador por la apropiación de las ventajas de la devaluación⁶. No hay mejora en la distribución del ingreso solo compensa o anula los efectos de una política que por sí misma castiga el salario real (la devaluación). Sin perjuicio que el gobierno estimuló la mejora del salario real aumentando el salario por decreto 4 veces entre 2003 y 2005, propiciando negociaciones colectivas al alza, subiendo espectacularmente el salario mínimo y las jubilaciones mínimas, multiplicando jubilaciones y planes sociales, todo lo cual aumentó de manera significativa el ingreso disponible de las clases populares.

En definitiva las retenciones móviles son una política antidistorsiva obvia si se piensa en el equilibrio del conjunto del sistema económico productivo. Además la relación entre retenciones/precios internos/salario real no ha sido puesta en duda por nadie, ni siquiera por los economistas más ortodoxos.

II- La sojización no es solo del campo

Sin embargo esta importancia estratégica de ser la fuente y los detentadores del superávit de divisas en un momento que la Argentina carece de financiadores (salvo las compras «bolivarianas» de bonos) se refleja en algo que pocos han reparado —excepción hecha de Maristella Svampa y Jorge Rullin: el nivel de integración de intereses multisectoriales en torno y detrás del «paquete sojero».

- a) El dispositivo productivo: monopolio de la semilla transgénica y sus cuantiosas patentes, el pesticida glifosato también cuasi monopolístico, la fabricación de maquinaria para siembra directa, los famosos pooles de siembra y grandes arrendadores, el resto de proveedores que dinamizan las economías urbanas del interior.
- b) El dispositivo de transporte y comercialización: acopiadoras —muchos productores también son acopiadores—, puertos privados, transporte terrestre, las cerealeras exportadoras.
- c) El dispositivo financiero: fondos de inversión que financian operaciones de los pooles de siembra y grandes arrendadores. El papel de los bancos no debe despreciarse: en

un periodo de inestabilidad financiera mundial y crisis bancaria latente, los excedentes líquidos de la exportación de materias primas son fondos muy codiciados.

d) El dispositivo industrial: aún muchos industriales pequeños y medianos, ni hablar los grandes, invierten en tierras o en los pooles de siembra y muchos grandes empresarios del campo tienen intereses diversificados en industrias agroalimentarias y servicios conexos.

e) El dispositivo político: muchísimos políticos y hasta algunos sindicalistas son propietarios arrendadores y arrendatarios (Reutemann, Moyano, los más conocidos), otros megaempresarios sojeros han devenido políticos oficialistas (Urquía) sin olvidar la izquierda: Bussi de la CTA y De Angelis de la CCC también son propietarios, en el último caso dicen que arrendador y sojero. El kirchnerista sindicato de peones rurales (UATRE) demuestra su carácter estrictamente propatrimonial y también la naturaleza de las relaciones sociales en un mundo agrario donde se utiliza muy poca fuerza de trabajo manual permanente.

f) El dispositivo burocrático estatal: desde la corrupción de empleados aduaneros en los puertos privados hasta los favoritismos en el manejo de compensaciones, devolución de impuestos, declaraciones antedatadas de exportaciones, y la insólita tramoya del código aduanero de Menem que —con evidente vista gorda política— permite a las cerealeras que liquidan al estado las retenciones a los productores quedarse con una parte, etc.

La corporización espectacular de un proceso en un actor social tan particular (el productor rural) con capacidad de intervención sobre el orden político no puede engañarnos sobre el carácter extendido de la sojización. No es sólo el campo el sojizado, no sólo el campo vive de la soja.

Es decir, el complejo sojero no es ni «el campo» —una idílica comunidad de trabajadores de la tierra— ni una «oligarquía» —un selecto grupo de terratenientes—, no es ni el oficialismo ni la oposición, ni los aparatos del estado que defienden un interés público ni ingenuos productores privados que defienden su trabajo, sino una trama muy extensa de intereses articulados, aunque al parecer todos mucho más rentistas que productivos. El proceso de valorización mundial de commodities alimentarias ha colocado a la renta de la tierra como la palanca de tracción de la acumulación de capital en nuestro país y múltiples sectores definen o redefinen sus intereses y sus posicionamientos políticos en torno a este fenómeno. No se trata de los 2 mil millones de diferencia por la movilidad de las retenciones este año, sino se trata de incrementos de precios esperados a nivel mundial que no tienen techo a la vista.

III- La pequeño burguesía agraria al asalto

Como hemos señalado los superexcedentes no tienen ningún origen en los riesgos o esfuerzos empresariales, ni en la excelencia del trabajo concreto sino en externalidades favorables de mercado y naturales, o en desarrollos tecnológicos por el que algunos monopolios mundiales sacan suculentas tajadas del excedente. El papel del empresariado rural autóctono es nulo en este proceso, carece por completo de mérito y no puede sino calificarse de rentismo directo (alquilan sus campos a las empresas de siembra) o indirecto (compran el paquete de siembra directa para sus campos o arrendan campos de propietarios pequeños que no pueden explotarlos por sí).

La idea extendida en ciertos sectores del «progresismo popular» de una pequeña y mediana burguesía agraria que fue marginada del «proyecto nacional y popular» por un gobierno torpe que la soslayó para negociar con los «grandes» es hasta cierto punto tan absurda como todas aquellas del marxismo vulgar que intentan imputar «verdaderos» intereses a fuerzas sociales.

Esta interpretación es teóricamente falsa aún aceptando la tesis de la «atribución» racional de intereses: esta pequeña y mediana burguesía está hoy racional y objetivamente en las antípodas de una acumulación centrada en el mercado interno, es socia natural del negocio agroexportador y a través de este conflicto que la tiene como abanderada, pugna por su entrada como actor principal con poder de decisión en el «lugar central» de la estructura de dominación económica.

Cualquier proyecto nacional-popular de características mercado internistas y distributivo sería, desde su punto de vista racional, «confiscatorio» en las actuales condiciones.

También es una interpretación empíricamente falsa. Cualquiera que haya pasado por Tres Arroyos, Carlos Casares, Lincoln o Rufino sabe del «derroche» y la picaresca de una clase en ascenso: los hombres en los bares con sus celulares a full manejando negocios, inversiones, preguntando cotizaciones de casi cualquier cosa para invertir los excedentes, tramando maniobras para evadir impuestos, hablando discretamente con las mujeres que ahora pueden «mantener», planificando su próximo viaje de placer, su próxima compra, etc.

Pero esta picaresca complaciente se convirtió a partir de las retenciones móviles en estos últimos meses en un proceso de movilización de fuerte politización y militancia de estos sectores –incluyendo una notable participación de jóvenes– que favorecidos por el tiempo libre que les proporciona el hecho de alquilar sus campos o las escasísimas dificultades que tiene el cultivo de la soja al que manejan prácticamente con un handy, se concentran en los bares y restaurantes o clubes de los pueblos a hacer ambiciosos proyectos económicos y políticos, y a meter presión sobre la dirigencia política tradicional y el resto de los sectores de las ciudades del interior para traccionarlos en esta verdadera «cruzada patriótica». El Goliat de la acumulación agroexportadora bajo la bandera de la soja está formando su propio ejército de base rural.

Por ello hay que superar de una buena vez el esquematismo vulgar de medir «intereses objetivos» y pensar el «campo del pueblo» como una torpe agregación de los débiles frente a los fuertes. Muchas veces desde el punto de vista estratégico, los débiles tienen muchos más motivos racionales para unirse a los fuertes. En este caso particular de la disputa por la renta extraordinaria, no existen conflictos de intereses entre grandes y chicos, sino entre ellos y otros sectores de la fuerza de trabajo de la industria y los servicios a los que no pueden controlar ni económica ni políticamente, y cuyo niveles de actividad dependen del acceso a las divisas que provienen de estas rentas.

Los argumentos de los ruralistas han atacado más las cadenas de «intermediación», los «mercados concentradores» con sus especuladores, es decir a otros segmentos de la pequeña burguesía comercial urbana que a los grandes grupos sojeros o los terratenientes. Las menciones a la «concentración» de la tierra son nebulosas. No hace falta aclarar la obvia contradicción entre el reclamo por bajar retenciones y el reclamo por desconcentrar la propiedad de la tierra. La suba de retenciones baja el precio de la tierra siendo quizás el antídoto más efectivo contra la concentración de la tierra⁷.

Una de las pruebas de que el paquete sojero no favorece especialmente la concentración de la propiedad de la tierra es que el Censo Agropecuario de 2002 muestra que en las zonas pamapeanas sojeras la estructura de propiedad de la tierra permanece estable, justamente debido a que la inversión de los pooles es en soja y no en activos; les conviene alquilar más que comprar la tierra.

En este sentido es suficientemente ilustrativo, el hecho de que el reclamo de los «chacareros» en la ruta no sea el de denunciar los abusos de las exportadoras (Cargill, Dreyfus, Nidera, etc.) y los pooles (Gorobocopatel) que «arreglan» directamente con los funcionarios del gobierno la manera de evitar los costos de las medidas (fraudes en las declaraciones de embarques, declaraciones antedatadas, etc.), sino lisa y llanamente que se sienten «expropiados», confiscados, «que es dictatorial», «que toca su dignidad», etc.

Como relataba un chacarero invitado al almuerzo con M. Legrand «yo nunca había participado antes pero... cuando me metieron la mano... ahí fue instintivo, reaccioné... me tocaron la dignidad».

Es cierto que la FAA fue una convidada de piedra en el manejo político del negocio sojero entre el gobierno y los grandes pooles y exportadores que se anoticiaron de la resolución 125 antes e hicieron las previsiones del caso. Hasta ahora los «chacareros» de la FAA eran beneficiarios residuales, de segunda y es lógico que quieran pasar a primera. Sus reivindicaciones pasan por tener carta de ciudadanía con voz y voto en ese negocio que parece haber llegado para quedarse por algún tiempo en el mercado mundial. Su militancia en las rutas es su carta de ingreso al comando de la política agropecuaria hasta ese momento manejada entre los grandes y el poder político. Por supuesto, no es para modificar el comando en un sentido progresivo sino para hacerlo más regresivo de manera tal que cumpla con sus expectativas sin colisionar con los grandes intereses ya instalados. Esta militancia agraria de «la gente como uno» ha contribuido a que el papel de los grandes intereses en juego quede semioculto: las acopiadoras/exportadoras/comercializadoras no practican la política pública lo que les permite jugar a varias bandas y sacar ventajas de todos. El hecho de que los pequeños y medianos rentistas agrarios hayan definido su interés por la lucha contra las retenciones y el Estado y no contra los abusos y maniobras de las grandes es lo que cimienta su unidad pero también la naturaleza de sus preferencias en materia de políticas agropecuarias y modelo de acumulación.

Y esta pugna por la plena ciudadanía económica en el club de los decisores del negocio sojero por parte de la clase media agroexportadora se formula muy claramente como a expensas del gobierno kirchnerista y su tímido patrón redistributivo. Es decir, el acceso de la clase media agraria al club de decisores sobre los agroexcedentes se hace a costa de involucrarlos en una cruzada contra el peso gubernamental en esas decisiones y contra las presiones redistributivas que emergen de parte del sistema político y las organizaciones populares.

Su alianza sólida con los grupos poderosos agropecuarios y su silencio acerca de los abusos de las cerealeras y los pooles⁸ se acompaña de la hipocresía sin límite de invocar a Evo Morales y a las luchas de las Ligas Agrarias, pero todo ello no quita en nada su componente regresivo⁹. Su lucha consiste en convalidar y legitimar que la renta originada en los precios internacionales y la devaluación no va a quedar sujeta a las condiciones de estabilidad monetaria y de precios del conjunto. El resto de los sectores deberán asumir a través de la inflación la convali-

dación de sus expectativas de apropiación de la renta extraordinaria.

El materialismo vulgar de creer que D'Angelis y Buzzi deberían estar de acuerdo con la distribución del ingreso por rentas extraordinarias de su sector no puede ser aceptado, salvo por una concesión al discurso «políticamente correcto» de establecer la ceguera acerca de la formación de intereses y para evitar la disonancia cognitiva que produce la imagen de un «noble gringo labrador» cortando rutas y abastecimientos para salvaguardar rentas extraordinarias.

En este momento, la FAA no defiende a los productores de pequeña propiedad, en las tierras marginales, sin capital ni maquinarias, que practican una agricultura de subsistencia o baja acumulación. Según denuncias del MOCASE y el MOCAFOR, la FAA operó activamente en Santiago del Estero y Formosa para extender la frontera sojera despojando de sus tierras a las comunidades campesinas indígenas incluso utilizando prácticas como el amedrentamiento armado, el envenenamiento de pozos, la destrucción de herramientas de labranza, la intimidación, la persecución policial, el incendio, arruinando los cultivos no sojeros con el glifosato, etc. sin que el gobierno tomara ninguna medida. Lejos están de defender a los campesinos pobres, ellos defienden una actividad de acumulación sobre la base de la plena apropiación de la renta de la tierra.

La poderosa fuerza de tracción de la expectativa de participar en este excedente gigantesco -si se prolonga en el tiempo el cambio de precios relativos en el mercado mundial- es lo que nuclea a los medianos y pequeños productores con los grandes. Y lo que motoriza el apoyo de otros sectores urbanos de clase media que aspiran a jugar un papel de servidores privilegiados de ese proceso de apropiación del excedente.

III- Las clases medias entre el discreto encanto de la soja y la «amenaza» del gobierno redistributivo

La gran pregunta de porqué ha pasado a la movilización opositora una parte importante de los sectores medios urbanos tiene muchas aristas. Por un lado, estos sectores han sido beneficiarios del crecimiento económico, han protagonizado un boom de consumo y aprovechado el mejoramiento de empleo e ingresos, se han favorecido de diversas políticas del gobierno como los subsidios al transporte, el combustible y la energía, y comulgan con las políticas de derechos humanos. No se trata entonces de explicar el cacerolazo de Barrio Norte hediondamente golpista y antipopular, sino el de Caballito que ya se anunciaba por el voto a Macri y a Carrió el año pasado.

Por otro lado, si tenemos en cuenta que la mayoría de los sectores urbanos descontentos y movilizados no participa de manera directa en la renta agraria e incluso que la política de retenciones móviles es claramente un instrumento de protección de los ingresos reales de la población y de la estabilidad de precios, queda la cuestión porqué pueden estos sectores «equivocarse» tanto y «escupir para arriba». Lejos de plantearnos un saber sobre sus «intereses objetivos» acá debemos visualizar el proceso de cálculo y formación de intereses desde el punto de vista histórico estructural y desde el punto de vista coyuntural.

Las hipótesis que se manejan en torno a esto pecan de generalidad. La tradicional caracterización jauretchiana de volubilidad y volatilidad de la «media clase» y su traumática

relación con el peronismo ha sido común en la historia del pensamiento social argentino (Altamirano, 1997) sin embargo la intensidad de la movilidad social que es persistente en la Argentina (Jorrot, 2000, 2005) muestra que las clases intermedias están sometidas a fuertes procesos de ascenso y descenso de forma tal que podría decirse que «nunca son las mismas». Mucho más si tenemos en cuenta las reformas estructurales acaecidas en los años '90.

La hipótesis «oficial» de manipulación mediática sobre sectores «influenciables» a través de la imagen puede tener algún viso de realidad en la medida en que está bien establecido que estos sectores son los que están más expuestos a los formadores de opinión pública. Los segmentos ABC 1 y 2 constituyen las teleaudiencias del periodismo político. Pero debemos aclarar que los ratings de estos programas son bajísimos. Los medios quizás sean más eficaces para generar «climas» difusos más que para asegurar o definir opiniones o preferencias ante esos climas. En general debe aceptarse la hipótesis que la eficacia de los medios aumenta en la medida en que potencia significaciones que ya circulan de manera extendida o cuando logra montarse sobre hechos conmocionantes. Es claro que los actores también producen hechos especulando con la repercusión en los medios y que sin el concurso de los mismos, su «carácter conmocionante» se perdería en gran medida, pero también es claro que los medios no pueden «crear» una realidad sino en el mejor de los casos sesgar o si se quiere distorsionar su lectura. La monotonía monopólica mediática hace que este trabajo de «recorte» sesgado facilite enormemente este proceso de creación de «climas difusos» y de circulación de claves de lectura.

Otra hipótesis más sociológica es la persistencia de demandas ético-políticas y de modos de acción colectiva generados con las crisis del 2001/2002. El cacerolazo y los cuestionamientos específicamente políticos contra el gobierno (estilos autoritarios, falta de apego a la ley, clientelismo, menoscabo al federalismo, etc.) muestran esta continuidad. Sin embargo, si en aquella coyuntura los cuestionamientos a la «clase política» excedían por completo a un gobierno, y tampoco se asociaban al apoyo a otros sectores o reconocían una conducción o liderazgos, ahora la movilización tiene un destinatario bien definido: la presidenta, y organizaciones y dirigentes reconocidos y aclamados: los ruralistas, D'Angelis, etc. que impulsan un reclamo típicamente económico-corporativo.

Así, conviene intentar examinar algunas hipótesis tentativas acerca del proceso de formación de intereses de los sectores pequeño burgueses en esta coyuntura.

Para las clases medias propietarias con módicas capacidades de ahorro o acumulación, la alternativa de asociarse a las promesas de un reingreso al primer mundo de la mano agroexportadora no es nueva y ni siquiera es una «falsa» percepción. De hecho para la sociología clásica y la historia académica argentina (Germani, 1950 y 1955, Graciarena, Sergio Bagú, 1950) las capas medias tienen su origen como auxiliares y beneficiarias secundarias del modelo agroexportador de fines del siglo pasado. Una de las características morfológicas de nuestras pequeñas burguesías es que tienen un alto componente comercial y de administración y servicios públicos y privados, y un bajo componente industrial y técnico comparada con las estructuras de clase de los capitalismo avanzados. Jorrot (2000) ha señalado estas diferencias —menor tamaño de la clase de servicios al sector privado y mayor tamaño de la pequeña burguesía comercial autónoma— con datos comparativos entre grandes centros urbanos de países europeos, y el

conglomerado urbano del GBA.

Nuestras clases medias están en buena medida al margen de los procesos de industrialización. El hecho de tener clases medias mayoritariamente localizadas en los sectores terciarios de la economía las hace indiferentes a los procesos de industrialización y desarrollo productivo. La formación y autopercepción de sus intereses se vincula más con la performance monetaria-cambiaría y en las posibilidades de participación en la circulación del excedente cuya fuente fundamental suele ser la renta proveniente del comercio exterior.

Hace muchos años R. Prebisch (1980), subrayó algo sobre los sectores medios que en su momento lamentablemente nadie o muy pocos prestaron atención: lejos de ver a las llamadas clases medias como el motor del desarrollo las veía como un obstáculo poco menos que insalvable. El consumo imitativo del «primer mundo» como factor de estímulo a la demanda llegaba pronto al cuello de botella en el que para financiarlo se necesitan bajas tasas de ahorro interno y alta dependencia del ahorro externo. El desarrollo inspirado en alcanzar el estándar de vida del primer mundo distorsiona los procesos productivos, impide la maduración tecnológica como fuente apropiada para aumentar la productividad, produce todo tipo de despilfarros y desahorros, y sobre todo fuerza un tipo de inversión productiva distorsiva en la medida en que condena al abaratamiento de la fuerza de trabajo y el desempleo a grandes mayorías por ende fuera del universo de consumo. Dentro del sainete de las últimas décadas esto se ve caricaturizado en la «plata dulce», el «deme 2» en Miami, el mercedes benz que no paga patente ni seguro, pero también en el consumo récord de celulares y de modelos de autos de alta gama y de construcción urbana de lujo, o de aparente lujo, en desmedro de modelos de automóviles populares, del mejoramiento del transporte público y de la vivienda popular. Las clases medias «consumistas» tienden a orientarse por el imaginario de ingresar solas al primer mundo bajo la coartada ideológica del «mérito» generalmente sustentado en el capital cultural y educativo y a veces en el origen étnico europeo inmigratorio.

La hegemonía ideológica del «modelo imitativo de desarrollo» tiene en las clases medias urbanas ansiosas por el ascenso social a sus apoyos más importantes a pesar de las penosas consecuencias de subalternizar la maduración e incluso restringir los desarrollos industriales productivos. Los obreros y trabajadores manuales construyen autos, autopistas y casas a los que jamás tendrán acceso y el sistema funciona de tal manera que no hay inversión ni interesados en producir en los que sí podrían tener acceso. El sistema funciona de tal forma que este patrón de consumo conveniente sobre todo para las empresas transnacionales subordina el patrón de acumulación y distribución: se produce y distribuye en función de este patrón de consumo que evoluciona según los ritmos del primer mundo y no sobre la base de una difusión virtuosa de los incrementos de productividad del sistema. La consecuencia no puede ser otra que la exclusión social. Además, señala Prebisch, el patrón de consumo imitativo de la clase media suele ser bendecido políticamente y termina contaminando fuertemente las expectativas de los sectores populares lo que es fuente de mayor conflictividad social y al mismo tiempo reproduce las mismas causas estructurales que los generan. En este esquema de formación de intereses «prosperidad» quiere decir expectativas de consumo imitativo aprovechando las «oportunidades» del mercado mundial. Los incrementos espontáneos de productividad no pueden ser fuente de

excedentes suficientes para alcanzar el consumo imitativo, mucho menos si quieren ser redistribuidos de manera equitativa. Así, tradicionalmente la inserción en el mercado mundial aparece como una condición necesaria para conservar este patrón. En este esquema la «prosperidad» nunca puede ser extendida a todos los sectores, dejando fuera de la «prosperidad» a las clases populares sin acceso a la renta agroexportadora.

En la actual coyuntura la «soja» es algo así como el salvoconducto para acceder a los recursos que requiere este patrón de consumo imitativo. En la coyuntura actual los sectores medios son estructuralmente predispuestos y permeables al atractivo canto de sirena agroexportador, convalidado por el ridículo discurso de la «oportunidad histórica» que es un lugar común de gobierno y campo. En este mismo punto es que el discurso de la distribución del ingreso y de aumento del empleo vía ahorro interno e inversión (o sea retenciones y menor consumo de las clases que acumulan), y de los salarios reales (o sea retenciones y subsidios para bajar precios de alimentos y combustibles) se convierte en una amenaza para este modelo.

Así, la «oportunidad histórica» es susceptible de lecturas «clasistas» y significados concretos diferentes.

Ya un viejo historiador Cortés Conde proponía modificar la dieta de las clases populares para que la demanda interna no compitiera con la externa y por tanto maximizar la acumulación para dedicarla a la modernización y acortar las distancias que nos separaban de los países avanzados. Faustino Fano ex presidente de la Sociedad Rural con un estilo más brutal dejaba de plantear el tema como una cuestión de «gastronomía» y lo convertía sádicamente en «demográfico»: abogaba por una argentina que no tuviese más de 14 millones de habitantes porque la proporción exacta de excedente que podía producir la plena explotación del potencial ganadero de nuestro país alcanzaba para darle solo a esa cantidad de gente un estándar de vida semejante al del primer mundo. La idea de que la preservación de un modo de vida es la base de la política económica es uno de los grandes éxitos hegemónicos que han tenido nuestras clases dominantes arrojando por resultado un consenso cultural típico de la clase media sobre la «modernización» y el «bienestar» del que ni el populismo más industrialista es ajeno.

En la coyuntura actual, el patrón de consumo imitativo generalmente como ha ocurrido en otras fases de nuestra historia fuerza soluciones de «atajos» cortoplacistas para los que la «soja» viene como anillo al dedo detrás de la idea de «la oportunidad histórica».

Para estos sectores medios, el tema de la redistribución, la exclusión y la pobreza quedan de lado al superarse las amenazas derivadas de la desintegración social, y ahora hay que retomar la agenda de los '90: gobernar para esas expectativas de bienestar emulado y para ese horizonte de vida de primer mundo. La redistribución aparece como un obstáculo para aprovechar esta «oportunidad».

Otra característica propia de la presente etapa política, es que desde el fracaso del gobierno aliancista y los procesos de extinción del radicalismo y la división de la derecha, los sectores medios quedan sin puntos de referencia políticos. En cierto sentido, sufren un proceso de descapitalización política: carecen de representación y patrocinio de sus intereses en la política gubernamental en particular y en el sistema político en general. Asimismo, las fracciones de la pequeño burguesía que se beneficiaron del auge económico como el pequeño y

mediano comerciante, los cuadros técnicos y administrativos de la gran empresa privada, varios segmentos de los asalariados de servicios, finanzas, comunicación y algunas otras ramas con altos niveles de actividad, atraviesan un periodo de bienestar económico con la consabida explosión de expectativas centradas en la propiedad inmueble, el turismo y el consumo de bienes durables de alta gama, al mismo tiempo que persiste su falta de capital político.

La combinación de «descapitalización política» –este gobierno no ofrece por estilo y aliados confianza política a estos sectores- con capitalización económica y explosión de expectativas, es una fuente de descontento que el conflicto con el campo contribuye a potenciar y canalizar. La demanda de un gobierno que gobierne para esas expectativas y la realidad de un gobierno que a duras penas puede con la inflación produce una gran frustración que la exacerbación del discurso redistributivo y la movilización en su apoyo de las clases populares tiende a agravar. La inflación de expectativas crecientes y la ilusión de un estándar de vida de primer mundo se da de patadas con los carteles de precios de la lechuga en la verdulería del súper y nos recuerda que deberemos redoblar nuestro esfuerzo para comprar la cartera que nos gusta, o no nos va a alcanzar para la cuota del auto, el plasma, el viaje, etc. Bourdieu (2001) ha mostrado esta existencia desgraciada de la pequeña burguesía siempre en tensa relación de esperanza y frustración en relación con las oportunidades que le ofrece el campo económico. Siempre con sueños de realización individual que exceden sus capacidades, con proyectos que no pueden sostenerse, viéndose a sí mismos como personajes centrales capaces de controlar su destino, participando de un sistema cultural de creación de necesidades y expectativas para la cual la insatisfacción permanente es una necesidad económica, una industria. Para ellos, la «redistribución» con su implícito componente de «limitación» de expectativas, renuncias, o posibles sacrificios a favor de «otros», puede convertirse en una mala palabra.

Por eso mismo había caído tan mal el discurso de Cristina¹⁰¹⁰ Sobresale el rechazo ofuscado y epidérmico de las mujeres de estos sectores de clase media por la figura de Cristina. Algunas encuestadoras de opinión pública (G. Romer) han medido un serio rechazo en estos sectores femeninos que podrían –por pertenencia de clase- identificarse con la figura y el estilo de Cristina. El rechazo surge porque no ven los estilos «de clase media» que ellas consideran «femeninos» empezando por «ser peronista», no recurrir a la «sensibilidad femenina», no apelar a «la seducción», ni a la «comprensión», etc. Así, la solvencia intelectual como recurso y el uso directo y enérgico de la autoridad hacen divisar en estos sectores la sombra de Eva Perón, por supuesto de nuevo subordinada a un hombre

(Néstor).

No se trataría estrictamente de «machismo» sino de un contenido clasista que se le da a la reivindicación de «lo femenino» y su referencia a «los piquetes de la abundancia» que desato el primer cacerolazo. Esta referencia equivalía a sancionar políticamente la prioridad de la redistribución y la equidad y deslegitimar las expectativas de prosperidad de estos sectores. «Qué tiene de malo tener 4X4 ... si quiere distribución que distribuya lo de ella» decía una adolescente cacerolera en Callao y Santa Fe.

Todo esto se puede sintetizar en un reclamo de un concurrente en el cacerolazo del 16/06 que luego fue citado por Néstor Kirchner en su conferencia de prensa: «¡Los blancos también somos argentinos Sra. De Kirchner!, ¡también tiene que gobernar para nosotros!». En consonancia con estos esquemas de percepción, todo el conflicto con el campo puede ser leído como una pugna para cambiar el sesgo de clase de la autoridad política y las orientaciones de las decisiones gubernamentales: «Queremos nuestra prosperidad» parecen decir estos sectores autoinvertidos de un papel central en el desarrollo modernizador del país (el papel de «clases laboriosas y progresistas» simbolizados en los «chacareros») que los envalentona para reclamar sus «derechos de propiedad» sobre los frutos de este desarrollo.

La percepción del «contenido» de clase del gobierno para estos sectores da lugar a una paradoja muy curiosa. Como puede verse en el siguiente cuadro con datos de una encuesta domiciliaria, se produce una inversión en la percepción de a qué clases o sectores benefició o perjudicó la acción del gobierno de Néstor Kirchner: las clases medias altas y altas ven a este gobierno como perjudicando menos y beneficiando más a las clases bajas que lo que lo ven las mismas clases populares y las clases medias. Las clases medias altas y altas lejanas al kirchnerismo perciben más ventajas y menos desventajas para las clases populares que las propias clases bajas más cercanas al gobierno. En menor medida lo mismo pasa en las clases medias bajas y en la pequeño burguesía: se ven menos niveles de perjuicio percibido a las clases populares que los que perciben las mismas clases populares. Simétricamente las clases populares ven que el gobierno beneficia mucho más y perjudica mucho menos a las clases altas que lo que las clases altas ven.

Mientras apenas un 10,7 % de los encuestados pertenecientes a clases populares ven beneficios del gobierno para estas clases, un 21,7% de las clases altas ven al gobierno beneficiando a las clases populares. Algo grosaramente podría decirse que el gobierno es más populista para las clases medias y altas que lo que es para las clases populares.

Percepción de sectores más beneficiados y más perjudicados por el gobierno según clase social (ocupacional)

Pregunta de respuestas múltiples (hasta 3 sectores beneficiados y 3 perjudicados)

Clase de Pertenencia Del Encuestado*	Sectores percibidos como beneficiados o perjudicados									
	Clases Altas		Pequeña Burguesía		Clase Media Baja		Clases Populares		Otros Sectores	
	Beneficiados	Perjudicados	Beneficiados	Perjudicados	Beneficiados	Perjudicados	Beneficiados	Perjudicados	Beneficiados	Perjudicados
Clases Populares	45,5	2,7	5,9	9,6	16,4	15,9	10,7	57,8	21,5	14,0
Clase Media Baja	29,4	2,5	7,5	21,3	20,6	17,6	10,2	42,6	32,3	16,0
Pequeño Burguesía	28,4	4,0	7,3	26,1	25,8	18,7	6,2	34,5	32,3	16,7
Clases Medias Altas y Alta	31,2	4,5	6,4	20,1	12,1	27,9	21,7	31,5	28,6	16,0
Total	33,2	3,0	7,0	19,5	20,1	18,3	10,3	43,4	29,4	15,8

Fuente: Encuesta de Predisposición al cambio social y la acción colectiva. Muestra aleatoria estratificada de 600 casos en Capital y Partidos del GBA- Noviembre/07. Error de estimación +- 4,5% Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada- UNTREF.

Nota: porcentajes sobre respuestas.

* **Clases Populares** incluye trabajadores manuales en relación de dependencia, operarios calificados o no calificados, servicio doméstico, peones, changarines, desocupados, vendedores ambulantes.

Clase Media Baja incluye trabajadores no manuales rutinarios en relación de dependencia, empleados administrativos, de ventas o servicios de calificación operativa o menor sin personal a cargo, cuentapropistas de oficios de servicios no profesionales o comerciantes sin personas a cargo.

Pequeño Burguesía: incluye empleados jerárquicos administrativos, comercio o servicios de calificación técnica (incluye docentes) en relación de dependencia con hasta 40 personas a cargo, profesionales universitarios independientes sin personas a cargo, y cuentapropistas del comercio o los servicios de oficios no profesionales con hasta 5 personas a cargo.

Clase Media Alta y Alta: incluye directivos, jerárquicos y gerentes o dueños, profesionales universitarios independientes con personal a cargo, comerciantes y cuentapropistas de oficios no profesionales con más de 5 personas a cargo, empleados jerárquicos no profesionales con más de 40 personas a cargo o profesionales con más de 5 personas a cargo.

Otros incluye grupos e instituciones como sindicatos, movimientos sociales, Iglesia, Jueces, periodistas, etc.

En este tipo de mediciones de opinión hay que descontar el efecto típico de miopía por el cual la propia clase de pertenencia siempre puede ser la más perjudicada y la menos beneficiada, por tanto siempre es más interesante ver la percepción que tienen de otros sectores respecto al gobierno más que de sí mismos.

Otro aspecto interesante es la nítida división que se da en la evaluación por parte de ambas fracciones de la clase media (baja y pequeña burguesía) según la cual la clase media baja es más beneficiada que perjudicada por el gobierno, mientras que ocurre exactamente lo contrario con la pequeña burguesía. La pequeña burguesía tiene niveles de perjuicio percibido por el conjunto de las capas medias mayores que los percibidos para la clase media baja. Lo mismo ocurre con los beneficios: las clases medias bajas se ven como mucho más favorecidas que la pequeña burguesía.

En el análisis desagregado de subgrupos populares y de los sectores medios (ya sin representatividad estadística) percibidos como beneficiados, se destacan primero los jubilados, luego los docentes, y más lejos los desocupados, y los pobres. Sobresale la absoluta ausencia de beneficiados a los empleados públicos y su confinamiento a la categoría de perjudicados. Es interesante que las clases medias y altas notaran entre los subgrupos de clases altas más perjudicados por el gobierno a los productores agropecuarios. Las empresas extranjeras aparecen con una notable presencia en las percepciones de todas las clases respecto al gobierno como mucho más beneficiadas que perjudicadas.

Veamos cómo puede plantearse la transposición política de este esquema de definición de intereses en términos de «nada de distribución, prosperidad para el que se la merece», y sus pretensiones de validez y generalización visibles en el discurso de los movilizados tras el campo y en el de sus dirigentes.

En principio hay un interesante intento de reapropiación de la categoría de «pueblo». La supuesta derecha ya no habla de «gente» o «ciudadanos» sino que inició una notable intencionalidad de reenmarcar la palabra fundante de todos los procesos de cambio de los últimos 70 años. Entre los cacerolesos las exhortaciones a que la presidenta abandone a «los D'Elías», a

que gobierne «para todos», y la diferenciación que hacían no solo los medios sino también los manifestantes entre «gente» autoconvocada y «micros» llevados por el gobierno tiene una larga historia en la argentina que Carrió se encargó de actualizar la noche del 30 de octubre pasado cuando después de reconocer la derrota electoral diferenció a los ciudadanos de la oposición que votan con conciencia y los pobres que tienen que votar al gobierno por un plan social o un bolsón de alimentos. Hasta le llegó a asignar a la civilidad «republicana» de clase media un papel pedagógico de cara al futuro: dar lecciones cívicas de ciudadanía y «enseñar a los pobres a votar». Así, la idea es que no hay que confrontar o reemplazar la noción de pueblo sino «republicanizarlo», depurándolo de las usurpaciones populistas-setentistas-clientelistas, e introducirle una jerarquía: la clase media es la rectora civil en torno a la cual deben aglutinarse los «pobres».

En el acto de Rosario del pasado 25/05 se dio también tanto entre los dirigentes como entre los concurrentes una insistente prédica acerca de que ellos son el verdadero «pueblo argentino». «¿Cómo va a ser pueblo D'Elía?» se preguntaba alguno. La ilusión que se convierte en imperativo de que el pueblo es el pueblo de clase media y que el pueblo de clase media aspira a progresar y convertirse en clase alta sin los vicios de la clase alta («sin olvidarse de los pobres»), y que únicamente un pueblo como este puede construir una argentina grande, son parte de este discurso que claramente reclama un gobierno que incluya las reivindicaciones y perspectivas de estas clases en sus políticas.

Frases como «nosotros también somos argentinos» se repitieron en las coberturas noticiosas sesgadas; «¡Nosotros somos los argentinos que valemos la pena Sra. Presidenta!» exclamaba una mujer. Otro inquiría «¿Qué es distribuir el ingreso?... sacarle a los que trabajan y quieren progresar para darle a unos vagos, a unos parásitos que viven del gobierno... ¿eso es?», y cosas por el estilo muestran esta faceta de percepción de los propios intereses que pone en contradicción la equidad social -vía redistribución a través de políticas estatales- y el desarrollo entendido como «prosperidad de los que se lo merecen».

IV- No solo nuevos actores y discursos sino nuevas estrategias

El capitalismo democrático cifra la política entre la necesidad de consenso y la necesidad de inversión: la huelga de inversores es una forma directa de forzar al poder político a través de la amenaza sobre las condiciones de base de la producción del consenso. El capitalismo agrario (sojofinanciero) argentino ha dado un paso más y pretende resquebrajar el consenso a través de una huelga patronal de suministro de alimentos. Los que controlan el estratégico excedente de divisas abandonan la cooperación y obediencia con la autoridad política y realizan una suerte de resistencia civil que impacta de manera inmediata sobre el orden público amenazando con una situación de ingobernabilidad. El nivel de antagonismo y desinstitucionalización del conflicto, las características de la luchas, la respuesta política estatal y las estrategias políticas y de opinión pública del bloque agropecuario merecen más que una reflexión porque incluyen elementos sumamente novedosos.

Polarización

El nivel de antagonismo y polarización puesto en juego, los discursos de satanización de las contrapartes y el nivel de pirotecnia y agresividad en la retórica hacía muchos años que

no se veían al punto de exhumar un lenguaje político de épocas que se creían superadas (gorila, oligarquía, montonerismo, etc.). Asimismo, las medidas de lucha a las que apela el bloque agropecuario: el corte de rutas internacionales, la generalización de piquetes espontáneos, es decir sin control, y posteriormente las medidas para generar desabastecimiento en grandes ciudades y algunas actividades económicas, colocaron no solo al conjunto del sistema político sino a toda la vida cotidiana de las ciudades dentro del conflicto. Aquí la apuesta a la polarización de facto que hicieron los ruralistas tuvo un gran resultado: obligó a grandes sectores de la población a sentirse afectada y tomar posición, además de dar un cauce a los descontentos con el gobierno por otros motivos. El binarismo del discurso irreductible y ofuscado de ambas partes redujo de entrada los espacios para apoyar las retenciones sin apoyar al gobierno o apoyar los planteos del «campo» sin apoyar la aberración de los cortes de ruta y el desabastecimiento premeditado. El binarismo puro y brutal se fue corporizando en los movimientos de los cuerpos en la calle a favor y en contra (la contramovilización de organizaciones sociales del FPV a la Plaza de Mayo; el contrapiquete de los camioneros en la ruta 14).

La «contra acción colectiva» protagonizada por los movimientos sociales de base popular aliados al gobierno —demostrando unos reflejos del que el mismo staff oficial de funcionarios parecía carecer— impidió que la ilusión de rechazo unánime al gobierno que transmitían las pantallas de TV generara una situación de mayor precariedad política. La espontaneidad inmanejable de las clases medias y altas descontentas con un discurso antigubernamental virulento contrastaba con la tibieza de estructuras partidarias, sindicales y aliados tradicionales. Solo los movimientos sociales populares parecían preparados para dar respuesta al desafío planteado desde las clases medias insurrectas.

La primera consecuencia de la polarización inicial es que el conflicto comenzó a exceder el reclamo específico y la defensa de una medida de gobierno y comenzó a estructurar intereses en torno al «modelo» de país, la política económica, los estilos políticos y hasta el funcionamiento de las instituciones. Los ruralistas, lejos de amilanarse orientaron resueltamente su estrategia en esa dirección: terminar haciendo del conflicto una suerte de plebiscito sobre la orientación general del gobierno, sobre la dirección del mismo tanto en materia económica como política, justamente porque la pretensión de validez de un reclamo sectorial tan limitado dificultaba «quedarse» en una demanda corporativa de difícil aceptación para otros sectores. Si se quería aspirar a luchar con posibilidades por esta reivindicación era necesario sustentar su pretensión de «generalización» en su articulación a otras demandas e impugnaciones al gobierno.

Detrás del reclamo por las retenciones se desata una lógica típica de la guerra según lo planteaba magníficamente Foucault (2000) o, si no se quiere usar un lenguaje tan categórico, del «combate abierto»: si la lucha comienza por el intento de imponer una verdad invocando la razón del «derecho» y la «justicia», en el transcurso de la guerra es la lucha misma la que se va convirtiendo en la fuente del derecho y la justicia: la voluntad de perseverar en la lucha, la persistencia, la masividad de los apoyos, las vacilaciones de los adversarios, sus divisiones, el coraje de las fuerzas propias y las miserias y genuflexiones de las del enemigo, etc. son la muestra de la «verdad», y se convierten en la fuente sustantiva de la legitimación.

Llegado a este punto fracasan todos los argumentos de los bienpensantes: no hay forma de justificar técnica y valorativamente de manera universal-racional ningún reclamo. La lógica de los argumentos y contraargumentos una vez desatada la lógica beligerante destruye muy rápidamente la apelación ético-discursiva para conquistar la voluntad, y en el plano de los debates todos y ninguno tienen razón. Solo los signos concretos del combate comienzan a convertirse en verdaderos argumentos que inciden sobre la voluntad. La pretensión de imponer por la lucha una verdad basada en una razón universal que debería ser aceptada, termina invirtiéndose: lo que funda la verdad de los guerreros es la pretensión de imposición y la capacidad de llevarla a cabo. La victoria de la verdad queda desnuda y la guerra la obliga a vestirse como la verdad de la victoria.

Este es exactamente el punto en el que las mediaciones institucionales no pueden actuar o se vuelven ineficientes para procesar y mediar intereses de manera «racional» y suelen quedar sujetas a una lógica de imposición, se convierten en meros momentos tácticos, subsumidos en el enfrentamiento. No hay una lucha por la legitimidad de cierto orden social, sino la legitimación que puede dar la lucha. No se trata habermasianamente de decidir colectivamente qué intereses son los más importantes o pueden fundar racionalmente sus «pretensiones de generalización» si los de los asalariados, la industria, los pobres y excluidos, los que menos tienen, o los que ostentan el derecho de propiedad asociado a la acumulación y el progreso económico. Una vez desatada la guerra se trata de qué y cómo la lucha misma impone la generalización de esos intereses, de cómo el resultado de la lucha fundamenta las pretensiones. Por tanto, el binarismo puro y brutal que como vimos en la realidad no existe —los intereses de los grupos concretos están mucho más mezclados—, es un requisito propio de la dinámica de la guerra. Incluso el tipo de reivindicaciones del bloque agropecuario (la renta retenida) encuentra múltiples dificultades a la hora de enmarcarla en registros discursivos disponibles que le den legitimidad. Solo la fingida imagen del «pobre sacrificado chacarero» y su peligro de extinción repetida hasta el hartazgo por los medios podía operar como legitimador de intereses. Así es que al «campo» rápidamente le convenía también la «lógica de la guerra» y no la de la negociación pacífica: una lógica totalizante en donde la demanda de rentabilidad pasara desapercibida subsumida en «los horrores autoritarios y soberbios del gobierno» que les permitiera conquistar más apoyos sociales.

La lógica equivalencial beligerante propuesta por el campo, a saber: el campo es el interés general del pueblo, la prosperidad, la república, el federalismo, etc. y el gobierno es el interés particular de la clase política parasitaria, «de Moyano y D'Elía», en realidad destruye la posibilidad de una universalidad que contenga la oposición, dejando a las partes en la necesidad de demostrar su universalidad en la lucha que dirime las razones. De alguna forma los movimientos sociales oficialistas, en cierta forma «vanguardias» de las clases populares organizadas territorialmente, son los primeros en entender la lógica del combate político que se desataba. D'Elía es el primero en ponerle palabras a la binarización beligerante que se plantea, metaforizándola en el color de la piel (los morochos vs. la señora de Barrio Norte) y en la disputa por la ocupación del lugar de enunciación política central de la argentina: la Plaza de Mayo.

Visto desde los movilizados, la binarización se reformulaba en continuidad con los universos discursivos de diciembre del

2001: la «gente» versus «los políticos» pero que ahora asume con «el campo» versus «los políticos K» un contenido y una fuerza económica —de la que carecía en el 2001— y un enemigo mucho más nítido: no es el que se vayan todos, sino el que se vaya Cristina y lo que representa (Néstor, D'Elía, Moyano, los Fernández, etc.). Por si fuera poco encuentra también un estilo: la fortaleza, determinación de los «chacareros humildes» versus la «soberbia autoritaria de los Kirchner».

La polarización tensa el marco maestro¹¹ de inteligibilidad política designado como «democracia» bajo el cual podrían procesarse y compatibilizarse los intereses de todos. Estos forzamientos de nuestra democracia hasta sus mismos bordes no son nuevos y las clases dominantes los han provocado en diversas coyunturas de nuestro país: el agiotismo, mercado negro y desabastecimiento en 1974/75 contra las políticas de salarios altos y control de precios, el golpe financiero del verano de 1989, y el golpe financiero de diciembre/2001 al que siguió un contragolpe de movilización popular a partir del 19/12/01. Lo novedoso reside en que estos «golpes» se escudaban en el anonimato «del mercado». Eran golpes desestabilizadores pero que carecían de «pretensiones públicas de legitimidad» como tal vez algunos golpes militares sí las habían tenido. Buscaban simplemente desgastar gobiernos sin costos de exposición y por tanto rehuían de la polarización y el «ascenso a los extremos». En el 2001 no se pudo evitar una reacción popular incluso liderada por las mismas clases medias. Pero en este caso el intento de «golpe de mercado» con el recurso al sabotaje de abastecimiento de alimentos se acompaña de un conato o amague de desobediencia civil y por tanto lo convierte en una suerte de «golpe cívico-económico». El ex presidente Kirchner erra en centrar la fuerza de la intentona en los medios masivos de comunicación (los caracterizó como «los fierros» del nuevo golpismo), en realidad la fuerza coercitiva es bien directa y nada simbólica: la inflación, el desabastecimiento, el caos económico. Y por si fuera poco hay que agregarle una fuerza política: suman gente a las expresiones de disconformidad. Los medios simplemente pueden participar en la lucha por darle un sentido determinado a las consecuencias del uso de esa fuerza económica y política pero no la pueden sustituir.

La politización de la economía, la conversión de los mercados en «armas», en recursos «extorsivos», utilizados en un combate político constituye la especificidad de la coyuntura. El gobierno no pudo encontrar al momento armas para contrarrestar este recurso: no puede reprimir, no puede controlar cantidades y precios en mercados, no puede presionar con medidas económicas de castigo, no puede influir en los mass media¹². Por tanto, la respuesta se ha limitado a una en el plano cívico político que si bien se puede calificar de exitosa no parece ser suficiente.

Estrategias

La estrategia del «campo» ha sido del manual de los movimientos sociales: la acción colectiva no institucionalizada y tomando repertorios de lucha con altos niveles de disrupción y desafío que históricamente habían sido legitimados por las clases populares y hasta el gobierno mismo: los cortes de ruta¹³. La amenaza directa a la paz social, la amenaza hobbesiana de la guerra generalizada entre iguales, la ingobernabilidad y la incertidumbre sobre el principio de autoridad y orden público, la desobediencia civil que amenaza generalizarse con bocinazos y cacerolazos, etc. constituyeron de entrada los recursos para jaquear la «impermeabilidad» política

de la que venía haciendo gala el gobierno desde hacía ya varios años.

El conflicto estalla en el preciso punto del cenit del armado político kirchnerista: acuerdo con Lavagna, con el sindicalismo, con los gobernadores, pleno control del aparato del PJ, sin oposición política sólida a la vista, etc. Confiado en sus fuerzas la iniciativa del gobierno se centró al principio en sostener su invulnerabilidad. El culto a la autonomía decisional y la negativa a contraer obligaciones públicas con sectores sociales se puso en juego inmediatamente. Sin embargo, este conflicto sirvió para poner en evidencia que un armado para monopolizar decisiones de gobierno y ganar elecciones es muy distinto a un armado para impulsar y defender un proyecto económico y social. Además en momentos que el kirchnerismo estaba a punto de formalizar la institucionalización definitiva de su marco maestro político a través del acuerdo del bicentenario, la concertación plural, etc., con un libreto ya remanido, el desafío del sector agropecuario muestra las limitaciones y, en cierta forma, la liviandad de la agenda kirchnerista presa de una inercialidad emanada de su propio éxito, de la pérdida de ambiciones transformadoras y de la escasez de ideas.

La binarización que planteaba inicialmente el gobierno seguramente daba por descontado un rápido desgaste de la protesta y un triunfo final claro en la mesa de negociaciones. Es decir apostó a que el bloque agropecuario no se iba a «bancar» el antagonismo. Pero el binarismo polarizador quedó convalidado sorpresivamente por el cacerolazo y la estrategia agresiva de desabastecimiento y amenaza de caos dejó al gobierno sin su receta conocida. No solo no se desgastaba sino que el antagonismo incrementaba los apoyos y la determinación de los sectores descontentos.

Ante la persistencia redoblada del desafío agro-cacerolero la estrategia del gobierno comienza a modificarse: lejos de apelar al decisionismo y la contrapresión retaliativa (persecución judicial, impositiva, administrativa, contrapiquetes, etc.) que muchos temían y algunos auspiciaban, optó por pedir tregua, ganar tiempo en una mesa de negociaciones, y como ingenuo «golpe de efecto» intentar «cerrar» la situación con una catarata absurda de concesiones¹⁴ unilaterales a los «pequeños y medianos» intentando deslegitimar las conducciones de las entidades con la secreta aspiración de que los pequeños y medianos favorecidos presionarían para desactivar la protesta. Por supuesto que en una situación normal la masiva devolución de retenciones según tamaño hubiese destrabado el conflicto y dividido al bloque ruralista, pero en una lógica de combate lo único que hizo fue revelar que el gobierno se debilitaba y no soportaba la presión.

El siguiente paso del gobierno fue dar la batalla en la opinión pública, intentar deslegitimar la protesta por los daños que causa, es decir, «la leche derramada», «la violencia y abusos en los cortes»¹⁵, e intentó escudarse detrás de la «sociedad»: intentó mimetizarse con doña Rosa que no encuentra harina en el super y la lechuga a 10\$, apostando ya no al desgaste de los ruralistas sino al desgaste de la opinión pública. Esperando que la reducción del consenso por la multiplicación de costos sociales de la medida ahogara la vitalidad de los descontentos. Esperar capitalizar a favor los costos colectivos que generan los contendientes es un grosero error que en su momento intentó hacer el gobierno de la alianza con los primeros cortes de ruta que sufrió. El gobierno está justamente para impedir esos costos, no es una parte más de la sociedad. La pasividad y esperar el error no pueden ser

estrategias aptas para un gobierno. Una estrategia discursiva que tiende a aceptar la propia victimización del gobierno para «aparecer» mimetizado con la sociedad agredida es un recurso algo infantil que tiene el oneroso costo de transferir el total de los costos de la confrontación a las clases populares. La autovictimización poniéndose detrás y no delante de la «sociedad» buscando un dictamen de la «opinión pública» en una concepción dramaturgica de la política, simplifica ingenuamente las relaciones de fuerzas. Solo los movimientos sociales populares tuvieron reflejos y «actitud» para enfrentar la situación sobre la base de la acción antagónica pero por supuesto deben sufrir la satanización y el aislamiento, cuando son la única fuerza real capaz de generar resistencia efectiva a los avances rento-golpistas. Además el mismo planteo inicial polarizador agresivo del gobierno había restado espacio para que surja una «sociedad civil» inocente víctima entre dos abusadores. La lógica de la guerra impidió que esto se produjese y obligó a un enrolamiento forzoso.

Los ruralistas fueron extremadamente hábiles y temerosos de que la estrategia gubernamental fuera exitosa, alivianaron las medidas de lucha utilizando criterios selectivos de bloqueo de ruta para permitir el flujo de mercaderías. Se cuidaron de aparecer como «desabastecedores» y apostaron a mostrar su «legitimidad» y «patriótica inocencia» en el acto en Rosario en el día de la Patria.

El registro de la mayoría de los discursos fue claramente beligerante prosiguiendo el proceso de deslegitimación sustantiva del gobierno: «Los K son obstáculos para el desarrollo» «Formas autoritarias, inconstitucionales, antidemocráticas», «soberbia», «personalismos», «incompetencia técnica», etc. recorrieron las argumentaciones retóricas y declaraciones posteriores. El gobierno nuevamente calcula que el acto fue el pico de la movilización a la que sigue una fase descendente e intenta volver a la polarización politizando el conflicto ante la opinión pública, declarando el acto de Rosario como de oposición política, negándoles la instancia de negociación sectorial que había prometido.

La respuesta a la «guerra de nervios» que proponía el gobierno no se hizo esperar demasiado impulsada ya no tanto por las dirigencias sino por los productores en las rutas. El paro agropecuario volvió a generar desabastecimiento ahora con el concurso de empresarios y dueños de camiones y autoconvocados de toda especie. El espesamiento de la situación y el riesgo de generalización del descontento, desgajamiento de apoyos políticos y sindicales, obligó a un nuevo cambio de táctica saliendo de la pasividad y entrando en un frenético activismo de presiones y señales para ablandar a las cuatro entidades con la promesa de diálogos, también logró desactivar a las organizaciones de transportistas y hacer anuncios de liberación de rutas y de preparación de la penalización judicial del corte de ruta que fue brillantemente aprovechada por D'Angelis y los monopolios de la comunicación como detonante de un nuevo cacerolazo de escala nacional. Es evidente que todos los trucos de tahúres de los Fernández pueden ser efectivos para un conflicto convencional que corre por los carriles del «juego de poder» entre política, corporaciones, estado¹⁶, etc. pero torpe y absurdo en una situación de conflicto no convencional donde para colmo el mismo discurso de los derechos humanos les ata las manos y hasta es resignificado cínicamente por los «golpistas» con un discurso «contra la represión». De nuevo fueron los movimientos sociales populares reclamándole al gobierno espacios de acción para garantizar abastecimientos, controlar precios, y denunciar

un golpe derechista antipopular de nuevo tipo, los que parecían hacerse cargo de la lógica beligerante que requiere la situación.

Cacerolazos

El claro y contundente discurso de Cristina del 24 de marzo deslegitimaba con una argumentación impecable y clara («dos piquetes de la abundancia») la demanda de los ruralistas desde los marcos maestros de legitimación socialmente instalados desde el 2001: inclusión social, equidad, integración, distribución del ingreso, etc. Pero la salida al cacerolazo de esa misma noche mostraba que para muchos sectores no se trata de un problema de legitimación de demandas sino de ilegitimidad de ese marco maestro y de la posición «popular» de enunciación política. La agudización del conflicto con el apoyo de sectores medios y altos urbanos puso a las claras que no se trata de validar pretensiones de legitimidad de demandas sectoriales sino de modificar los criterios vigentes de validación y esto siempre es una situación de «guerra»: no existe más allá del enfrentamiento mismo ningún tribunal reconocido por ambas partes en donde validar las pretensiones propias. No se reconoce una racionalidad, no se concede la universalidad al marco maestro de validación de discursos políticos y por tanto el problema de la legitimidad queda abierto y sujeto a la lucha. La imposición será el fundamento del nuevo marco maestro de validaciones políticas.

El gobierno ha interpretado esto como «golpe» y es efectivamente así: los lugares de validación y enunciación política del kirchnerismo forjados desde el 2001 son desestabilizados y la legitimidad que se le reconoce es solamente formal: «ganó las elecciones hace 6 meses», pero no sustantiva: «el pueblo somos nosotros y estamos hartos, queremos otra cosa» que se puede describir como «clima destituyente». Pero lo que se pretende destituir no es tanto un gobierno sino algo más profundo: un código de validación de pretensiones políticas. La delegación del tema al Congreso está reconociendo por primera vez una relativización institucional de la validez del marco maestro vigente hasta ahora. El debate en el Congreso deberá poner en discusión más abierta o encubiertamente este marco. La agenda y los modelos de legitimación discursivas pueden cambiar a partir del lunes 23 de junio cuando el sistema político conjunto trate las retenciones. Ya anda el ex kirchnerista F. Solá hablando de una tarjeta de «garantía alimentaria» para comprar 40 productos subsidiados por el Estado y poder liberar así la acumulación de los agroexportadores: nadie puede haber expresado más claro lo que se pretende ¡Adios a la equidad como bandera política!. Solá llega a declarar en un programa periodístico que «el gobierno perdió el debate cultural sobre la distribución del ingreso».

La mención de los Kirchner como obstáculo al desarrollo es exactamente la perifrasis de que la distribución es un obstáculo al desarrollo. La impugnación del marco maestro del pos2001 por el momento solo puede llevarse a cabo por medio de circunloquios. La «puesta a prueba» del armado kirchnerista es al mismo tiempo un intento de soliviantar el pilar discursivo de la distribución y la integración social.

Pero ojo: no se trata tanto de una reaparición del discurso neoliberal. El mercado o la propiedad privada han estado ajenos a las justificaciones explícitas de las movilizaciones y protestas. Se trata claramente de justificar la primacía de los intereses de un sector como «motor de prosperidad» que obliga a replantear el tipo de desarrollo y el papel de las clases

en la distribución. La clase media comienza a consolidar un discurso en el que afirma sentirse amenazada no por un desarrollo basado en la centralidad de la renta agropecuaria privada que con la inflación convalida en los precios internos la ganancia extraordinaria de los productores exportadores sino por un gobierno que «expropia» a los que trabajan y producen para distribuir entre las clases parasitarias que lo votan. Existe una idea de desarrollo para los sectores medios que colisiona con el código político asumido y votado desde el 2003: ahora hay que privilegiar la prosperidad más que la equidad. Hay que privilegiar a las fuerzas sociales dinámicas que acceden al mercado mundial, para alcanzar la prosperidad de «quienes la merecen». Esta es su lectura políticamente imperativa de la «oportunidad histórica» de los precios internacionales de materias primas.

v- Perspectivas

La intervención del Congreso –que ya había tratado el mismo tema en marzo– significa que la pelea política por el consenso de la sociedad civil, es ahora internalizada por las instituciones políticas. La ambición republicana de sacarlo del escenario de las calles y llevarlo a la sociedad política, tuvo un primer efecto de «meter la calle» en la política institucional: la proliferación de carpas y las accidentadas audiencias de las comisiones lo muestran.

Los desgajamientos y la erosión que soporta el heterogéneo conglomerado oficialista sin ninguna duda van a ser aprovechados al máximo por el «golpe» y no podría extrañar que pronto empiece a tener aliados muy próximos al kirchnerismo con su previsible secuela de acusaciones de «traición».

La internalización del conflicto al institucionalizarlo en el poder legislativo legitima dentro del mismo oficialismo el debate sobre el modelo, abriendo el cauce para una incursión de la coalición agroexportadora dentro del mismo esquema K. Por supuesto, el pragmatismo que siempre han tenido las clases dominantes y su vocación por la impunidad que da una política vicaria y desde las sombras –cosa que siempre ha conspirado para la formación de una derecha democrática– los llevará seguramente a buscar en las pujas internas del peronismo una estrategia de poder. En este punto no puede pasar desapercibida la reunión de Duhalde con las dirigencias agropecuarias en marzo.

Hay quienes afirman que en las mismas zonas agropecuarias o en las ciudades del interior rural tampoco son unánimes las

posiciones de los productores y la ciudadanía. Sin embargo, el gobierno no ha podido generar «contramovilización» significativa fuera de la zona metropolitana. La no concurrencia de Cristina al acto del Día de la Bandera a Rosario puede ser una señal de imposibilidad de garantizar un mínimo nivel de convocatoria a su favor.

De por sí la ofensiva agrorentista ha bloqueado por largo tiempo la política estatal en materia agropecuaria. Es probable que la soja ya no ponga los recursos para la desojización en la forma de subsidios a otras producciones. La agenda de la «confiscación» se ha impuesto por el momento a la de la «soberanía alimentaria». Sin embargo, es un tema importantísimo que la cuestión de la soja y sus excedentes, y la redistribución del ingreso se hayan abierto al debate público. Este sí puede calificarse como un logro importante cuyas consecuencias exceden el corto plazo. El conflicto en este punto produce una suerte de efecto cognitivo de «transparentamiento» de la estructura social para todos los actores y es sobre este transparentamiento que se monta el debate y los proyectos políticos.

El discurso de Cristina y el gobierno invocando la democracia, la voluntad popular, el «interés general», y ya más lacrimógenamente la pobreza y «los que más necesitan» reafirma la base popular de su proyecto pero al costo de realzar la ausencia de respuesta y de capacidad de interpelación de los sectores medios. Al excluir discursivamente de la redistribución de la renta extraordinaria a los sectores medios –cuando en la realidad este gobierno ha hecho esfuerzos fiscales notables subsidiando consumos de estas clases– se deja el espacio para convalidar las presunciones de que las clases medias no tienen nada que ganar con la mentada redistribución, e incluso que lo que se va a redistribuir es lo de ellas y que el gobierno arregla con los grandes y le pasa todo el fardo a los que «se rompen el lomo laburando y logran juntar algo». En este sentido, el discurso de Cristina que puede interpelar a los sectores medios desde lo cultural, los derechos humanos, y la democracia, parece quedar inhibido a la hora de la promesa de beneficios más tangibles. En este sentido, si para las clases populares se profesa una intervención estatal redistributiva, para las clases medias no aparece más que una vuelta vulgar a la idea del «derrame» espontáneo del crecimiento. Quizás el gobierno intente detener la pérdida de espacio simbólico y de adhesión entre estos sectores con iniciativas adicionales en el plano distributivo.

Notas

* Centro de Estudios e Investigaciones Universidad Nacional de Quilmes y Facultad de Ciencias Sociales UBA.

¹ En este sentido, una derivación del conflicto ha sido el contrapunto entre los monopolios comunicativos y la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en torno a las coberturas noticiosas de las movilizaciones populares. Los aparatos mediáticos y los intelectuales (continuado con la interesante iniciativa llamada Carta Abierta) comenzaron una disputa por la producción de sentido en torno a la «realidad de nuestro país».

² Según estudios de Nicolás Arceo, Javier Rodríguez y J. Iñigo Carrera del CENDA (Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino) las magnitudes de estas transferencias del pasado han sido mayores que las que significan las retenciones con tipo de cambio alto del presente. Esto evidencia que la resistencia empresarial a las retenciones no es a la transferencia de ingresos o a la presión impositiva por sí misma. Lo que se cuestiona es quién y cómo van a ser manejados esos excedentes. Ceder excedente para alimentar otros circuitos de acumulación donde también tienen participación las clases dominantes no parece ser problema. El problema parece ser que el actual gobierno no les garantiza esta participación.

³ La industria manufacturera en su conjunto ha tenido en 2007 casi 7000 millones de U\$\$ de déficit en su balance de divisas. Pero si excluimos las ubramas alimentarias que tienen fuertes superávits, el déficit pasa a ser de casi 15 mil millones de U\$\$ (FIDE, 2007, según datos del INDEC).

⁴ Es por ello que este excedente debería convertirse en un bien público y no en un bien privado. Existen fundamentos semejantes para nacionalizarlo a los que invocaron Chávez y Evo por el petróleo y el gas.

⁵ Ya ha sido señalado por muchos que el costo oculto de la combinación desarrollo tecnológico y rentabilidad extraordinaria es la «descapitalización» de la tierra por pérdida de minerales y extenuación de la fertilidad.

⁶ La inflación y el escándalo del INDEC previos al estallido del conflicto reduce la credibilidad de los argumentos gubernamentales: hay inflación sin retenciones móviles y el gobierno intenta tomar por idiota a la opinión pública manipulando las cifras. En este punto no parece haber diferencias de metodología desinformativa entre el gobierno y los monopolios comunicacionales salvo porque la torpeza de uno es aprovechada para fundamentar la propia torpeza del otro.

⁷ El 70% de las explotaciones de menos de 100 ha se dedican a la soja. Los pequeños son los más sojizados y en donde el alquiler de la tierra está más extendido.

⁸ Es gráfico el hecho de que no son los dirigentes o sus entidades sino políticos de centro izquierda o intelectuales (Lozano, Mario Cafiero y Llorens, etc.) los que sacan a relucir los fraudes y abusos de los grandes, que nunca son contra los chicos sino básicamente contra el erario público.

⁹ Las contradicciones entre el discurso de la dirigencia agropecuaria de origen izquierdista y los intereses que representa son palmarias: en una asamblea Buzzi era ovacionado cuando reivindicaba a los compañeros presos y desaparecidos de las luchas de las ligas agrarias y los cronistas recogían opiniones de los asambleístas que acusaban a Cristina de «setentista y revanchista». En una requisitoria periodística mientras Buzzi se esforzaba de encuadrar su conflicto desde la defensa de Evo Morales, un productor asambleísta instaba entusiasmado a «hacer como en Bolivia... los Santacruceños»!!!.

¹¹ Utilizamos este concepto clásico de «framing» (Goffman, 1974) luego adaptado para utilizarlo en la teoría de los movimientos sociales (Rivas, 1999; Mac Adam, Mac Carthy y Zald, 1999; Snow, 1992).

¹² En este sentido es francamente desalentador que el Canal 7 bajo control del gobierno no haya tenido ni siquiera una línea editorial -más allá de sus columnistas- para cubrir las protestas. En vez de una cobertura con criterio propio de los cacerolazos, el canal decidió pasar documentales de dinosaurios y torneos de voley.

¹³ El uso de repertorios de acción colectiva tan agresivos y la alta legitimidad alcanzada para los mismos puede ser retomado en un futuro no tan lejano por las clases populares: qué pasaría si aparecieran de nuevo situaciones de insuficiencia aguda de ingresos o lisa y llanamente desabastecimiento por insuficiencia de oferta o carestías de alimentos que tradicionalmente han generado revueltas en A. Latina.

¹⁴ Además está decir que las famosas y jugosas «compensaciones» a pequeños y medianos se contradicen completamente con la aspiración de detener el proceso de sojización.

¹⁵ En este punto el gobierno fue completamente distraído. El fallecimiento de un infartado en una ambulancia demorada en un piquete y el episodio dramático de agresiones a una pareja con la mujer parturienta insólitamente no fue aprovechado «mediáticamente» por el gobierno, enviando a un ministro al velatorio del muerto, identificando individualmente y promoviendo causas penales contra los agresores y responsables, etc. A nivel de los medios no hubo una política beligerante. La cobertura del mismo canal 7 optó increíblemente por la estrategia de la «atenuación» y no por una estrategia mediática de confrontación de imágenes y temas noticiosos.

¹⁶ La incapacidad de reprimir (es clara la desconfianza en las fuerzas represivas que tiene el propio gobierno) y también los fraudes en los puertos privados, en las aduanas y el ennegrecimiento escandaloso de los mercados de cereales y carnes muestra la completa inutilidad de los aparatos y burocracias estatales. La lucha por «el control de los procesos concretos» como acertadamente señalan los situacionistas, parece sustraerse a las capacidades del estado y las instituciones. Las fuerzas que se juegan en torno al poder sobre los procesos concretos tienen un origen y una naturaleza muy diferente a las formalidades institucionales y los elencos estatales: son los poderes de las clases sobre la política más que los poderes de la política sobre las clases.

Bibliografía

- Altamirano, C. (1997): «La pequeña burguesía, una clase en el purgatorio», en *Prismas* Revista de Historia Intelectual, Buenos Aires, UNQ.
- Bagú, S. (1950): «La clase media en la Argentina», en Theo Crevenna (comp.) *La clase media en la Argentina y Uruguay*, Ed. Oficina de Ciencias Sociales, Unión Panamericana, Washington.
- Basualdo, Eduardo (2001): *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina*, UNQ-FLACSO, IDEP.
- Bourdieu, Pierre (2001): *Las estructuras sociales de la economía*, Manantial, Buenos Aires.
- Foucault, Michel (2000): *Defender la sociedad*, Buenos Aires, FCE.
- Germani, G. (1955): *Estructura Social de la Argentina*, Raigal, Buenos Aires.
- (1950): «La clase media en la Argentina con especial referencia a los sectores urbanos» en Theo Crevenna (comp.) *La clase media en la Argentina y Uruguay*, Ed. Oficina de Ciencias Sociales, Unión Panamericana, Washington.
- Giddens, A (1981): *La estructura de clases en las sociedades avanzadas*, Alianza, Madrid.
- Goffman, Erwin (1974): *Frame analysis: on essays on the organization of the experience*, N. York, Harper Colophon.
- Goldthorpe, J. (1995): «Sobre la clase de servicio. Su formación y su futuro» en Caravana y De Francisco, *Teorías Contemporáneas de las clases sociales*, Ed. Pablo Iglesias, Madrid.
- Gómez, M. (2000): *El mercado de trabajo para los egresados universitarios*, Ed. UNTREF, Buenos Aires.
- Gómez, M. (1997) «Los claroscuros del modelo neoliberal en la argentina. Explorando algunas tendencias novedosas del mercado laboral durante el Plan de Convertibilidad», *La Problemática del Empleo en la Argentina*- Informe de Coyuntura del Centro de Estudios Bonaerenses, N° 69/Septiembre/97, p.155 a 176.
- (2000): «La exclusión generosa. Ingresos y empleo en los estratos medios durante el Plan de Convertibilidad» en *Democracia, Estado y Desigualdad*, Claudio Lozano (comp.), Eudeba, 2000.
- Heyman, D. y Kosacoff, B. (2002): «La Argentina de los 90. Desempeño económico en un contexto de reformas», Buenos Aires, EUDEBA/CEPAL.
- Jorrot, Raúl (2000): *Estratificación social y movilidad. Un estudio del Area Metropolitana de Buenos Aires*, Ed. Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán.
- Jorrot, Raúl (2005): «Aspectos descriptivos de la movilidad intergeneracional de clase en argentina 2003-2004» en Laboratorio-Revista de Estudios sobre Cambio Social N°18, Buenos Aires, Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
- Kessler, G. y Espinoza, (2003): «Movilidad social y trayectorias ocupacionales en Argentina: rupturas y algunas paradojas del caso Buenos Aires» en Serie *Políticas Sociales* N° 66, Ed. CEPAL/ECLAC, Santiago de Chile.
- McAdam, D., McCarthy, D. y Zald, M. (eds) (1999): *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*, ISTMO, Madrid.
- Murmis, M. y Feldman, S. (1992): «Posibilidades y fracasos de las clases medias según Germani», en *Después de Germani. Exploraciones sobre la estructura social de la Argentina*, Paidós, Buenos Aires.
- Peralta Ramos, Mónica (2006): *La política económica argentina: poderes y clases sociales 1930-2006*, Ed. FCE, Buenos Aires.
- Lee, D. y Turner, B. (comp.) (1996): *Conflicts about Class*, Longman, New York.
- Lipset, M. Et al. (1996): «Are social class dying?» en Lee y Turner, op. cit.
- Poulantzas, N. (1985): *Poder político y clases sociales en el estado capitalista*, Siglo XXI, México.
- Poulantzas, N (1987): *Las clases sociales en el capitalismo contemporáneo*, Siglo XXI, México.
- Prebisch, Raúl (1981): *Capitalismo periférico, crisis y transformación*, FCE, México.
- Portes, A. y Hoffman, K. (2003): «La estructura de clases en A. Latina: composición y cambios durante la era neoliberal» en *Rev. Desarrollo Económico*, vol. 43, N°171.
- Przeworski, Adam (1988): «El proceso de formación de clase» en *Capitalismo y Socialdemocracia*, Ed. Alianza Universidad, Madrid.
- Savage y ot. (1995): *Property, Bureaucracy and Culture. Middle class formation in contemporary Britain*, Ed. Routledge, London and New York.
- Svampa, M. (2001): *Los que ganaron*, Ed. Biblos, Buenos Aires.
- (2005): *La sociedad excluyente*, Ed. Tecnos, Buenos Aires.
- Svampa, M. y Gonzalez Bombal, I. (2000): *Movilidad social ascendente y descendente en las clases medias argentinas: un estudio comparativo*, Instituto de Ciencias, UNGS.
- Tarrow, Sydney (1997): *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Alianza, Madrid.
- Torrado, S. (1992): *Estructura Social Argentina*, Ed. De la Flor, Buenos Aires.
- (2007): «Estrategias de desarrollo, estructura social y movilidad» en S. Torrado (comp.), *Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo centenario. Una historia social del Siglo XX*, T.1, Ed. EDEHASA, Buenos Aires.
- Wright, Eric (1995): «Reflexionando una vez más sobre el concepto de estructura de clases» en Julio Caravaña y Andrés de Francisco (comp.): *Teorías contemporáneas de las clases sociales*, Ed. Pablo Iglesias, Madrid

Movimiento campesino y coyuntura agraria regional Promediando el 2008

Pablo Díaz

Introducción

En el marco de estudios de caso referidos a «conflictividad agraria»,¹ este artículo tiene por objetivo destacar ciertos emergentes de la coyuntura en algunos países de la región a mediados del '08, para señalar como operan las relaciones de fuerzas sociales y políticas en torno a la disputa por la tierra donde intervienen los movimientos campesinos. Entendiendo por movimiento campesino a la sucesión de acciones colectivas no-institucionales llevadas adelante por diferentes organizaciones de pequeños productores y trabajadores rurales independientes, que levantan como demanda tradicional el acceso y la permanencia en la tierra.

Las recientes elecciones paraguayas, el persistente conflicto del agro argentino y las presiones gremiales en el campo uruguayo caracterizan el escenario de esta hora.

Acontecimientos.

En **Paraguay** la Organización Campesina de Misiones, el 19 de mayo ocupa por tercera vez un campo ganadero de 350 há de propiedad privada extranjera, pidiendo su incorporación al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). El mismo día en Itapúa campesinos del «Asentamiento 30 de julio» ocupan 1.500 há de un excedente fiscal ya denunciando al INDERT, mientras que en Edelira 70 miembros del «Asentamiento Rigoberto Algarín» amenazan con «ocupar las 100 há mecanizadas que la Fuerza Aérea Paraguaya le alquila a un ciudadano brasileño». En la misma fecha pero en San Pedro, 200 campesinos de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) ocupan una reserva forestal de la colonia Ara Pyahu a los efectos de frenar un desmonte ilegal.

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) expresa «su más firme condena a la invasión de propiedades y a todo acto de violencia o violación de las leyes nacionales» y reivindica «la protección de la inversión privada como herramienta insustituible del desarrollo rural. Mientras que Tokojojá (del eslabón débil de la Alianza Patriótica para el cambio) señala que las ocupaciones surgen por la corrupción del Estado, la necesidad y el «desgobierno de hace 60 años».

En **Argentina**, entre abril y mayo el Movimiento Nacional Campesino e Indígena y el recientemente creado Frente Nacional Campesino toman posición respecto al *lockout* patronal agrario: se denuncia al gobierno nacional por promover el agronegocio y se condena al empresariado sojero concentrador. El segundo gobierno kirchnerista busca un aliado en el campesinado dividido en estas dos corrientes que tienen su epicentro en Santiago del Estero, el mayor resguardo campesino de lucha por la tierra en la Argentina, donde existe un enfrentamiento intestino por los programas sociales de desarrollo rural. La Federación Agraria Argentina (FAA; responsable del *lockout*) desconoce al Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), aunque uno de sus sectores mantenga su afiliación formal hasta el presente.

En **Uruguay** el 12 de mayo se produce la tercer ocupación de «tierra para trabajar» de la historia nacional, esta vez lejos del territorio cañero, en el sur del país, a 60 kilómetros de la capital. Allí el Movimientos de Aspirantes a Colonos de San José (de pequeños productores y asalariados rurales) toma 120 há que permanecían ociosas y que estaban a su vez bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas. La ley de castigo penal a las ocupaciones de tierra (sancionada en abril de 2007) no se aplica, en el entendido de que los activistas se convierten inmediatamente en «custodios» del bien, en una disputa con los empresarios linderos. El 14 de junio el «Movimiento 10 de septiembre de 1815» ocupa 120 há en el Departamento de Tacuarembó (Colonia Los Charrúas), denunciando la lentitud del Estado para remover antiguas situaciones de irregularidad en tierras públicas. Mientras tanto la Federación Rural del Uruguay denuncia a fines de mayo la «sistemática y constante amenaza al derecho de propiedad» y «la extranjerización de la tierra», entre otros temas vinculados a la rentabilidad del sector.

Correlación de fuerzas

En el escenario post-electoral del Paraguay las fuerzas sociales aliadas a Lugo presionan por los cambios, la pata conservadora demuestra una tenaz resistencia de los intereses privados por encima de la función social de la tierra. La «invasión» de tierras es la manifestación de una iniciativa social para marcar el terreno del nuevo gobierno, pese a la debilidad de la representación política parlamentaria que tendrá el campesinado. La búsqueda de gobernabilidad de Cristina Fernández es la tónica del momento actual de la Argentina: allí los campesinos encuentran una coyuntura altamente favorable para fortalecer sus organizaciones de resistencia en la tierra, que les permita dar un salto pro-activo, más allá de los matices internos; mientras que la FAA pierde en el campesinado un aliado estratégico, siendo que los pequeños productores (campesinos o no) podrían ser ahora base de un apoyo a medidas efectivamente redistributivas del gobierno nacional (si las tomara), en la búsqueda del necesario apoyo social post-electoral del segundo kirchnerismo.

El incipiente accionar colectivo no-institucional de los trabajadores rurales uruguayos cuestiona nuevamente el derecho de propiedad, aprovechando las fisuras en la clase dirigente y el primer año pre-electoral para remover la tímida y burocrática política de tierras. Mientras que la burguesía agraria nacional disputa el espacio político ante la extranjerización de la tierra con el gobierno frenteamplista. Gobierno que se balancea entre promesas de proyectos productivos con inversión pública y la no intervención en el mercado, los monocultivos y el modelo agro-exportador.

Conclusiones y escenarios posibles.

El dinamismo del mercado de tierras, la suba de precios de los productos agrícolas exportables y el crecimiento económico de la región, generan tensiones estructurales, ante las cuales los

actores sociales y políticos reaccionan. El escenario del conflicto por la tierra actualmente es el campo; allí la resistencia campesina y la ocupación de tierras es utilizada como medida de expresión del movimiento popular ante los vaivenes electorales, los partidos progresistas y su arribo al gobierno. Toma de tierras y acciones de resistencia en la misma aparecen como medidas del actor más débil políticamente en la disputa, que mediante su accionar no institucional logra cuestionar el eje del modelo de acumulación: la distribución primaria del ingreso y de los factores económicos para su generación en la región. Una vez normalizados los tiempos políticos (pre y postelectorales, y conquistada la gobernabilidad) la lucha por la

tierra cambiará de escenario: la institucionalización del reclamo (mediante leyes, creación de instituciones de desarrollo rural, asignaciones formales de tierras, etc.) dará lugar a negociaciones entre los movimientos y los gobiernos, en una correlación de fuerzas favorable a quien detenta el poder del Estado. Dependerá del aprovechamiento de la coyuntura actual el avance del accionar colectivo y del tejido de sus alianzas estratégicas (trascendiendo tensiones internas), la posibilidad de que los trabajadores rurales lleguen a tales escenarios con mayor peso a la hora del diálogo y la negociación por la redistribución de la tierra.

Notas:

¹ En el marco de la tesis doctoral en Ciencia Política: «La conflictividad agraria en el nuevo escenario político. Estado, y movimientos sociales rurales en los conflictos por la tierra en Argentina y Uruguay (2005-2008): estudio de los casos del MOCASE en el Departamento de Figueroa (Provincia de Santiago del Estero, Argentina) y de los trabajadores rurales organizados del Departamento de Artigas (Uruguay)», Escuela de Política y Gobierno, Universidad Nacional de San Martín, Bs.As., Argentina.

Bibliografía

De Souza, Hebert José; Pereira, Marcelo; Rubio, Enrique, 1985, «Coyuntura: respuesta y desafío», Centro Uruguay Independiente, Montevideo.

Diario «ABC.Color», Martes 20 de mayo de 2008, Año 41, N° 13.000, Asunción, Paraguay:

Artículos sin Firma:

Portada, p.1 -»Protección de la inversión privada. PLRA condena invasión de propiedades rurales», p.11

«Un establecimiento ubicado en San Ignacio, Misiones. Por tercera vez invaden tierra de Vargas», p.13

«Tekojoja culpa al gobierno de hace 61 años. Afirman que ocupaciones vienen por la corrupción», p.13

«Desinterés de MCNOC y FNC en mesa de diálogo para tratar crisis campesina», p.17

Artículos firmados:

Tomás Romero Pereira: «En el sur, 'Sin Tierras' aseguran que resistirán desalojo. Campesinos ocupan inmueble que serían de una agroganadera», p.14

Sergio Escobar Robert: «Obligan a operador a parar apertura de camino. Ingresan a una reserva y toman de rehén a brasileño», p.15

Entrevistas a integrantes: del Frente Nacional Campesino, MOCASE, MOCASE Vía Campesina (Santiago del Estero, Argentina), Mesa de Aspirantes a Colonos de San José y Movimiento Nacional de Aspirantes a Colonos (Uruguay).

Federación Rural del Uruguay, 31 de mayo de 2008, «Declaración Final. 91 Congreso», Depto. de Rivera, Uruguay.

La cuestión de la conflictividad en los espacios rurales:

La propuesta de este trabajo es dar cuenta de la conflictividad que gira en torno de la tierra, del espacio de vida más básico. La tierra, la distribución equitativa de la tierra, el acceso y su utilización, ha sido y es aun, uno de los principales problemas del continente Latinoamericano. Estamos frente a una deuda, una antigua deuda que atraviesa no solo la trayectoria de Argentina, sino de toda Latinoamérica. Esta deuda, fundante de nuestra historia, ha producido por su parte una de las conflictividades más significativas e intensas. La lucha por la tierra, sobre todo en Latinoamérica, está en la base de muchos procesos revolucionarios, crisis nacionales y experiencias políticas muy variadas.

Históricamente, en Latinoamérica, el acceso y distribución de tierras constituyó uno de los problemas centrales de muchas naciones. La concentración de tierras, y la conformación de latifundios, ha sido una constante, del mismo modo que ha sido una constante la ocupación directa de tierras por parte de campesinos y comunidades indígenas. Estos dos procesos que conviven son las dos caras principales del problema de la tierra en Latinoamérica.

Por un lado, se observa el permanente proceso de despojo que sufrieron los pueblos originarios, y la inequitativa distribución que perjudicó a las poblaciones campesinas: «Vemos así que en América Latina la formación de *haciendas*, *plantaciones* y posteriormente *estancias* conjuntamente con sus correspondientes campesinados subordinados fue el resultado de un proceso prolongado cuyas raíces se encuentran en la evolución del régimen colonial agrario» (Teubal, 2003:138). Estos hechos son fundantes de la gran deuda que aún persiste, pese a las luchas que se dieron y aún se dan, y a los distintos procesos de colonización y reforma agraria que se implementaron para resolverlos.

Por otro lado entonces, se observa la persistente necesidad de enfrentar este despojo. En efecto, el problema de la distribución y acceso a tierras ya era central cuando el gobierno de Artigas proclamó el Reglamento de Tierras de 1815 en el cual se destacaba la función social de la tierra y el acceso a la misma como la vía de inclusión de los más desfavorecidos. A comienzos del siglo XX la Revolución Mexicana se constituyó en un faro para Latinoamérica, fue la lucha de los campesinos que instauró el primer y más importante proceso de reforma agraria del continente. Entre 1934 y 1940 se expropiaron las 2/5 partes de las tierras cultivables de México (Barracough, 1999). Por su parte en Paraguay, se crea el Departamento de Tierras en 1926, como respuesta al problema del acceso a la tierra, y en 1936 con la «Revolución de Febrero» se incorpora la expresión «reforma agraria» planteándose el problema de los campesinos y el acceso a la tierra de forma más integral (Morínigo, 2005). La situación reviste aun hoy un carácter tan agudo que no escapa a los organismos internacionales, como es el caso de la FAO⁴: «Desde la última Conferencia Mundial sobre Reforma

Agraria y Desarrollo Rural (CMRADR), celebrada en 1979, se han hecho esfuerzos por asegurar un mayor y mejor acceso por parte de los más pobres a la tierra y a recursos productivos básicos como la tecnología, el crédito, insumos y el acceso a los mercados. Se han llevado a cabo también procesos de reforma agraria en varios países; algunos con más éxito, otros con menos. Sin embargo, la tierra, o mejor dicho, la falta de ella, sigue siendo un obstáculo para el progreso de millones de campesinos pobres.» (CIRADR, 2006).

Actualmente se observa que gran parte de los movimientos sociales emergentes en las últimas décadas en Argentina y en el continente tienen como objeto de sus demandas la democratización del control de los «bienes» o «recursos» naturales⁵, incluida la tierra. Las poblaciones rurales y rururbanas se organizan para enfrentarse con gobiernos locales, provinciales y nacionales, contra terratenientes, empresas nacionales y transnacionales, etc., en la disputa por el manejo del espacio. La lucha por la tierra ha sido tradicionalmente el foco más nítido de la disputa que podríamos llamar territorial, o sea, por la definición política de la espacialidad. Lo que pareciera suceder en este momento histórico es que, en el contexto de la reconfiguración de los usos del espacio operada por las políticas neoliberales en Latinoamérica, la disputa por la tierra se ha resignificado inscribiéndose en luchas más generales y complejas por el territorio.

Hoy, los conflictos por la tierra -evidentes en muchos de los países latinoamericanos- expresan y denuncian la persistencia de una problemática que no solo no se ha resuelto sino que a la vez se ha actualizado con otros elementos que le imprimen gran complejidad. La tierra, pachamama, antiguo reclamo de pueblos originarios, campesinos, trabajadores del surco, emerge hoy dentro de una trama más amplia de luchas. La disputa por la tierra aparece ahora enmarcada en una conflictividad que podría denominarse territorial y que se desenvuelve en un período histórico signado por el proyecto globalizador neoliberal y por profundas crisis (de representación política, de los Estados-Nación, del proyecto inclusivo de la modernidad, etc.).

En las décadas que transcurrieron para Latinoamérica, entre dictaduras y gobiernos que aplicaron los paquetes de políticas neoliberales, se ha operado no solo un reflujo de derechos sociales adquiridos y una desarticulación de los proyectos revolucionarios, sino que a la vez, aunque con menos visibilidad, se ha ido desarrollando un «reordenamiento territorial» (Domínguez, Lapegna y Sabatino, 2006) o «reestructuración territorial» (Holt-Gimenez, 2006)⁶. El ámbito rural ha experimentado alteraciones profundas. Actividades agropecuarias tradicionales vinculadas a los mercados internos de los distintos países Latinoamericanos han sido desplazadas, por recomendación del Banco Mundial, a favor de nuevos cultivos o actividades económicas exclusivamente orientadas al mercado internacional, como forma de generar divisas para el pago de la deuda externa (Teubal y Rodríguez, 2002).

Encuadramos estos procesos dentro de lo que interpretamos como reorganización territorial. Es decir, entendemos que el actual proceso de globalización neoliberal en Latinoamérica, vía políticas gubernamentales y estrategias empresariales, está produciendo cambios en el control y en los modos de uso de los espacios geográficos y sociales, en síntesis, de los territorios.

En Argentina, puede observarse como perfil más dramático - sin ser el único- del proceso mencionado, la creciente actividad de grupos armados particulares que hostigan a las familias campesinas, y muchas veces participan conjuntamente con fuerzas de seguridad gubernamentales en el desalojo de las mismas. Por los testimonios recogidos, se trataría de lo que se ha dado en llamar «mano de obra desocupada» proveniente de las fuerzas de seguridad (policías provinciales o federales y personal retirado del ejército). Sin embargo, en este país, la presencia policial en situaciones de conflicto de tierras es una constante.

Por su parte, las organizaciones campesinas de Argentina denuncian situaciones en las cuales «empresarios» (mayormente productores de soja) impiden a las familias campesinas «de hacer uso de los territorios comunitarios». En rigor en estos casos no se trata de reclamos de «tierra», por la propiedad o titulación de parcelas, sino que giran en torno de la posibilidad de acceder a fuentes de agua dulce, o a áreas de monte, o bien de evitar la contaminación producida por la agricultura industrial y sus «paquetes tecnológicos». En algunos casos se trata de espacios que ni siquiera son percibidos por los campesinos como de su «propiedad», más bien lo que existe es una relación de uso («derecho» consuetudinario) dada por la tradicional forma de vida (de una «cultura» como ellos señalan), en la cual todos los vecinos o familias campesinas de un determinado lugar, se reconocen.

En el plano del discurso público las organizaciones campesinas también manifiestan la complejidad que va envolviendo a la lucha por la tierra. En declaraciones de organizaciones campesinas del país que forman parte de la Vía Campesina (Movimiento Nacional Campesino e Indígena - MNCI) se observa un pasaje discursivo significativo. Hasta unos años atrás existía el lema: «Tierra, Trabajo y Justicia». Actualmente se observan variaciones: «Reforma Agraria Integral. Soberanía Alimentaria. Territorio, Trabajo y Justicia».

«Soñamos entre todos y todas construir un nuevo poder, que sea popular y desde las bases, donde participen las familias y las comunidades, con autonomía e independencia, y que contribuya a una alternativa política democrática y participativa en conjunto con otros sectores del pueblo.

Amamos la tierra y la naturaleza, nos sentimos parte de ella. Nuestro compromiso es por un cambio social que contemple la recuperación de tierras de familias desalojadas, la vuelta al campo de familias excluidas, y el acceso a la tierra y el agua por parte de quienes quieran trabajarla. Donde no existan más desalojos, cultivos transgénicos, ni empresarios explotadores. Reforma agraria integral / Soberanía alimentaria / Territorio, trabajo y justicia / Globalicemos la lucha globalicemos la esperanza.»

Fragmento de la declaración final del primer Encuentro Nacional por la Reforma Agraria. Mendoza. Noviembre de 2006: <http://200.117.254.211/mncei/17-de-abril-dia-mundial-de-lucha-campesina>

En función de esta cuestión, o sea, la problemática de la tierra y su reactualización «territorial» en el marco de la globalización bajo la conducción de las corporaciones transnacionales, nos proponemos dar cuenta de la conflictividad en el espacio rural argentino. Definiendo, en primera instancia, como unidad de análisis a las *situaciones de conflicto territorial* como aquellos antagonismos que involucren a comunidades campesinas o indígenas, Pueblos Originarios, grupos de pequeños productores, colonos, agricultores familiares, y cuyo objeto en disputa sea la propiedad de la tierra, el acceso a fuentes de agua, los accesos o caminos a áreas de pastura o producción, la explotación de riquezas del subsuelo (gas, agua, petróleo, minerales, etc.), el desmonte o la tala de flora nativa, la contaminación por aplicación de *paquetes tecnológicos* (pulverizaciones con agroquímicos, procesamiento y venteo de productos e insumos agrícolas, afectación de napas por manejo concentrado de efluentes en agricultura o pecuaria, etc.) provenientes del sector industrial, autonomía local en materia de jurisdicción político-administrativa (tributación, justicia, mecanismos de elección de autoridades, etc.). A partir de esta definición hemos realizado un registro de conflictos en el espacio rural de Argentina, destacados por los medios masivos, iniciados o existentes al año 2007 (movilización y conflictividad en torno de la tierra: ocupaciones, sabotajes, marchas, resistencia, desalojos, contaminación, desmontes, privatización del acceso al agua). Las fuentes, que se cruzaron para obtener la mayor cantidad de información sobre las situaciones de conflicto, fueron las publicaciones de organizaciones campesinas, prensa alternativa y prensa tradicional. En lo operativo, para la construcción de la base de conflictos en espacios rurales ocurridos en el año 2007 (entre el 1 de enero y el 31 de diciembre), se ha establecido como unidad de análisis aquellas situaciones de antagonismo social:

- geográficamente delimitadas, y situadas en el ámbito rural,
- protagonizadas por poblaciones rurales (campesinos, indígenas, pobladores afectados, etc.),
- en las cuales lo que está en disputa son bienes naturales (tierra, agua, monte, etc.).

La geografía de la conflictividad rural:

En el marco de concentración y retracción de la estructura agraria, en Argentina existe una legislación de tierras *reparadora* para indígenas (reparación histórica a los pueblos originarios): y desde los movimientos sociales campesinos existe una resignificación del escaso marco legal para *permanecer* en la tierra ante la presión del agronegocio.

Datos sobre la estructura agraria de Argentina:

Agricultura Familiar AF (establecimientos)	218.868
Agricultura Patronal AP (establecimientos)	114.665
Proporción de establecimientos AF sobre total (%)	65,60%
Superficie total Establecimientos (ha)	174.800.000
Proporción superficie en tenencia de AF (%)	13,50%
Superficie media de la AF (ha)	108
Superficie media AP (ha)	1320
Proporción del valor generado por AF	19,30%
Variación % de explotaciones entre censos	-20,40%

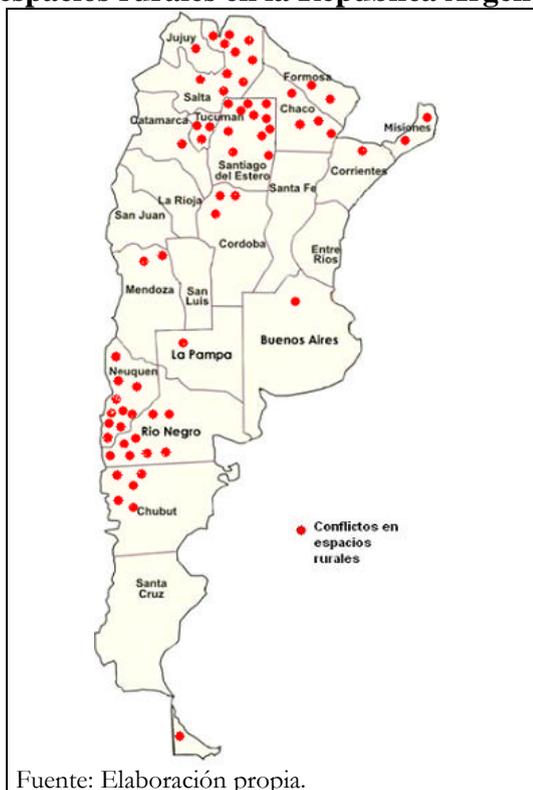
Fuente: CNA 1988-2002 Argentina (elaboración IICA)

El campesinado organizado va asumiendo que se opone a un modelo productivo (el del agronegocio con orientación exportadora y tecnología de gran escala). Es notable que las

organizaciones campesinas de Argentina tengan lemas tales como «una agricultura con agricultores» o «un campo con campesinos», en los cuales se puede observar el antagonismo implícito, la disputa con el modelo del agronegocio. Si tomamos estas frases por su contrario se entiende que la lucha de los campesinos es contra los portadores del modelo que busca un campo sin campesinos o un agro sin agricultores. Pero en general, el escenario es de gobiernos que no avanzan en el tema del acceso y distribución de tierras, y de la democratización del control de los bienes naturales.

Ahora bien, una mirada rápida, del momento actual de la lucha por la tierra (año 2007), a partir de la información primaria y secundaria relevada, muestra procesos crecientes de resistencia campesina al despojo de sus tierras, con una también creciente violencia rural y criminalización de campesinos, en el marco del avance de la frontera agropecuaria operado por el agronegocio, respaldado explícitamente por un gobierno dependiente de las divisas proporcionadas por las exportaciones agrícolas y agroindustriales. Este escenario que describimos queda reflejado en el mapa de las situaciones de conflicto en espacios rurales.

Distribución espacial de los conflictos en espacios rurales en la República Argentina



En Argentina se registraron 66 conflictos ocurridos en 17 provincias⁷, de ellas cuatro dan cuenta del 60% de los casos de conflictos: Neuquén (15,4%), Río Negro (12,3%), Salta (15,4%) y Santiago del Estero (16,9%). En la distribución espacial de los conflictos se observa nítidamente dos aglomerados: Región Patagónica (Neuquén, Río Negro y Chubut) y Región NEA (Noreste Argentino, provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones) y NOA (Noroeste Argentino, provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca). En el primero existe una importante presencia de pueblos originarios, especialmente los Mapuches, mientras que en el segundo se encuentran provincias con presencia importante de poblaciones campesinas y aborígenes (principalmente, Kollas, Guaraníes, Tobas, Wichí y Pilagás).

Además aquello que el mapa expone claramente es el recorte entre región pampeana y región extrapampeana. La conflictividad en los espacios rurales, que tiene como eje el control de los bienes naturales, se concentra en las provincias extrapampeanas⁸. En aquellos lugares donde el campesinado y los pueblos originarios habían podido permanecer, gracias a su lucha y resistencia, y gracias también a que eran requeridos por cadenas agroindustriales reguladas por el Estado, y orientadas mayormente al mercado interno. Lo que sucede es que estos lugares, se «pampeanizaron», es decir pasaron a ser objeto de una explotación agrícola equivalente de aquella desarrollada en la región pampeana (con otros rindes y *modus operandi* para el manejo y control de la tierra y la producción), y por ende a ser de interés de los actores más concentrados del agro. El avance de la frontera pampeana comprometió nuevas áreas, otrora marginales para el desarrollo del capitalismo agrario, habitadas por comunidades campesinas e indígenas. Sin embargo, no es menos importante para tener en cuenta, que las zonas de conflicto son aquellas en las cuales las poblaciones campesinas y las indígenas están organizadas. En un 88% de los conflictos registrados existe organización campesina o indígena. O sea, la conflictividad se desenvuelve en regiones con presencia de comunidades campesinas e indígenas con algún nivel de organización. A partir de los datos podríamos decir que en realidad el conflicto expresa la presencia o conformación de un sujeto colectivo, capaz de producir acciones y de buscar la visibilidad de esas acciones (a través de la aparición pública en los medios de comunicación).

Población rural involucrada:

Con respecto a la población rural involucrada en el conflicto se observa la preeminencia de los indígenas, representan más del 60%. Por otra parte, existen casos particulares en donde se registraron casos en la categoría campesinos/indígenas, es decir, se trata de actores que asumen ambas identidades: esto se explicaría en algunos casos, como en la Unión Campesina Indígena Mapuche, porque existe una construcción política de la identidad que busca romper la dicotomía campesino / indígena; en otros casos, como en Santiago del Estero el asumir ambas identidades se explicaría parcialmente por el hecho de que en Argentina existen familias campesinas que mediante su reconocimiento como comunidades indígenas encuentran una vía para acceder a tierras o conservar las que poseen, debido a que existe un marco jurídico para los pueblos originarios y no así para los campesinos.

Aunque con la menor frecuencia, hacemos hincapié en los casos donde los protagonistas se definen a sí mismos como «campesinos indígenas» o como «indígenas campesinos», pues allí encontramos la expresión más clara de la potencia que tiene la articulación de ambas identidades (más aun cuando se entronca con el problema ecológico). Este es el caso de la comunidad campesino indígena de Puerta Grande, en Santiago del Estero. Allí los pobladores enfrentan a las «guardias blancas» de los inversores que quieren explotar económicamente la región, con el objetivo de preservar «la identidad cultural y el medio ambiente en el único cordón boscoso que atraviesa los departamentos Salavina, Atamisqui y Loreto y que mantiene el equilibrio ecológico de la región».

Bienes en disputa:

En el 47% de los casos de la base se observa que el bien en disputa es la tierra, en tanto que los conflictos en torno a una multiplicidad de bienes (más de uno) representan el 45,5%.

Es decir, si bien es evidente la centralidad del problema de la tierra en los conflictos que protagonizan las poblaciones rurales, también es destacable que la lucha por la tierra se enmarca en una disputa más general por un conjunto de distintos bienes naturales.

Incluso, es interesante tener en cuenta como va surgiendo en los conflictos concretos un cuestionamiento más amplio al modelo de agro que presupone el despojo de tierras de los campesinos e indígenas, el desmonte, o un tipo de uso del ambiente destructivo de la vida. En la comunidad indígena Guaycurú, de Santiago del Ester, que lucha por un predio de 400 hectáreas, amenazado por sembradíos de soja que rodean el monte nativo, las familias organizadas en el Movimiento Nacional Campesino Indígena manifestaron: «el principal problema no es la falta de titularización de las tierras ancestrales, sino el modelo agropecuario, origen de los desalojos, la represión, contaminación ambiental y degradación de los suelos».

Principales acciones realizadas:

En Argentina las principales acciones se centran en las de resistencia (50%) y las interposiciones legales (22,7%). Sin embargo si observamos las acciones a la luz de cada actor social vemos que los indígenas operan a través de acciones legales casi con igual importancia que a través de acciones directas de resistencia. Sin duda esto es resultado de la existencia de marco jurídico para las comunidades indígenas que hace que estas combinen estas dos estrategias.

También es importante tener en cuenta que generalmente, en este tipo de conflictos en espacios rurales, la combinación en el tiempo de diferentes tipos de acción es lo más común. Por ejemplo, en el caso del conflicto de tierras en la zona de Embarcación, Salta, 58 familias indígenas ocuparon en mayo de 2007 las tierras que dicen les pertenecen: «Hemos tomado la decisión de recuperar un territorio que nos pertenece por derecho ancestral y por preexistencia étnica». Sin embargo, dadas las condiciones políticas y jurídicas existentes en nuestro país, esta misma comunidad se encuentra ahora en posición de tener que resistir un posible desalojo por parte de la policía provincial.

No es menos cierto que en estas condiciones del contexto argentino las organizaciones campesinas e indígenas han generado un aprendizaje. O sea, la combinación de acciones, en un amplio repertorio que oscila entre acciones directas (de resistencia y ocupación), legales y de visibilización pública, responde a un conocimiento de las reglas de juego de una realidad rural muy particular. En ella los jueces raras veces fallan a favor de «los pobres del campo», y al contrario muchas veces están implicados con intereses empresariales con metodologías mafiosas, las fuerzas de seguridad estatales y privadas operan conjuntamente en desalojos y hostigamientos, y las denuncias de campesinos e indígenas ante la justicia o la policía local no son registradas o parecen volverse contra ellos mismos. Existen excepciones a estas reglas, como ocurrió con la comunidad de Cañada Larga, en Córdoba. Allí 11 campesinos fueron denunciados de «daño calificado agravado por delito en banda», por haber desalambrado un campo comunitario que un empresario de Buenos Aires había comprado sin previamente determinar si existían allí poseedores con derechos adquiridos y anteriores en el tiempo. La justicia de Cruz del Eje en este caso absolvió a los campesinos y sentenció al empresario a reconocer los daños infringidos a las familias. En este caso, el Movimiento

Campesino de Córdoba (MCC) contó con la capacidad y los recursos para sostener la cohesión en la acción directa de defensa de la posesión, y para afrontar la complejidad de una instancia judicial.

Otro nivel de las acciones presentes en estos conflictos es la violencia que se produce. Aunque no ha sido una variable profundizada en el tratamiento estadístico podemos decir que tanto el Estado como empresarios y terratenientes operan la «fuerza» sobre las poblaciones rurales como medida habitual en estos conflictos. Es común por ejemplo para el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), sufrir el ataque o amenaza de sus miembros. En agosto del 2007, ante un atentado con armas de fuego a integrantes del MOCASE y a un delegado internacional de derechos humanos, la organización denunciaba que «son matones al servicio de una empresa que, desde hace tiempo, quiere hacerse de tierras de habitantes ancestrales de la localidad de Pinto». Del mismo modo, las víctimas de despojo luego se tornan víctimas de otras violencias al querer hacer valer algún derecho. Así sucedió en Santa Victoria Este, Salta, donde la Organización de Familias Criollas (OFC) denunció en primer lugar el desmonte que empresarios como el cantante Chaqueño Palavecino estaban generando en el Chaco Salteño, para luego tener que denunciar las amenazas que, a raíz de la denuncia anterior, estaban ahora sufriendo por este mismo empresario. La violencia institucional o subrepticia de empresarios y terratenientes es una constante en los conflictos de tierras y por los recursos naturales.

Actores sociales en conflicto con poblaciones rurales:

Al interior de los conflictos se observa que en los enfrentamientos, los pobladores rurales, disputan principalmente, y en proporciones similares, con el Estado, las empresas y los propietarios. Puede observarse en el gráfico que se enfrenta a Estado, empresas y propietarios en proporciones similares (30,3%, 33,3% y 31,8 respectivamente). Llama la atención entonces que el Estado aparezca con la misma frecuencia que otros actores del «campo» involucrados en los conflictos con las poblaciones rurales, siendo que debería mediar y velar por el bien común. En cambio el mismo se torna un litigante más en estos enfrentamientos. Así sucede en Villa Tacul, donde la familia Tacul exige la recuperación de las 625 hectáreas que Parques Nacionales se habría apropiado en 1938, y que en la actualidad conforman el Parque Municipal Llao-Llao. Para los mapuches se trata de restablecer su derecho a la tierra: «Volvemos a hacer posesión ancestral de nuestro territorio mapuche, haciendo uso de nuestros derechos fundamentales». La comuna en cambio considera que la ocupación es «ilegítima». Si bien la justicia dictó el sobreseimiento de los acusados al considerar que la ocupación del predio no constituye usurpación, la comuna insistirá con recuperar las tierras mediante las acciones civiles iniciadas.

Otras veces el Estado no solo aparece en toda su complejidad de organismos y procedimientos aparentemente contradictorios, sino que opera directamente en la ilegalidad de acciones de despojo. Así lo denuncia la comunidad Mapuche Plácido Puel, de Neuquén, cuando señala que el municipio hizo intervenir a sus empleados en una «represión» realizada en sintonía con «un supuesto dueño» que pretendía talar uno de los últimos lugares de la zona que aun tiene árboles nativos. Otra evidencia de la mutación del rol del Estado, que pasa de

velar por el bien común a implicarse con los intereses particulares, se observa en la repetida situación de origen en muchos de los conflictos de tierras en Argentina. Por lo general las tierras que adquieren empresarios o reclama el Estado ya están ocupadas por familias campesinas o comunidades indígenas, pero son consideradas «como si estuvieran vacías». Así ocurrió por ejemplo en la comunidad Mapuche Wentrú Tuhel Leufu, Cutral Co, Neuquén. Allí se denunció que «el gobierno de Neuquén entregó nuestras tierras, como si estuvieran vacías, a la petrolera Piedra del Aguila SA». La justicia fallo a favor de la empresa petrolera, intimando a los mapuches despejar los caminos de acceso a los puntos de exploración hidrocarburífera, mientras grupos armados del sindicato de petroleros irrumpían en la comunidad incendiando viviendas con la complicidad de la policía.

Las demandas en los conflictos:

Al analizar las demandas que emergen en los conflictos se observa que las principales demandas son por acceder a la tierra o por no ser desalojados de ella. En efecto, sumando ambas categorías, que giran directamente en torno a la tenencia de la tierra, se observa que es superior al 60%. Sin embargo, debe destacarse que la principal demanda es denunciar y evitar los desalojos de las tierras que se posee, y esto habla de la situación «defensiva» del campesinado y los pueblos originarios en Argentina.

Demandas en los conflictos por país, en %.

Demandas en los conflictos	
Por acceso a la tierra	23,1
Contra Desalojos	37,4
Contra Contaminación	6,6
Contra Mega Emprendimientos	4,4
Contra Mono-cultivo	3,3
Contra Desmontes	15,4
Por Acceso al Agua	7,7
Contra Criminalización	2,2
Total	100

Fuente: elaboración propia.

Si posamos la mirada en los otros tipos de demandas que surgen de la base de datos se observa la importancia de las demandas contra los desmontes (15,4%). De todos modos las distintas demandas deben analizarse de modo conjunto. De hecho las demandas contra desmontes, contra monocultivo, y contra contaminación, generalmente aparecen combinadas. Esto lo podemos ver por ejemplo en el conflicto de Laguna Baya, en Santiago del Estero, donde miembros de la comunidad campesina impidieron que un equipo de siembra directa ingresara en unas tierras en disputa que el empresario ya había desmontado y estaba fumigando. A su vez en este caso, la lucha de los campesinos, según dicen, es contra la criminalización que sufren al defender su modo de vida y su territorio. Aquí 4 campesinos habían sido detenidos. Las demandas que expresan los campesinos y los indígenas se entroncan en la visión o conciencia política que las organizaciones han creado acerca de estar enfrentando un modelo de agricultura como totalidad. Esta parece ser la razón de que las demandas estén articuladas entre si en los discursos de los

protagonistas. Como señalan las familias campesinas de Paraje Las Rosas, ex ingenio Las Palmas, en Chaco: «Esta tierra es nuestra, nosotros vamos a resistir hasta las últimas consecuencias (...). Si esto se vendió, se vendió con la gente adentro (...). Esta tierra es muy linda, y la expansión de la soja es la que nos está desalojando a todos».

Apelación a lo territorial:

En términos generales en el 71,2% de los conflictos registrados en la base existe una apelación al territorio o al uso del espacio, es decir, las poblaciones rurales involucradas en el conflicto expresan abiertamente que esta en juego un problema de control sobre el territorio o el espacio.

A su vez, es importante destacar que la apelación al territorio o al uso del espacio en los conflictos varía en importancia para las dos principales categorías de la variable de población rural. En efecto, la dimensión territorial de los conflictos está presente en casi el 70% de los casos donde están involucradas poblaciones indígenas, mientras que cuando se trata de campesinos se observa que este valor baja al 65% de los casos. Por otra parte, cuando se trata de poblaciones que se asumen como campesinos-indígenas o bien son pobladores o vecinos sin ninguna de las otras dos adscripciones, la referencia explícita al territorio o a formas alternativas de uso de los bienes naturales es intrínseca a los conflictos.

En los relatos de los indígenas se habla de «recuperación del Territorio para reconstruir espacios comunitarios autónomos», como los mapuches desalojados por la empresa Benetton en 2002, que en febrero de 2007 volvieron a ocupar las tierras. Del mismo modo lo expresa la comunidad Guaraní de la Loma en conflicto con el Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal SRL: «Ellos estaban profanando las tumbas de nuestros hermanos enterrados en los cementerios de La Loma para borrar nuestro pasado y nuestro derecho, el territorio, que nos pertenece desde tiempos inmemoriales, en ellos se encuentran nuestros antepasados, nuestra historia, nuestra cultura, nuestro sustento de vida, nuestra riqueza». El territorio tiene la multidimensionalidad de elementos económicos, políticos y culturales. Se trata de la lucha por la defensa de una cosmovisión plasmada en el espacio y en el tiempo. Lo que varía es el nivel de soberanía y autonomía relimada. Algunos pueblos originarios pretenden el respeto de sus derechos sobre la totalidad de los recursos naturales, mientras que otros poseen un cuestionamiento más profundo y buscan un reconocimiento como nación más allá de la nación Argentina.

En el caso de los campesinos la apelación al territorio también es significativa y por lo general va junto a la defensa del modo de vida campesino. Se trata quizás de la conciencia de que la vida campesina no es posible en contextos rurales donde la agricultura empresarial e industrial rige los procesos productivos y de intercambio. El territorio campesino podría expresar justamente el reconocimiento de que la vida campesina no es posible en tanto estrategia familiar aislada, y que la comunidad campesina para desenvolverse debe asumir el control de los procesos productivos, de procesamiento y distribución. Como indican las familias del paraje rural La Libertad, en el departamento de Ischilín, en el norte de Córdoba: «Nuestra lucha es seguir viviendo en el campo, como nosotros queremos, produciendo como sabemos, manteniendo nuestra identidad, nuestros símbolos y nuestros territorios». Si observamos por otra parte en que tipo de conflictos predomina la apelación al territorio o al uso del espacio,

vemos que es en los enfrentamientos con el Estado donde mayoritariamente (85% de los casos) se apela a la dimensión territorial desde los campesinos, los indígenas o los pobladores afectados. Por su parte, cuando son conflictos que involucran a empresas, se invoca lo territorial o espacial en un 74%. Finalmente cuando se trata de propietarios individuales ésta dimensión está presente en el 45% de los casos. Esto probablemente se relacione con el hecho de que en Argentina, durante el 2007, han sido las poblaciones que más apelan al territorio, como las indígenas, quienes más han protagonizado conflictos de tierras, y que además justamente ellas son quienes cuentan con marco legal que reconoce sus derechos y permite dirigir sus planteos territoriales al Estado. Resumiendo, en un sentido general, se desprende, del cruce entre los datos estadísticos y el análisis de la trama de casos, que la apelación a lo territorial no se derivaría de la existencia de múltiples bienes en disputa, sino más bien de una concepción determinada acerca de los vínculos con la naturaleza y del control político sobre esos bienes. Donde aparece lo territorial la disputa en todo caso no es únicamente por el valor material de esos bienes sino también por los sentidos construidos acerca de la forma de utilización de los mismos, donde ciertos usos (los de las empresas o los agronegocios) son incompatibles con determinadas formas de habitar o usar esos espacios (los de los campesinos o indígenas). El tema del «entorno» o el ambiente es remarcado, en los casos registrados en la base a través de la importancia de la variable «apelación a otras forma del ambiente», y en los relatos, charlas y entrevistas en la afirmación de cómo se ha ido dando esa transposición de los límites de la parcela de tierra, es decir, el pasaje de lucha por la tierra a la lucha por el territorio. Y este pasaje para ser comprendido necesita ser enmarcado en un proceso histórico, que para los pueblos originarios ha significado la lucha de pasar del reconocimiento identitario a la soberanía plena de sus tierras ancestrales, y que para los campesinos, se refiere a que su reproducción como sujetos sociales no es posible con el acceso a un «casillero» del clásico asentamiento en forma de «damero», sino que cada vez es más necesario tener una visión panorámica de lo que y quienes rodean a la comunidad. Es que una vez rota la ilusión modernizadora, la diferencia con el otro ya no es una cuestión de escala productiva sino que se trata de una diferencia ontológica. El eje y los actores con los que el campesinado antagonizó históricamente se han modificado, ahora el campesinado es consciente que enfrenta al agronegocio y que entre ellos no es posible encontrar un mínimo divisor común, se contraponen tanto en la lógica y la racionalidad entorno a la producción, como en la relación con la naturaleza. La apelación a lo territorial en los conflictos da cuenta de un proceso que permite ver las transformaciones que ha habido en las dinámicas de reproducción como sujetos sociales de campesinos e indígenas, en

donde el acceso a la tierra no es un fin en sí mismo, sino más bien el inicio o piedra angular de un nuevo horizonte, el de la realización campesina y de los pueblos originarios. La conquista de la tierra es la condición *sine qua non* a partir de la cual se inicia un camino en el que la tierra conforma una tríada vital junto al territorio y la vida digna.

Conclusiones:

Aunque parezca un paradoja, para quienes creen que en este país no hay más campesinos y menos indígenas, lo cierto es que la conflictividad rural argentina en el 2007 está liderada por los pueblos originarios. No olvidemos que estos son los únicos que tienen un *status* específico para el acceso a la tierra, y cuya distinción con el campesinado no es tan nítida como en los demás países de Latinoamérica (aquí aparecen casos donde se fusionan lo campesino y lo indígena). A su vez encontramos una alta referencia a lo territorial o espacial, probablemente a raíz de lo anterior. Un rasgo distintivo del país es la importancia que tienen las acciones de resistencia y a su vez las demandas contra desalojos, que expresan el vigor con el cual avanza el agronegocio sobre las regiones con población campesina e indígena. Es probable que esto explique en parte el enfrentamiento con el Estado y las empresas. Con el Estado las comunidades campesinas exigen normativa apropiada y control sobre la expansión desenfrenada del modelo de agricultura industrial (por ejemplo: creando «reservas» campesinas); y los pueblos originarios que centran su acción contra el Estado para cumpla con el reconocimiento de los derechos consuetudinarios. Con las empresas y los propietarios individuales se entabla el frontal choque por definir el territorio.

La conflictividad alrededor de la tierra se ha ampliado, condensándose muchas veces en la noción de territorio, y otras expresándose en nuevas dimensiones de lucha:

- la protección de la biodiversidad, en el marco de sistemas integrados de producción como el campesino y el agroecológico (variedades de semillas criollas, rotación y combinación de cultivos y actividades, manejo del monte, etc.),
- la defensa de las distintas culturas originarias como formas singulares y sustentables de habitar los ecosistemas,
- la disputa por el control de los bienes naturales en general (agua, minerales, gas, petróleo, etc.),
- la demanda por políticas gubernamentales integrales que tomen la vida campesina como un todo más allá de sus aspectos económico-productivos,
- la puja por ver reconocidos niveles crecientes de autonomía política, o soberanía territorial (no estatal) o instancias autogestivas para la toma de decisiones.

Notas:

- ¹ Este trabajo forma parte de los resultados obtenidos a partir de una investigación financiada por CLACSO.
- ² Investigador del Instituto Gino Germani, Universidad de Buenos Aires; master en Políticas Sociales, FLACSO.
- ³ Investigador del Instituto Gino Germani, Universidad de Buenos Aires; docente de la cátedra de Sociología Rural.
- ⁴ Por sus siglas en inglés: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- ⁵ Tanto en la bibliografía especializada como en los documentos y discursos de organizaciones y organismos se encuentran estas dos formas de referirse a las fuentes de riqueza del suelo y del subsuelo. Por lo general, mientras los tecnócratas de organismos multinacionales y los funcionarios de los gobiernos utilizan el concepto de «recursos naturales», los dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas y los miembros de ONGs comienzan a imponer el concepto de «bienes naturales». El sentido que estos últimos pretenden disputar es la carga mercantilizadora de la naturaleza implícita en el concepto de «recurso natural»: un objeto a ser explotado.
- ⁶ En esta línea pueden considerarse para Argentina las investigaciones que hemos realizado en torno de la contaminación sufrida por comunidades campesinas debido a la actividad del agronegocio en Formosa (Domínguez, Lapegna y Sabatino, 2005), o bien sobre algunos casos de conflictos por los recursos naturales realizado por Giarracca y Wahren (2005), y otros sobre la explotación minera en la Patagonia argentina (Weinstock, 2005). Asumiendo la perspectiva territorial de análisis podemos citar los trabajos con base de datos sobre conflictos territoriales en Argentina del Grupo de Estudios sobre Ecología Política, Comunidades y Derechos, del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la UBA, y el trabajo que publicamos sobre la cuestión de las «territorialidades excluyentes y emergentes» (Domínguez, Lapegna y Sabatino, 2006).
- ⁷ De las 24 provincias que posee la República Argentina, no se registraron casos además de en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Santa Cruz, San Luis, San Juan, Santa Fe y Entre Ríos.
- ⁸ Es significativo que si tuviéramos en cuenta los puntos geográficos involucrados en el reciente conflicto bautizado por los massmedia «campo vs. gobierno», que tuvo por objeto las retenciones a las exportaciones, la distribución geográfica de los mismos serían inversamente proporcional a la de los conflictos por el territorio campesino e indígena, y la democratización del uso de los bienes naturales.

Bibliografía.

- Banco Mundial 2000 *Informe de Investigación sobre Política de Tierras para el crecimiento y la reducción de la pobreza*. Resumen ejecutivo (Washington: Banco Mundial)
- Barracough, Solon 1999 *Land Reform in Developing Countries: The Role of the State and Other Actor*, (Geneva: UNRISD).
- Basualdo, Eduardo y Teubal, Miguel, 1998 «Economías a escala y régimen de propiedad en la región pampeana argentina», ponencia presentada en el XXI Congreso Internacional de la Latin American Studies Association (LASA), Chicago, 24-26 sept.
- Bengoa, José 2006 «Pueblos indígenas, Tierras y Territorios», en Eguren Fernando (editor) *Reforma Agraria y Desarrollo Rural en la Región Andina* (Lima: CEPES).
- Buzzi, Eduardo 2005 *La tierra: para qué, para quiénes, para cuántos*. (Buenos Aires: Ediciones CICCUS).
- CELS 2000 «Derechos Humanos en Argentina», *Informe Anual 2000*, (Buenos Aires: CELS-EUDEBA).
- Centro de Documentación y Estudios 2004 «El Tercer Intento de Reforma Agraria», en *Informativo Campesino* (Asunción: CDE) N°191, agosto.
- CIRADR 2006, *Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR)* en <www.icarrd.org/es/about_conference.html>.
- Domínguez, D.; Lapegna, P. y Sabatino, P. 2005** «Agriculturas en tensión en Colonia Loma Senés, provincia de Formosa», en N. Giarracca y M. Teubal (comp.) *El campo argentino en la encrucijada. Crisis y acciones sociales en el interior del país* (Buenos Aires: Alianza editorial).
- FAO 2006 «Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural: implementación de los compromisos de Porto Alegre» <www.fao.org/sd/dim_in1/in1_060701_es.htm>
- Fernández, Bernardo Mançano 2005 «Movimientos Socioterritoriales e movimientos socioespaciales» en *Revista OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año VI, N° 16.
- Holt-Gimenez, Eric 2006 «Reestructuración territorial y fundamentación de la reforma agraria: comunidades indígenas, minería de oro y Banco Mundial», en Sergio Saber y Joao Marcio Mendes Pereira (orgs.) *Capturando a Terra* (Sao Paulo: Expressao Popular).
- Kay, Cristobal 2003 «Estructura agraria y violencia rural en América Latina», en *Sociologías* (Porto Alegre) año 5, N° 10.
- MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO E INDIGENA, 2007, *Nuestros derechos: la tierra* (Córdoba: MNCI).
- Sabatino, Pablo 2007 «Campesinos y Campesinas en el noroeste de Córdoba. Un acercamiento a sus luchas y propuestas» ponencia presentada al XXVII Internacional Congreso of Latin American Studies Association (LASA) Montréal 5 al 8 de Septiembre.
- Teubal Miguel, Diego Domínguez y Pablo Sabatino 2005 «Transformaciones agrarias en la Argentina. Agricultura industrial y sistema alimentario», en: Norma Giarracca y Miguel Teubal (coord.), *El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencia sociales, ecos en la ciudad* (Buenos Aires, Alianza).
- Teubal, Miguel 2003 «La tierra y la reforma agraria en América Latina» en *Realidad Económica* (Buenos Aires: IADE) N° 200.

La conformación de un imaginario de «Modelo de País» en el discurso presidencial de CFK. El lugar del sector rural

Claudia C. Couso*

Tal como lo señala la actual presidente de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, una de las líneas fundamentales de la política que lleva adelante, consiste en la construcción de un «relato» acerca de un «Modelo de país». Dicho modelo, toma elementos que provienen del peronismo tradicional, complementándose además, con otros que se relacionan con momentos más recientes de la historia, y que pueden ser fácilmente asimilados en términos generacionales a la mandataria de la Nación.

El presente trabajo, fundamentado en un análisis de los discursos presidenciales –desde el inicio del mandato hasta julio de 2008- tiene como objetivo el exponer una descripción de ese modelo propuesto (analizando algunos de los elementos que lo componen) y señalar el lugar que el sector rural tiene dentro del mismo. Se hará hincapié en aquellos discursos previos al conflicto, ya que los mismos no se encuentran fuertemente impregnados por la impronta que el enfrentamiento Gobierno-Campo generó posteriormente.

El análisis discursivo, no implica la evaluación de las acciones políticas llevadas adelante por los mismos actores a quienes se analiza. Las medidas concretas de gobierno que afectan a los diferentes sectores sociales y políticos no condicen necesariamente con el modelo discursivo, por lo cual no se puede hacer una extrapolación en este sentido; pero la fuerza que en este caso conlleva la decisión política de imponer este «relato» valida el análisis discursivo en tanto que el mismo también, lleva implícita una intencionalidad de alineación de fuerzas políticas y sociales, y marca además una línea delimitatoria entre quienes «están con el gobierno» y quienes se constituyen en sus adversarios.

Esta alineación de fuerzas tuvo además una relevancia fundamental en tanto el conflicto con el sector agropecuario se constituyó en la principal problemática que el actual gobierno debió afrontar en estos primeros meses de mandato.

En primer lugar se tendrá en cuenta cuales son los sectores sociales y políticos que conforman el apoyo al gobierno; posteriormente, se expondrán los lineamientos principales que en este sentido han constituido la fundamentación ideológica que tuvo el peronismo en sus orígenes, y que no solo influyen y modelan la idea de Nación expuesta por la actual presidenta, sino que también se reflejan en la visión con la cual se encara el debate con el campo. Finalmente se expondrá cual es dicho modelo propuesto y se lo analizará en función al conflicto que nos interesa.

Los análisis que se tendrán en consideración son los pronunciados por la presidenta de la Nación desde el día que asume su mandato hasta el 17 de julio de 2008, fecha en la cual se cierra un capítulo en la disputa entre el gobierno y sectores del campo y la oposición por la negativa del Senado a la promulgación de la Resolución 125 que establecía las modificaciones en las retenciones para el agro. Los mismos serán considerados no solo en sus aspectos recurrentes, sino que además se hará un análisis cualitativo que no desconocerá el contexto social dentro del cual se manifiesta¹.

La construcción de un «Relato»

Es obvio que todo gobierno apela al discurso para comunicar y lograr adhesiones a sus políticas de gobierno. Además, es cierto que estos discursos no suelen quedarse en la mera transmisión de acciones puntuales, sino que también pretenden mostrar un carácter integrador que de sentido a las mismas. Es decir, que no solo se procura comunicar una «acción de gobierno» sino que además se la pretende incluir dentro de un discurso más integrador, de modo tal que las mismas no sean más que indicios que remitan a un orden superior que los contemple les de sentido y justifiquen su funcionalidad. Ese orden superior, sin embargo, suele estar asentado sobre las necesidades históricas y/ o coyunturales, sin pretender siquiera constituirse en un relato exitoso y con trascendencia más allá de un período limitado.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner intenta ir un paso más allá de estas formas discursivas tradicionales y hace de la conformación de un «relato» una de las principales líneas políticas de su gobierno. Entenderemos por relato a aquella narración lo suficientemente ceñida como para dar cuenta de todas las unidades (elementos y conjunto de elementos) que lo conforman, dándole a los mismos un sentido único y que los trasciende (Barthes, 1970).

Esta construcción del relato es incluso manifiesta en su intencionalidad –por la misma mandataria- en reiteradas ocasiones. La recurrencia a la necesidad del mismo se ve reflejada habitualmente en sus discursos, en los cuáles expresa que el país «*requiere también un nuevo relato y una nueva batalla cultural*»² que conforma según ella una «*reinención que estamos haciendo de la Argentina*»³, el cuál forma parte de «*este proceso de modelo económico que ha logrado reposicionarnos a nosotros y a nuestra gente...*»⁴, «*una mirada diferente de nosotros mismos hacia adentro y hacia afuera de lo que podemos hacer y de lo que podemos transformar*»⁵ y que no es más que «*el testimonio de que hay otro país, de que hay otro relato diferente al que nos quieren convencers*»⁶.

La verificación de la existencia de tal relato queda clara, además, al ver en que en gran parte de los discursos pronunciados, la presidenta no se remite al hecho concreto que convoca, sino que además engloba tal realización (puede ser un anuncio de obra, concreción de la misma, actos protocolares, etc.) a una funcionalidad que va más allá del hecho en si mismo y que forma parte de un modelo del cuál hablaremos y al que hace una alusión constante.

Dicho relato acerca del «Modelo de país» sitúa el comienzo del mismo –según los mismos discursos presidenciales- el 25 de Mayo de 2003, cuando su marido Néstor Kirchner asume la presidencia de la Nación⁷. También es importante señalar que en múltiples ocasiones, no suele hacer diferencias entre uno y otro mandato como si se trataran del mismo. Así queda esbozado, por ejemplo, en múltiples discursos en donde toda distinción es eliminada, pudiéndose entender

para alguien que es ajeno a esta realidad, que se trata de una misma gestión⁸.

Sin embargo, cabe aclarar, que es la narrativa la que sitúa el comienzo de este período portador de un «Nuevo Modelo» en el 2003, pero no el relato en sí mismo, que como tal, solo se explicita sistemáticamente a partir del inicio de gestión de la actual mandataria.

La incorporación de sectores sociales y políticos como paso previo a la constitución del relato

El gobierno de Néstor Kirchner se inicia efectivamente en mayo de 2003, luego de unas elecciones que lo dejaron en segundo lugar con un 22 % de los votos detrás del ex presidente Carlos Menem⁹. Sólo después de que este último renunciara a disputar la segunda vuelta –persuadido de que su alta imagen negativa no le permitiría ganar– es que N. Kirchner se aseguraría su pasaje a la presidencia. Así inicia su mandato, que aunque con muy escasa cantidad de votos que lo consolidarán en su lugar, rápidamente lograría aumentar significativamente su popularidad.

Néstor Kirchner había llegado a su postulación a la presidencia avalado por su predecesor Eduardo Duhalde. Proveniente de una provincia que sólo podía contribuir muy escasamente a sustentar una base electoral y de apoyo a su gobierno, tenía en Duhalde una pieza fundamental a la hora de lograr el respaldo del distrito más grande del país: la provincia de Buenos Aires.

Ir diferenciándose del ex presidente, implicó entonces el disputarle –y finalmente ganarle– gran parte de la base social y política con la que finalmente «se quedó». Desde los primeros tiempos de su mandato fue sumando voluntades: primero fueron algunos movimientos de desocupados que los votaron críticamente pero que luego fueron incorporándose al proyecto, y a escasos par de meses de asumir¹⁰, dirigentes afines al gobierno aparecen liderando otras nuevas organizaciones que tuvieron por fin cooptar voluntades en los ámbitos y espacios sociales que hasta ese momento solo eran afines a los movimientos de desocupados más tradicionales, a la vez, que sus miembros recibían los subsidios y planes sociales del Estado, manejando de esta forma recursos del mismo que se terminaban destinando cada vez en mayor medida a sectores que respondían políticamente al mismo (Couso, 2006).

Lo cierto es también, que más allá de las controversias que suscitaron las políticas de Derechos Humanos de su gestión, la figura y la popularidad del gobierno de Néstor Kirchner, se vio altamente favorecida a partir de esta dimensión que además sumó a ciertos organismos y figuras relevantes que se han destacado por su trayectoria en esta área, produciendo de este modo, un efecto altamente positivo en la sociedad en general.

Durante los tres primeros años de su mandato Néstor Kirchner tuvo una tarea nada fácil en lo que a acumulación de fuerzas también se refiere: lograr poner de su lado a los intendentes del Conurbano Bonaerense. Aliados en los últimos años a Duhalde, fue quizás el trabajo más fino que debió realizar, y que solo se termina de consolidar en la famosa «Plaza del SI» que el 25 de mayo de 2006 se plantea como un ultimátum a quienes deben decidir alinearse a un proyecto que por esos momentos perfila la idea de la reelección presidencial.

Los sectores más tradicionales del sindicalismo argentino y en particular la Confederación General del Trabajo (C.G.T.) encuentran durante el gobierno de Néstor Kirchner una

época que les es propicia. El más fuerte indicador de su fortalecimiento, quizás sea la unificación en la conducción de C.G.T. en julio de 2004 tras cuatro años de encontrarse fracturada en dos sectores. Pero, la central obrera no sólo se encontró fortalecida institucionalmente sino que además es favorecida por la situación macro económica de entonces: *«Cuando la economía crece y el desempleo baja, los sindicatos y los trabajadores a quienes representan vuelven a adquirir la capacidad de reclamo, como está sucediendo en estos momentos, tras dos años de crecimiento macroeconómico del 8% y con una tasa de desempleo que, si bien sigue siendo alta -el desempleo abierto está en el 13,2% y el real, descontado el empleo ficticio generado por los planes para jefes y jefas de hogar, llega al 18%-, ha comenzado a bajar. Resulta lógico entonces que reaparezca el reclamo salarial»*¹¹. Sin embargo, como se señala en la misma fuente *«el reclamo de los próximos paros por reconstitución salarial no será dirigido al Gobierno, como en otros tiempos. «Los paros se los hacemos a las empresas», insisten en sus reuniones, en donde sólo hay palabras de afecto para el presidente Kirchner»*. El poder sindical no será así un problema para el gobierno, sino que incluso será funcional al mismo, facilitándole su participación en la celebración de convenios colectivos de trabajo que serán negociados por gremios y que conllevarán una mayor participación de los sindicatos, a la vez que una mejora en los ingresos de los trabajadores que los mismos representan.

Por otra parte, Néstor Kirchner no solo logra sumar popularidad por la incorporación de ciertos sectores organizados de la sociedad, sino que también es muy probable, que tal como lo señala Rinesi (2004) sea además, debido a que el mandatario fuera *«un producto de la crisis de 2001, con una doble faceta que combina lo confrontativo de Diciembre 2001 y el conflicto de aquellos días, con el aspecto más institucionalista y de orden que tenía Duhalde»*, a lo cual se sumó además el recuperar *«la centralidad de la política, perdida en los '90 a manos de los medios y de la economía.»*¹²

Este panorama de acumulación de fuerzas sociales y políticas, por otra parte debe ser entendido en un contexto en el que se da una revalorización de la política por sobre la economía no solo en el plano de la toma de decisiones a nivel institucional, sino que hay que considerar que esto solo es posible teniendo en cuenta que la crisis del 2001 le quita un poder real de operatoria a los grandes sectores económicos que deberán durante este período reconstituirse financieramente.

Entender entonces, que paso con estos sectores a los cuáles se incorporan durante el gobierno de Néstor K no es un asunto menor a la hora de pensar el modelo de país que propone la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y no lo es, porque es sobre esta articulación de poder (aunque también se puede pensar que la misma responde a la ideología que conforma el discurso) es que podemos pensar, entender y contextualizar el «Modelo de País» que se propone, entendiendo que parte de la clase política y las organizaciones sociales y/ o económicas se incluyen en este proyecto y cuáles quedan por fuera de él (e incluso confrontándolo).

Las diferentes influencias que confluyen en el discurso presidencial de Cristina Fernández de Kirchner

Como ya hemos señalado, los discursos y el «relato» que a través de ellos se pretende conformar, tienen que ser pensados en base a dos elementos previos: 1) la base de apoyo social sobre la que se sustentan; 2) la influencia de las diferentes ideologías y corrientes de pensamiento que los antecedieron y de los cuáles se nutre.

El primer punto se halla explicitado en el apartado anterior (el que explica la adhesión que desde diferentes sectores fue sumando su marido), mientras que en esta instancia se pretenderá dilucidar el segundo.

En este caso nos referiremos concretamente al peronismo, teniendo en cuenta que una de las principales hipótesis del trabajo es que esta constituye la influencia más importante en términos ideológicos, y la más significativa en términos de pensar la disputa Gobierno- Campo. Si bien existen otras influencias que en lo ideológico también resultan relevantes¹³, no nos referiremos a ellas en cuanto a no hacen al tema central que nos ocupa.

El discurso peronista

Cuando en 1945, Juan D. Perón asume por primera vez la presidencia de la Nación, el país se encontraba desde hacía una década inserto en un proceso de industrialización. El mismo, se había originado luego de que a partir de la crisis de 1929, las coyunturas internacionales habían marcado un quiebre del modelo agro exportador. Sin embargo, tal como señalan Portantiero, Murmis (1984) esto no significó un cambio en las estructuras de poder en lo que se refiere a los diferentes sectores sociales, sino un adecuamiento a las nuevas circunstancias. Sin embargo, tal como señalan los mismos autores «*Recién al promediar la década del 40 esta relación de fuerzas entre las clases propietarias rurales e industriales se alterará, por la diferenciación que comienza a operarse dentro de los propietarios industriales por la movilización de las clases populares y por el fortalecimiento adquirido por el Estado, a través especialmente, de su área más proclive a cierta autorización: el ejército. Solo entonces la hegemonía de los hacendados se replugará abriéndose la posibilidad para un movimiento como fue el peronista*»

El modelo de país y las representaciones que la clase obrera tiene de sí misma no son las mismas a partir del peronismo. Los cambios en las estructuras económicas y sociales que se dan durante el primer mandato peronista, son la base sobre la que el justicialismo afianzó aspectos doctrinarios que calaron fuertemente en las clases populares argentinas, dando lugar a una identificación muy profunda que perdurará en el tiempo y formara parte de su modo de pensarse de ahí en más, lo que en términos de James (1999) constituye una «*refundición de la memoria histórica de los obreros argentinos*».

El peronismo aprovechando las circunstancias basará su poder político en el apoyo de las clases obreras, a las que les otorga un protagonismo del que carecían hasta entonces. Tal como señala James (1999), Perón se hace cargo de las demandas populares sobre los derechos de la ciudadanía. Este autor coincide con Laclau (1997) quien considera que se apela a «*elementos 'democráticos populares' dentro de un discurso ideológico, relacionados con un plano de antagonismo social y político que no coincide con el conflicto de clases por lo económico sino lo que ese autor llama el 'antagonismo entre el pueblo y el bloque en el poder'*».

En términos de consignas, se pueden señalar la dignidad del trabajo, la humanización del capital y la responsabilidad social del empleador como componentes de este discurso. También expresiones que hasta entonces habían sido ridiculizadas tales como justicia social, equidad y decencia fueron incorporadas al discurso peronista invirtiendo la connotación que hasta entonces llevaban a cuesta (James, 1999).

En el plano de las relaciones sociales plantea un difuso cuestionamiento a las formas establecidas de jerarquía y a los símbolos de autoridad, sintetizada en el antagonismo entre «*pueblo versus oligarquía*», en un reclamo de igualdad y justicia.

Según Auyero(2001), esto se traduce por un lado en una visión que plantea una movilidad del orden social establecido, mientras que también existe una lectura del peronismo que a partir de los mismos elementos, plantea una completa transformación del orden social.

En una nueva forma de pensar al movimiento –cohesionado entre sí y con su líder- entra también en juego la idea que el peronismo también incorpora, acerca de la negación de la idea liberal que proclamaba la división entre sociedad civil y Estado. Y esta negación viene acompañada de un proceso de incorporación de la masa trabajadora a partir de los sindicatos, aunque también tanto el Ministerio de Trabajo y Previsión como la Fundación Eva Perón operan en tal sentido (James, 1999). Esto termina logrando una identificación de los sectores del mundo del trabajo con el Estado, lo cual es en cierto modo una circunstancia ambivalente que termina provocando la pasividad de la clase obrera, ya que el poder estatal es visto como motor de desarrollo y garantía de justicia, por lo cual se lo deja hacer y se confía en él, aunque su función, avalado por los conceptos incluidos por el peronismo que «*funcionaron a favor de la reproducción de las relaciones sociales capitalistas que existían*» (James, 1999) terminan armonizando los intereses de capital y trabajo a partir de la intervención de un «Estado benévolo».

El Relato de C.F.K.

El modelo de país propuesto

Desde su primer discurso como presidenta de la Nación C.F.K. se refiere a un modelo de país que ella define como «Un modelo económico de acumulación con matriz diversificada e inclusión social» en el que no solo incluye su gestión sino también la de su marido.

Este modelo, al que hace referencia en casi la mitad de sus discursos, muchas veces es asimilado en términos históricos a la proximidad del Bicentenario, al que se intenta contrastar con lo que ha sido la Argentina en la época en que se celebró el Centenario de la Revolución de Mayo. La presidenta se refiere a el país de hace casi ya cien años, como aquel que «*estuvo caracterizado por un festejo reducido a los entonces grupos dominantes en la República*»¹⁴; tratando en contraposición de pensar «*un Bicentenario diferente al Centenario que vivió este país hace casi 100 años. Hace 100 años este país era el principal productor de carne y trigo, exportaba todo, sin embargo los argentinos se morían de hambre y los obreros eran apaleados y fusilados (...) un Bicentenario diferente, con las industrias trabajando, agregando valor a sus productos para seguir sosteniendo el salario y más trabajo para los argentinos; sueño con un campo que cada vez produzca más materias primas pero que les agregue valor aquí, en nuestro país, para dar más trabajo todavía.*»¹⁵. Este aniversario histórico entonces, le sirve a la presidenta para formular, exponer, tratar de consolidar y promulgar, el ideario de país ideal, que intente diferenciarse de ese modelo agroexportador que no solo caracterizó los festejos del Centenario, sino que además, se replica en lo que a números de Balanza Comercial se refiere, en la actualidad¹⁶.

Un discurso que como vemos, toma la generación de empleo como su principal objetivo, respondiendo de este modo a una de las principales problemáticas que aquejaron en términos de su vida cotidiana a la gente de este país en épocas recientes; y en términos ideológicos, vuelve a centrar –tal cual lo hizo originalmente el peronismo- al «trabajador» como actor social destacado en los relatos políticos.

Esta generación de trabajo, es pensada dentro de un contexto de fortalecimiento de la industria facilitado por el Estado (no

tanto como inversor sino por su intervención en el mercado) y que obtenga sus recursos básicamente de las divisas que el campo le otorga y que según señala la misma presidenta, le dan «sustentabilidad a este modelo»¹⁷

La apelación al peronismo como referente también se utiliza al referirse al proceso de industrialización, al cual se considera que se regresa (la presidenta habla de «reindustrialización»¹⁸) contando para ello con el papel facilitador del Estado Nacional¹⁹:

*«Un modelo de acumulación, de matriz diversificada con inclusión social, donde pudimos articular, por primera vez, sectores que parecían antagónicos como la industria y el campo, pero donde además logramos, frente a un comportamiento virtuoso de estos sectores, el comportamiento primero virtuoso del estado que permitió el comportamiento de estos sectores...»*²⁰

*«Un modelo de crecimiento donde además el trabajo vuelve a ser el eje central con todo el impacto que esto tiene en materia de participación del sector asalariado en la distribución del ingreso, y en definitiva también en la distribución de la riqueza»*²¹

y que en términos concretos se traduce en una país que se piensa previsible en cuanto a

*«que definitivamente deja atrás a esa Argentina volátil donde nadie sabía que es lo que iba a pasar el día de mañana con su vida, con su trabajo o con su empresa»*²²

El sector rural en el discurso presidencial

En contraste con las constantes alusiones al proceso industrializador, las menciones al sector rural son escasas en el discurso presidencial antes de que se desate el conflicto entre ambos. El «campo» solo aparece como elemento de la estrategia discursiva presidencial una vez que los representantes del sector se constituyen en actores sociales significativos a raíz de la disputa política que se da como consecuencia de la suba de retenciones a las exportaciones del agro.

Con anterioridad a esto, resultan escasas, las menciones al mismo. Con excepción de las menciones más explícitas dentro de los dos discursos pronunciados ante la Asamblea Legislativa y en los cuáles se hacen referencia a cada uno de los puntos fundamentales de la política gubernamental, solo en unas cuatro ocasiones se hace referencia a la cuestión del campo y solo en forma muy colateral.

También cuando esboza caracterizaciones del modelo vigente -sin especificar a quienes se refiere- hace mención a sectores que son generadores de divisas, a los que en el plano más histórico los señala como privilegiados dentro de un modelo de país con bases sociales inequitativas.

Es claro que el modelo de país «deseado» no encuadra con el rol que el campo ocupa en el sistema económico actual: «Me encantaría vivir en un país donde los mayores ingresos tal vez los produjera la industria. Seguramente estaríamos viviendo en los grandes países desarrollados, donde la industria siempre ha subsidiado al campo»²³. Sin embargo, intenta dejar en claro que «No somos antagonistas campo- industria»²⁴, y es que en realidad no excluye al campo del sistema vigente sino que pretende otorgarle un rol diferente al que, según sus palabras ha tenido tradicionalmente.

En esta primera etapa, resalta en rol de los pequeños y medianos productores, de las economías alternativas en el sector y de la importancia del valor agregado, tanto como generadoras de empleo como así también por lo que significa en términos de intercambio comercial²⁵.

La única mención detallada al sector que hace la presidenta previa al conflicto es en el tradicional discurso anual que se da

en ocasión del inicio del período de sesiones ordinarias del Congreso, en donde señala, dando indicios de lo que serán las medidas posteriores de su gobierno en cuanto al campo: «Yo he definido muchas veces que este va a ser el siglo de los alimentos, la energía y el conocimiento. Somos un país que estamos en condiciones de producir alimentos para más de 500 millones de personas, pero al mismo tiempo, por el alto grado de competitividad que hemos adquirido y tecnología en la producción de esos alimentos y una población que no alcanza a los 40 millones podemos sostener precios internos que permitan calidad de vida a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, y, al mismo tiempo con fuertes saldos exportables que deben ser incrementados en el valor agregado...»

avanzando luego -en el mismo discurso- sobre la necesidad de acuerdos sectoriales, partiendo de los beneficios que los mismos tienen por parte del estado:

«... porque hay un gran esfuerzo de todo el pueblo argentino y de la administración del estado de mantener el tipo de cambio competitivo y los precios internos que le permite ser muy rentable a la exportación. Bueno es entonces que esos sectores a través de acuerdos sectoriales podamos combinar el círculo virtuoso, el sostenimiento y el crecimiento del mercado interno con calidad de vida para los argentinos y aumento en la exportación»

Esos acuerdos sectoriales se presume que implicarían el otorgamiento de financiamientos, y créditos con tasas que inclusive podrían estar subsidiadas por el Estado a las que se refirió al principio del mismo discurso y que estarían destinadas a «sectores vinculados a la producción y a la exportación», de los cuáles no dio mayores especificaciones. En estas escasas referencias que la presidenta realiza con respecto al campo durante toda la etapa previa al conflicto (e incluso durante gran parte del tiempo después de desatado el mismo) si bien resalta el rol de los pequeños y medianos productores (especialmente como generadores de trabajo) omite las diferentes realidades -y todo lo que ello connota- en cuanto a la diversidad de los actores sociales que conforman este sector. Así, una de las principales críticas (y que irán marcando muchos de los *simos* del conflicto que se desarrollará con los ruralistas) omitirá las diferencias que se dan en su seno y que incluye pequeños chacareros, medianos productores, grandes hacendados y *pooles* cerealeros. Esta omisión se irá modificando a medida que el conflicto va avanzando y el planteo opositor al proyecto recalca este aspecto. Tampoco hay en principio una clara distinción entre propietarios de la tierra y arrendatarios, siendo esta una dimensión complejizadora de estos actores sociales que en principio eran presentados uniformemente.

Conclusiones

Es claro que más allá de las intencionalidades (que no son factibles de ser analizadas en términos socio- políticos) la estrategia discursiva del gobierno previa al conflicto (e incluso durante el desarrollo del mismo) posee un nivel de confrontación que debe ser seriamente evaluado por los mismo, en tanto que resultaba lógico que provocará reacciones y la oposición política de este sector. Esto no necesariamente tiene que ser evaluado negativamente: ciertas estrategias políticas pueden implicar la «derrota», «alineación», etc. de algunos sectores (sociales o políticos) en detrimento de otros. Pero lo que sí hay que considerar (en términos de estrategias por parte de los gobiernos) es en que momentos estas políticas deciden ser llevadas adelante, con que niveles de popularidad se cuenta, cuáles son los otros sectores políticos y o sociales dispuestos a apoyarlos; y en este caso en particular, en que medida esta «redistribución» que es

planteada y en la que aparentemente se funda la medida de las retenciones es comunicada a los otros sectores que son señalados como «favorecidos» de modo tal de lograr el apoyo de estos.

En este caso, fue muy tardíamente que el gobierno reaccionó y tomo en cuenta esos aspectos. Ante una oposición que lo acusaba de acumular recursos para engrosar la caja del Estado fue que anunció el «Plan de abordaje integral»²⁶. Pero errónea y tardíamente, apeló a la figura del «pueblo», basada en la vieja tradición peronista como base de apoyo para la medida que pretendía tomar. Si bien este anuncio perfiló mejor la posición gubernamental con respecto a la que se venía teniendo hasta entonces (desde que se había iniciado el conflicto), no se tuvo en cuenta que no se podía ya a esa altura seguir pensando en términos de la sociedad —y de los sectores trabajadores y/o de menores recursos— como un actor homogéneo, en cuanto a que el desarrollo del conflicto había ya generado amplias diferencias en la gente en cuanto a ese tema, y que además contaba con la oposición de gran parte de los medios de comunicación, con los cuáles también había decidido tener una confrontación discursiva desde un poco antes de comenzar el conflicto.

Esto no implica tampoco que nos encontremos ante un error comunicacional que haya impedido transmitir eficazmente un modelo de país que se encontraba en marcha. Los discursos, y todos los elementos de comunicación marcan de algún modo la relación entre los diferentes sectores y actores socio-políticos; pero no son su único componente. Además, tenemos medidas concretas que afectan a cada uno de estos actores y que sitúan a cada sector en un lugar determinado. Dicho lugar, se conformará a través de los intereses que se tienen, y también de las percepciones que de esto se tenga. Inesperadamente en el transcurso de este conflicto muchos sectores se han aliado (seguramente impulsados por intereses diferentes y porque no contrapuestos) en contra de una política gubernamental.

¿Qué paso entonces con las adhesiones políticas que supo acumular Néstor Kirchner en su mandato? ¿Qué papel tuvieron en este conflicto y que posición tomaron frente a él? Es evidente que muchos de ellos siguieron apoyando las políticas gubernamentales. Básicamente, se trata de los sectores que guardan algún grado de organización tales como

el sindicalismo, las organizaciones sociales y las de Derechos Humanos, además de una gran cantidad de dirigentes del Partido Justicialista, en especial aquellos de la provincia de Buenos Aires, y más concretamente del Conurbano Bonaerense. Estos sectores, a través de su encauzamiento organizacional han sabido apoyar fervientemente la política de retenciones propuesta por la presidenta.

Pero ¿Qué paso con el resto? Por un lado tenemos el arco político opositor, que nunca se alinea con el gobierno ni tampoco se podía esperar que lo hiciera en esta ocasión. Pero también se dio una oposición por parte de gran parte del Partido Justicialista (que no solo responde a los intereses partidarios sino también guardan lealtad al lugar en el cuál viven y que los elige), y de sectores urbanos que antaño habían apoyado y avalado con su voto el proyecto kirchnerista. Además del apoyo que el sector agrario tuvo de gran parte de la gente en el interior del país y que se puede explicar por la estructura económica en que estos se hayan insertos.

Mucha de la oposición que también ha generado el proyecto, podría ser pensada a partir de la misma estructuración del discurso presidencial. Si bien en el mismo se deja lugar a las posibilidades de divergencia en cuanto a opiniones y posicionamientos políticos, estos suelen ser pensados como secundarios a la hora de alinearse tras un proyecto surgido de las elecciones o ante lo que constituyen «los intereses de la Patria». Si bien, esto es parte del juego democrático, y de lo que es aceptado por las mayorías como admisible de ser así, es también verdad que la apelación constante a la autoridad que le dan los votos como primera mandataria y a la toma de decisiones en nombre de intereses supremos (aún aquellos de menor relevancia en lo que a la constitución del modelo se pueden referir) hacen que en la práctica se terminen desacreditando opiniones contrapuestas a la oficial²⁷. Esta desautorización a opiniones divergentes suele ser expuesta en los mismos discursos, forzando así la división de aguas entre quienes apoyan al gobierno (más allá de cada una de las medidas concretas del mismo) y quienes cuestionan algunas medidas y que en esta estructuración discursiva automáticamente se alinean (y son alineados por el mismo discurso presidencial) como parte de la oposición que no entiende de los intereses generales de la Nación.

Bibliografía

- Auyero, J. (2001) «La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo», Ediciones Manantial, Buenos Aires.
- Barthes, R. (1970) «Introducción al análisis estructural de los relatos», Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires
- Couso, C. (2006) «Perspectivas y puntos de vista de los integrantes de los Movimientos de Desocupados del Gran Buenos Aires (2002-2004)», Tesis del Magister Scientiae en Metodología de la Investigación» de la UNER Universidad Nacional de Entre Ríos.
- James, D. (2006) «Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 1946-1976», Siglo XXI editores, Buenos Aires.
- Laclau, E. (1977) «Towards a theory of populism», En *Politics and Ideology in Marxist Theory*, Londres.
- Natanson, J. (2004) «El presidente inesperado», Editorial Homo Sapiens, Buenos Aires
- Portantiero, J.C. y Murmis, M. (1984) «Estudios sobre los orígenes del peronismo», Editorial Siglo XXI, Buenos Aires

Notas

* Licenciada en Ciencia Política (UBA), Magister Scientiae en Metodología de la Investigación (UNER), Doc. Auxiliar en «Metodología de la Investigación», Carrera de Ciencia Política, UBA

¹ Cabe aclarar que se toman los discursos como elemento de análisis, ya que el estilo presidencial contempla únicamente esta modalidad como forma de comunicación por parte de su persona. Siguiendo con el estilo que ya había adoptado durante la campaña presidencial, no acepta reportajes ni conferencias de prensa. Incluso, sus discursos suelen ser –en gran parte de los casos– confrontativos con los medios de prensa, a quién rebate en sus argumentos, dando pie a esgrimir sus propios pensamientos.

² Discurso de C. Fernández de Kirchner en el acto de Firma de Convenios Bilaterales en la Ciudad de Quito durante su visita a la República del Ecuador, 21 de abril de 2008. En www.casarosada.gov.ar

³ Discurso de C. Fernández de Kirchner en el acto de Llamado a Licitación para obras de electrificación e ingeniería del Ferrocarril San Martín, 10 de abril de 2008. En www.casarosada.gov.ar

⁴ Discurso de C. Fernández de Kirchner en el acto de Conmemoración del 53 aniversario del Bombardeo a la Plaza de Mayo, 17 de junio de 2008. En www.casarosada.gov.ar

⁵ Discurso de C. Fernández de Kirchner en el acto de Llamado a Licitación para obras de electrificación e ingeniería del Ferrocarril San Martín, 10 de abril de 2008. En www.casarosada.gov.ar

⁶ Discurso de C. Fernández de Kirchner en el acto de Inauguración de la fábrica textil «Santa Ana», en Puerto Tirol, Provincia de Chaco, 21 de mayo de 2008. En www.casarosada.gov.ar

⁷ Así lo señala en 35 discursos diferentes.

⁸ En 5 ocasiones C.F.K. hace referencia a «*estos 4 años y medio*» asimilando ese tiempo a su gestión. Mientras en dos de estos discursos (el del día de su asunción y otro pronunciado el 27 de diciembre de 2007) se limita a hablar de los logros, en otros tres (del 10/01, 01/03, y 31/03 del 2008) va más allá, «confundiendo» ambas gestiones cuál si fueran una sola.

⁹ El ex presidente, de todos modos, lo había aventajado por muy escaso margen, ya que solo contó con el 24,3% de los votos.

¹⁰ Más precisamente en el acto que el 26 de julio del 2003 se realiza en conmemoración a la figura de Eva Perón.

¹¹ Mención a un informe realizado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría que dirige Rosendo Fraga. En **Ana Gerschenson: «Argentina: ‘El regreso de la patria sindical’», Diario La Nación, 16 de enero de 2005.**

¹² Rinesi, E.: «Quién es Kirchner?». En Natanson J.: «El presidente inesperado», Editorial Homo Sapiens, Buenos Aires, 2004.

¹³ Básicamente nos referimos a aquellas que marcaron períodos históricos más recientes en el país y que se vinculan a la década de los 70 y también a aquellas surgidas a partir de la lucha por los DDHH.

¹⁴ «Discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el ‘Acto de anuncio de la creación de un polo científico tecnológico’ en el predio de las ex bodegas Giol, en Palermo», 23 de enero de 2008. En www.casarosada.gov.ar

¹⁵ «Discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el ‘Acto por la Democracia’ en Plaza de Mayo», el 18 de junio de 2008. En www.casarosada.gov.ar

¹⁶ Tal como señala la misma presidenta: «está el record de exportaciones que me anunciaba ayer el señor ministro de Economía, de diciembre a diciembre un crecimiento del 34 por ciento. Y la cifra, de año a año, de los 46.000 millones de dólares que exportamos y que también fue en su momento una cifra record en el 2006, más de 55.000 millones del 2007, lo que significa una aumento de año a año también del 22 por ciento y del 20 por ciento el superávit de diciembre de 2006 al 2007...» («Discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Acto de lanzamiento de la licitación de la obra de interconexión energética Comahue- Cuyo», el 18 de enero de 2008)

¹⁷ «Discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el ‘Acto de Inauguración de viviendas en el Municipio de José C. Paz, provincia de Buenos Aires’», el 17 de enero de 2008

¹⁸ Ídem anterior

¹⁹ En este sentido, la presidenta da un paso más allá cuando en su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa señala «*Yo soy keynesiana*»

²⁰ «Discurso de Cristina Fernández de Kirchner ante la Asamblea Legislativa», 1 de marzo de 2008. En www.casarosada.gov.ar

²¹ «Discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el Acto de adjudicación de obras para la ejecución del proyecto Circunvalar Rosario, Provincia de Santa Fe», 31 de enero de 2008.

²² «Discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el Acto realizado por la Federación Nacional de Camioneros», 4 de marzo de 2008

²³ «Discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el Acto de asunción de mando en el Congreso de la Nación ante la Asamblea Legislativa», 10 de diciembre de 2007. En www.casarosada.gov.ar

²⁴ Palabras pronunciadas por la presidenta durante una visita suya a la ciudad de Necochea, el 4 de febrero de 2008.

²⁵ Ver discurso pronunciado por la presidenta en una visita a una granja avícola el 1/02/08

²⁶ Las referencias al mismo se pueden encontrar en el discurso pronunciado por la presidenta el día 11 de abril de 2008. En www.casarosada.gov.ar

²⁷ Esta apelación al voto la podemos ejemplificar cuando la presidenta dice: «...luego de que el pueblo con su voto inapelable dice quién conduce; entonces después, todos los argentinos, pensemos como pensemos y hayamos votado como hayamos votado, debemos ir atrás, no de un hombre y una mujer, sino de un proyecto y de un país que es lo que nosotros estamos pidiendo a todos los argentinos». (Acto de inauguración de obras en Necochea, 4 de febrero de 2008); mientras que en lo que se refiere a la primacía de los intereses del país señala: «...esto es también lo que finalmente tenemos que poder separar: el gobierno, al cual cualquiera tiene el derecho de criticar y oponerse, y los intereses del país, a los que todos, cualquiera sea nuestra posición política, tenemos la obligación de defender» (Acto en la Casa de Gobierno de Firma de Convenios con municipios en el marco del Programa de Uso Racional y Eficiente de energía, 12 de marzo de 2008), reafirmando este punto de vista el día posterior cuando en el discurso realizado en el acto de inauguración de la ruta nacional 81 en la provincia de Salta destaca que: «*Más allá de las pertenencias ideológicas todo el mundo tiene derecho a pensar, a sentir y a militar en el espacio político que mejor le parezca, pero cuando hay que defender los intereses de los argentinos tenemos que estar en un solo lugar: el lugar de la Patria, el lugar de los argentinos*»

El conflicto que surgió hace escasos meses en torno al aumento de las retenciones móviles exige poner en tela de juicio la política económica encarada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, así como muchas de las reivindicaciones ejercidas por los distintos sectores que conforman el colectivo denominado eufemísticamente «el campo» en la prensa. Antes de comenzar, cabe señalar que este conflicto no se ha dirimido al momento de escribir este trabajo, por el contrario, las medidas de protesta contra el gobierno no han menguado.

A modo de introducción, me parece importante discutir cuál es la realidad que se esconde bajo el engañoso título de «el campo». El sector agropecuario argentino, con escasa participación en el PBI, pero con altísima participación en las exportaciones, fuente de ingreso de divisas por antonomasia, comprende realidades muy dispares e incluso contradictorias. Los complejos productores de oleaginosas, en particular, los productores de soja, son los que han registrado un mayor crecimiento en los últimos cuatro años, debido a mejoras en la productividad (fruto del uso cada vez más frecuente de semillas transgénicas) y, principalmente, al vertiginoso aumento del precio internacional de aquellos productos. Este último fenómeno es, a su vez, consecuencia del crecimiento de la demanda mundial de alimentos, que disparó un proceso de inflación mundial, a partir del incremento en los precios de los alimentos (o agflation, tal su nombre en la jerga).

En un contexto de aumento de productividad, precios internacionales favorables, un tipo de cambio alto que favorece la exportación y numerosas políticas de subsidios a la producción nacional provistos por el estado argentino, la tasa de ganancia del sector agropecuario (el sector agrícola, en rigor) ha crecido desproporcionadamente en el último lustro. Conviene recordar que estos beneficios extraordinarios no son fruto de una mejora tecnológica sustancial (renovación de capital) ni de un aumento significativo de las tierras cultivadas, sino del aprovechamiento de una más que favorable coyuntura internacional y de un modelo económico intencionalmente ideado para conveniencia de este sector.

Esto supone el planteo de un nuevo interrogante: ¿quién se apropia de estas ganancias extraordinarias? La propiedad de la tierra en nuestro país se encuentra fuertemente concentrada, es decir, es una minoría de grandes productores y pools agropecuarios la que detenta más de la mitad de los suelos en cultivo de la Argentina. Asimismo, son precisamente los grandes productores quienes gozan de mayor representatividad y capacidad de gobierno en las organizaciones que expresan los intereses de los productores agropecuarios, en particular, la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, la Federación Agraria y Coninagro. Una mayoría de pequeños productores posee tierras de reducida extensión y ostenta un débil poder de expresión dentro de tales instituciones, aunque es insoslayable que aquéllos han participado también del meteórico ascenso de la

rentabilidad agropecuaria, que también trajo aparejado una revalorización de los terrenos.

Queda claro entonces que se trata de un sector que se encuentra en pleno auge económico, cuya importancia en la economía nacional es sustancial, no a raíz de su contribución al PBI (que como dijimos, es pequeña), sino por dos razones fundamentales: en primer lugar, las exportaciones agropecuarias permiten el ingreso al país de divisas, que son necesarias para afrontar los compromisos con los acreedores privados y organismos multilaterales de crédito (problema de gran preocupación para la actual gestión); en segundo lugar, la oferta agropecuaria, de estructura claramente oligopólica, juega un papel crucial en la determinación del precio de los alimentos en el mercado interno. Dado que estos precios son el principal componente de la canasta básica alimentaria, sus aumentos comportarán, ceteris paribus, aumentos en las tasas de pobreza e indigencia, y obligarán la renegociación de mayores salarios en las paritarias. Por último, creo conveniente recordar que el sector agropecuario se caracteriza por una elasticidad producto-empleo baja, salarios reducidos y condiciones laborales precarias, lo que invita a pensar que no es precisamente el peón rural quien goza de mayor participación en la elevada tasa de ganancia.

Para comprender la naturaleza del conflicto, es indispensable caracterizar el modelo económico en el seno del cual éste tiene lugar. La economía argentina atraviesa, desde hace por lo menos cuatro años, un proceso de recuperación nunca antes visto en su historia. Con tasas de crecimiento anual cercanas al 10% y una tasa de desempleo que se redujo a menos de la mitad de su valor, las cifras oficiales describen un panorama muy alentador. Los pilares sostenedores de esta fenomenal recuperación económica fueron y son el tipo de cambio alto, la promoción del consumo privado y el superávit fiscal y comercial. Está claro que estos cuatro elementos se requieren mutuamente, es decir, no se trata de una feliz coincidencia de indicadores agradables. Muy por el contrario, forman parte de un rompecabezas cuidadosamente diseñado para satisfacer dos objetivos: recuperar la economía argentina luego de la profunda crisis del 2001 y afrontar en tiempo y forma el calendario de pagos de la deuda externa, en aras de recuperar «la confianza exterior» en nuestro país.

Nos hallamos entonces en un contexto en el cual el flujo de ingreso de divisas se sostiene con las exportaciones y el superávit fiscal se apoya en una estructura tributaria fuertemente regresiva, en la que priman los impuestos al consumo, mayor y más dinámico componente del PBI. Es por esta razón que el gobierno se ha ocupado de mantener el tipo de cambio alto (dólar caro, peso barato, por abundar en tautologías) de modo de estimular la exportación de productos primarios, prestando escasa atención al daño que esto produce a una industria nacional todavía incipiente y dependiente de la importación de insumos a precio dólar. Más aún, el gobierno ha desarrollado un conjunto de subsidios a la producción

agrícola, que hacen caer el costo relativo de tales emprendimientos, ya bajo de por sí en un país caracterizado por elevada fertilidad de los suelos y bajos salarios en el ámbito rural.

La cómoda posición de los productores agropecuarios no solo se vincula a la importancia que éstos revisten dentro del actual modelo económico, sino que posee una notoria raigambre política. La clase terrateniente detenta un gigantesco poder político en nuestro país ya desde comienzos del siglo XX, posición que no se ha alterado significativamente en ningún período de nuestra historia (y mucho menos, de nuestra historia reciente). Es claro que los intereses de esta clase no se encuentran en oposición con el actual modelo económico, sino por el contrario, en firme consonancia con el mismo. Es en este contexto que el gobierno decidió, a comienzos de este año, imponer un plan de retenciones móviles. Esto implica que aquellos productores favorecidos con mayores precios internacionales pagarían mayores retenciones, carga que se retrotraería una vez que tal coyuntura se revirtiese. Si bien el advenimiento de tal gravamen no afecta sensiblemente el carácter regresivo de la actual estructura tributaria argentina (cuyo potencial redistributivo es débil), es indudable que se trata de una iniciativa favorable en términos de la redistribución del ingreso. En efecto, la aplicación de mayor carga fiscal sobre aquellos sectores que perciben una renta mayor es el principio elemental (y hasta tautológico) de todo sistema fiscal progresivo.

Las entidades ruralistas (que como aclaramos previamente, representan los intereses de los grandes productores y pools agropecuarios, y no los de los pequeños productores) calificaron a este impuesto de confiscatorio y enarbolaron medidas de protesta sobre la base de la crítica a un estado que busca «repartir la circunstancial abundancia de un sector»¹. Mucho hay de cierto y de falso en ese argumento. Efectivamente, tal abundancia es circunstancial en el sentido en que es consecuencia de cambios en el precio internacional de los commodities (variables exógenas, en una economía pequeña y tomadora de precios como la nuestra) y no de mayor inversión en el sector. En tal sentido, elevar la carga fiscal sobre aquella no resulta más que una alternativa sensata. Por otra parte, tal abundancia no es circunstancial en el sentido de que es sostenida mediante la sistemática compra de divisas por parte del estado (con el fin de mantener el tipo de cambio alto) y los subsidios a la producción. En tal sentido, las retenciones nada tienen de «confiscatorio» (si es que tal categoría existe), sino que meramente adjudican mayor presión fiscal a los más beneficiados por el actual modelo. A mi entender resulta claro que el actual modelo económico preserva y refuerza el modelo de acumulación implementado en la última dictadura militar y fortalecido durante los '90: una economía basada en la exportación de materias primas, con un débil desarrollo de la industria (sin políticas adecuadas de promoción de la actividad industrial, ni un esquema cambiario que permita tal iniciativa) y fuertemente dependiente de la coyuntura económica internacional (que se manifiesta, en este caso, en los cambios en los precios de los commodities). La concentración de poder económico y político en los pools agropecuarios, en los monopolios petroleros y demás sectores vinculados a la oligarquía terrateniente nacional es una lógica consecuencia del modelo vigente. El actual conflicto de las

retenciones pone de relieve la reticencia de los sectores poderosos a aceptar medidas redistributivas que los perjudiquen, aún en los casos en que su tasa de ganancia sea considerablemente alta. Dicho de otro modo, ha quedado claro que aún cuando la tasa de ganancia ascienda a niveles astronómicos (como ha ocurrido, sin lugar a dudas, en el sector agropecuario), el empresariado no estará dispuesto a tolerar aumentos en la carga fiscal sobre aquella.

Es por esta razón que la redistribución del ingreso (problema de cabal importancia en un país donde la tasa de pobreza excede el 20%) no puede construirse sobre la base de un modelo de acumulación que es regresivo en su naturaleza intrínseca. Las medidas «positivas» como los impuestos a las ganancias (las retenciones, en este caso, funcionan precisamente en ese sentido) no son capaces de revertir, ni tan siquiera de menguar, la asimetría existente entre el poder concentrado en la burguesía agroexportadora nacional y los trabajadores explotados por ésta última. No hay que olvidar que, como ya se mencionó, no son los pequeños productores los actuales perdedores en el esquema vigente (dado que su rentabilidad también ha aumentado a la par de los precios internacionales y sus tierras se han revalorizado significativamente, dándoles la posibilidad de arrendarlas en caso de que la actividad agropecuaria no les resulte rentable, y proveyéndoles así una suerte de «seguro contra pérdidas») sino la masa de trabajadores rurales, cuyos salarios no se indexan al precio de la soja y cuyas condiciones laborales no han experimentado mejora alguna. De igual manera, las paritarias se negocian en base a cifras de inflación que no reflejan el verdadero aumento del precio de la canasta básica alimenticia, en virtud de la manipulación discrecional de información que se da en el INDEC. Ninguna de estas preocupaciones integra la agenda de la protesta actualmente conducida por las entidades agrarias. Por último, me parece indicado señalar que las retenciones móviles no deben ser interpretadas como un «giro» en las políticas públicas ni mucho menos como un cambio en el modelo económico. De hecho, el gobierno mantiene como prioridad principal el mantenimiento del tipo de cambio alto, médula dorsal del modelo agroexportador, como también los subsidios a la producción agrícola. Tampoco se ha visto una política redistributiva concreta en los últimos cinco años; las mejoras en los indicadores de pobreza, indigencia y desempleo parecen mucho más fruto de la recuperación económica per se que de una política específica orientada en tal dirección. Las relaciones de hegemonía de clases no se han visto sensiblemente afectadas en el actual ciclo de recuperación económica. Las retenciones móviles, a mi criterio, no persiguen una finalidad redistributiva sino que apuntan a asegurar el superávit fiscal del gobierno (la otra piedra angular del modelo actual).

Las políticas del actual gobierno apuntan a sostener el modelo de país granja que beneficia, precisamente, a los productores «del campo». Las retenciones móviles no son más que una gota de aceite en un balde de agua, inevitablemente ésta acabará por diluirse. Si algo ha quedado claro en este conflicto, es que las medidas fiscales progresivas nada pueden hacer frente a la inexorable realidad de un modelo económico que concentra la abundancia (la estructural y la circunstancial) en manos de unos pocos.

Notas:

¹ Gabetta, Carlos, Oportunidad y desconcierto en «Le Monde Diplomatique», mayo 2008, edición argentina, página 3

Lavboratorio

Orientaciones para los colaboradores

REGLAMENTO

Con el objeto de facilitar la publicación de los trabajos, se indican las orientaciones generales para su presentación.

Los trabajos deben ser de mediana extensión y presentar un desarrollo sustantivo de la problemática elegida.

Deben ser inéditos.

PREFERENTEMENTE, los artículos enviados no deben ser sometidos en forma simultánea a la consideración de otros Consejos Editoriales. En caso de que ello ocurra, los autores deberán informar al Consejo Editorial de esta Revista.

La evaluación por parte del Consejo Editorial es de carácter anónimo y no puede ser recurrida o apelada ante ninguna otra instancia de evaluación.

Los trabajos deben enviarse con un resumen de no más de cinco (5) líneas. Deben consignarse además del nombre del/los autor/es, la nacionalidad (en caso de no ser argentino) y una línea que dé cuenta de la inserción académica y/o profesional.

Cada número de Lavboratorio incluye dos clases de escritos: a) "artículos" de mediana extensión de no más de doce (12) páginas, a razón de 3200 caracteres por página, incluidos los espacios; b) "informes de avance" de investigaciones acreditadas oficialmente en instituciones de estudios superiores; los mismos deben tener una extensión de no más de 3 (tres) páginas, a razón de 3200 caracteres por página, incluidos los espacios.

Los trabajos deben enviarse por correo electrónico hasta la fecha establecida para cada número a e_lavbor@mail.fsoc.uba.ar La presentación será en procesador de texto Word o similar, evitando utilizar estilos de párrafo predefinidos por los procesadores de texto (sólo se admitirá el uso de las negritas y/o subrayados para los títulos de los apartados). Los cuadros y gráficos deben enviarse además en forma separada, con todos los datos en el original (no con fórmulas o referencias a otras planillas), en planilla de cálculo Excel o similar, sin colores (sólo se admitirán en escala de grises). En todos los casos, debe especificarse en nombre del archivo, el procesador y la planilla de cálculo utilizados.

Para los casos de los "Informes de avance", el/los autor/es deben especificar la denominación de la investigación, el cargo desempeñado en la misma, las fechas en las que se realizó y el nombre de la institución de estudios superiores en la que tenga sede.

La bibliografía debe consignarse con exactitud: apellido y nombre del /los autores; título completo y subtítulo (cuando corresponda); editorial; ciudad y año de publicación. Si se trata de una publicación periódica, debe indicarse número y fecha de aparición.

El Consejo Editorial se reserva el derecho de efectuar los cambios formales que requieran los artículos, incluyendo los títulos, previa consulta con el autor. En caso de que los cambios excedan la dimensión formal, el artículo será remitido nuevamente al/los autor/es para que personalmente realicen las correcciones sugeridas. En estos casos, el/los autores deberán reenviar el escrito en la fecha que le comunique el Secretario Editorial.



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
SIMEL, REGIÓN BUENOS AIRES
CARRERA DE SOCIOLOGÍA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GINO GERMANI